

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

16ª REUNIÓN — 9ª SESIÓN ORDINARIA — 24/25 DE JULIO DE 1991

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor **EDUARDO MENEM**

del señor vicepresidente 1º del Honorable Senado,
doctor **LUIS A. J. BRASESCO**

y del señor vicepresidente 2º del Honorable Senado,
doctor **JUAN RAMÓN AGUIRRE LANARI**

Secretario: señor **HUGO RAÚL FLOMBAUM**

Prosecretarios: señores **MARIO DÉLFOR FASSI** y **DONALDO ANTONIO DIB**

FUNCIONARIOS INVITADOS:

Señor Ministro de Economía,
Doctor **DOMINGO CAVALLLO**
Señor Subsecretario de Finanzas Públicas,
Doctor **CARLOS TACCHI**
Señor Subsecretario de Relaciones Institucionales,
Doctor **GUILLERMO SEITA**
Señor Subsecretario de Combustibles,
Doctor **BERNARDO LUIS BELLER**

SENADORES PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan Ramón
BENÍTEZ, Alfredo L.
BITTEL, Deolindo F.
BRASESCO, Luis A. J.
BRAVO, Leopoldo
BRAVO HERRERA, Horacio F.
BRITOS, Oraldo N.
CONCHEZ, Pedro A.
COSTANZO, Remo José
FIGUEROA, José Oscar
GASS, Adolfo
GENOUD, José
GURDULICH de CORREA, Liliana
JIMÉNEZ MONTILLA, Arturo I.
JUÁREZ, Carlos A.
LAFFERRIÈRE, Ricardo E.
LEÓN, Luis Agustín
LOSADA, Mario Aníbal
LUDUENA, Felipe
MAC KARTHY, César
MALHARRO de TORRES, Margarita
MARÍN, Rubén Hugo
MAZZUCCO, Faustino M.

MENEM, Eduardo

NIEVES, Rogelio J.

POSLEMAN, Eduardo A.

RIVAS, Olijela del Valle

RODRÍGUEZ SAA, Alberto J.

ROMERO FERIS, José A.

SAADI de DENTONE, Alicia

SAMUDÍO GODOY, Wilfrido

SÁNCHEZ, Libardo N.

SOLANA, Jorge D.

SOLARI YRIGOYEN, Hipólito

STORANI, Conrado H.

TRILLA, Juan

VACA, Eduardo P.

VELÁZQUEZ, Héctor

AUSENTE, POR ENFERMEDAD:

SAPAG, Elías

AUSENTE, EN COMISION:

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTES, CON AVISO:

AMOEDO, Julio A.

GROSSO, Edgardo Roger M.

MOLINA, Pedro E.

OTERO, Edison

RUBEO, Luis

SUMARIO

1. Por invitación del señor presidente del Honorable Senado, el señor senador por Río Negro Faustino M. Mazzucco procede al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. (Pág. 1270.)
2. Moción del señor senador Rodríguez Saá para aprobar el plan de labor para la sesión de la fecha. Se aprueba. (Pág. 1270.)
3. Moción del señor senador Rodríguez Saá para postergar hasta el 1º de agosto, o hasta la primera sesión que se realice con posterioridad, la preferencia acordada para los proyectos de ley sobre demandas contra el Estado e intervención federal a las provincias. (S.-1.353/90 y S.-14, 118, 193 y 327/91.) Se aprueba. (Pág. 1271.)
4. Sesión secreta. (Pág. 1271.)
5. Homenajes:
 - I. A la memoria del senador por Córdoba, mandato cumplido, Fernando Mauhum. (Página 1271.)
 - II. A la memoria del ex senador por el Chaco Armengol Roque Moya. (Pág. 1275.)
 - III. Con motivo de cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento de los ex presidentes de la Nación don Juan Domingo Perón, don Hipólito Yrigoyen y don Carlos Pellegrini. (Pág. 1277.)
6. Manifestaciones del señor senador Solari Yrigoyen y otros señores senadores con respecto a la lectura de la nómina de los asuntos entrados. (Pág. 1277.)
7. A moción del señor senador Menem se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley por el que se aprueba el Tratado para la Constitución de un Mercado Común del Sur (Mercosur). (P.E.-42/91.) (Pág. 1278.)
8. Consideración sobre tablas del proyecto de ley en revisión sobre financiamiento del régimen nacional de previsión social, modificación del sistema tributario, modificación de la ley del FONAVI, derogación de los regímenes de jubilaciones especiales, impuestos a los bienes no afectados a la actividad productiva y destino de los recursos provenientes de las privatizaciones. (C.D.-47/91.) Se aprueba con modificaciones. (Pág. 1297.)
9. Manifestaciones del señor senador Benítez con respecto al proyecto de comunicación del que es autor por el que se solicita la suscripción de un convenio entre Ferrocarriles Argentinos y la Dirección General de Fabricaciones Militares. (S.-457/91.) Se levanta la sesión por falta de quórum. (Pág. 1388.)
10. Apéndice:

Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 1389.)

—En Buenos Aires, a las 21 y 41 del miércoles 24 de julio de 1991:

Sr. Presidente (Menem). — La sesión está abierta.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Menem). — Invito al señor senador por Río Negro don Faustino M. Mazzucco a izar la bandera en el mástil del recinto, que quedará a media asta como consecuencia del reciente fallecimiento del ex senador por el Chaco sacerdote don Armengol Roque Moya. Invito a los señores senadores y al público a ponerse de pie.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Faustino M. Mazzucco procede a izar a media asta la bandera nacional en el mástil del recinto.

2

PLAN DE LABOR

Sr. Rodríguez Saá. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Solicito que se apruebe el plan de labor parlamentaria que ha sido acordado por los presidentes de bloque...

Sr. Velázquez. — ¿Por qué no habla más fuerte y sin temor?

Sr. Rodríguez Saá. — No hay temor. Creí que estaba habilitado el micrófono...

Sr. Cass. — Estaba hablando solo.

Sr. Rodríguez Saá. — ...y como no lo estaba, no se pudo oír bien.

En concreto, hago moción de que se apruebe el siguiente plan de labor parlamentaria, que ya ha sido acordado por los señores presidentes de bloque: en primer lugar, sesión secreta; en segundo término, también en forma secreta, sesión en Tribunal de Juicio Político, para lo cual la Presidencia ha citado a los señores senadores.

Tercero, homenajes a los ex senadores Mauhum y Moya y a los ex presidentes Juan Domingo Perón, Hipólito Yrigoyen y Carlos Pellegrini.

En cuarto lugar, postergación hasta la primera sesión de agosto o la siguiente, de la preferencia aprobada para considerar el proyecto sobre intervenciones federales a provincias, conforme al acuerdo realizado en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales y lo aprobado por los presidentes de bloque.

Subgrupo 9: Política Energética.

Subgrupo 10: Coordinación de Políticas Macroeconómicas.

Dr. Bernardino H. Saguier Caballero.
Subsecretario de Relaciones Exteriores.

Sr. Presidente (Brasesco). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

— En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Brasesco). — Por unanimidad queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados. *(Aplausos.)*

8

FINANCIAMIENTO DEL REGIMEN NACIONAL DE PREVISION SOCIAL

Sr. Presidente (Brasesco). — De acuerdo con el plan de labor parlamentaria aprobado por este cuerpo, corresponde tratar el proyecto de ley en revisión sobre financiamiento del régimen nacional de previsión social, modificación del sistema tributario, modificación a la ley del FONAVI, derogación de los regímenes de jubilaciones especiales, impuestos a los bienes no afectados a la actividad productiva y destino de los recursos de privatización.

Sr. Britos. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Brasesco). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Britos. — ¿Estaba acordado el tratamiento sobre tablas de este proyecto?

Sr. Presidente (Brasesco). — Sí, señor senador.

Sr. Britos. — Señor presidente: el bloque justicialista ha elaborado un dictamen de este proyecto enunciado por la Presidencia. Desde hace largo tiempo ha entendido que era un tema...

Sr. Trilla. — Perdón, señor presidente: quiero hacer referencia a un aspecto formal: ¿Hemos obtenido los dos tercios para tratar este proyecto sobre tablas?

Sr. Rodríguez Saá. — Esta moción la formulará el señor senador por San Luis.

Sr. Presidente (Brasesco). — La Presidencia ruega a los señores senadores que no produzcan interrupciones, que para ello soliciten permiso y que no dialoguen entre sí.

Sr. Britos. — Desde hace mucho tiempo nuestro bloque, como tal vez los restantes que conforman este cuerpo, tenía necesidad de

brindar a los compañeros de la clase pasiva una propuesta, una salida.

Entendemos que el tema que hoy nos ocupa es fundamental para los jubilados.

Por los motivos expuestos, solicito que este proyecto se trate sobre tablas.

Sr. Presidente (Brasesco). — En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador por San Luis.

Se va a proceder a llamar a efectos de tener quórum. Ruego a los señores senadores que tengan la voluntad de permanecer en sus bancas porque no puede hacerse sonar el timbre cada cinco minutos para formar quórum.

— Se llama para votar.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Brasesco). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Brasesco). — Aprobada por unanimidad.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Flombaum). — *(Lee)*

Buenos Aires, 18 de julio de 1991.

Señor presidente del Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TITULO I

Financiamiento del régimen nacional de previsión social

Artículo 1º — Sustitúyese el primer párrafo del artículo 9º de la ley 18.037, texto ordenado en 1976 y sus modificaciones, por el siguiente:

El aporte personal del afiliado será del diez por ciento (10%) y la contribución del empleador del dieciséis por ciento (16%), en ambos casos tomando como base la remuneración determinada de conformidad a las normas de la presente ley.

Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a aumentar y/o disminuir los aportes establecidos en el presente artículo en hasta un (1) punto del aporte del afiliado y en hasta dos (2) puntos el aporte del empleador.

Art. 2º — Sustitúyese el enunciado del primer párrafo del artículo 10 de la ley 18.038, texto ordenado en 1980 y sus modificaciones, por el siguiente:

El aporte de los afiliados será equivalente al veintiséis por ciento (26%) mensual de los montos asig-

nados a las siguientes categorías, el que se incrementará con el que corresponda de acuerdo con la ley 19.032 y sus modificaciones.

Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a aumentar y/o disminuir el aporte establecido en el presente artículo, en hasta tres (3) puntos porcentuales.

Art. 3º — A partir de la fecha de entrada en vigor de esta ley, los montos o porcentajes de las retenciones fijadas por o en virtud de convenios de corresponsabilidad gremial con destino al Fondo Nacional de la Vivienda, quedan transferidos al Régimen Nacional de Previsión Social.

Art. 4º — Las disposiciones del presente título entrarán en vigencia a partir del primer día del mes siguiente al de su publicación. Serán recursos del Régimen Nacional de Previsión Social todos los fondos que se perciban a partir de dicha fecha por los conceptos a que se refieren los artículos anteriores con independencia de la fecha del devengamiento. Transfiérense igualmente al Régimen Nacional de Previsión Social los créditos derivados de las contribuciones del sector privado al régimen de la ley 21.581 (FONAVI), que se perciban con posterioridad a la fecha indicada.

TÍTULO II

Afectación del IVA al Régimen Nacional de Previsión Social

Art. 5º — Modifícase la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto sustituido por la ley 23.349 y sus modificaciones de la siguiente forma:

1. Sustitúyese el artículo 24 por el siguiente:

Artículo 24: La alícuota del impuesto será del dieciocho por ciento (18%).

Esta alícuota se incrementará al veintisiete por ciento (27%) para las ventas de gas, energía eléctrica y agua reguladas por medidor y demás prestaciones comprendidas en los puntos 4, 5 y 5 bis del inciso e) del artículo 3º cuando la venta o prestación se efectúe fuera de domicilios destinados exclusivamente a vivienda o casa de recreo o veraneo o en su caso terrenos baldíos y el comprador o usuario sea un sujeto categorizado en este impuesto como responsable inscrito o como responsable no inscrito.

Facúltase al Poder Ejecutivo para reducir con carácter general las alícuotas establecidas en los párrafos anteriores en hasta seis (6) puntos porcentuales conforme a las previsiones de la ley 23.548.

2. Incorpórase a continuación del artículo 49, el siguiente:

Artículo El producido del impuesto establecido en la presente ley, se destinará:

a) El once por ciento (11%) al Régimen Nacional de Previsión Social, en las siguientes condiciones:

1. El noventa por ciento (90%) para el financiamiento del Régimen Nacional de Previsión Social, que se depositará en la cuenta del Instituto Nacional de Previsión Social.

2. El diez por ciento (10%) para ser distribuido entre las jurisdicciones provinciales y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a un prorrateador formado en función de la cantidad de beneficiarios de las cajas de previsión o de seguridad social de cada una de esas jurisdicciones al 31 de mayo de 1991. Los importes que surjan de dicho prorrateo serán girados directamente y en forma diaria a las respectivas cajas con afectación específica a los regímenes previsionales existentes. El prorrateo será efectuado por la Subsecretaría de Seguridad Social sobre la base de la información que le suministre la Comisión Federal de Impuestos. Hasta el 1º de julio de 1992, el cincuenta por ciento (50%) del producido por este punto se destinará al Tesoro nacional.

Cuando existan cajas de previsión o seguridad social en jurisdicciones municipales de las provincias, el importe a distribuir a las mismas se determinará en función a su número total de beneficiarios existentes al 31 de mayo de 1991, en relación con el total de beneficiarios de los regímenes previsionales nacionales, provinciales y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

El noventa por ciento (90%) de dicho importe se deducirá del monto a distribuir de conformidad al punto 1, y el 10 por ciento (10%), del determinado de acuerdo con el punto 2. Los importes que surjan de esta distribución serán girados a las jurisdicciones provinciales, las que deberán distribuirlos en forma automática y quincenal a las respectivas cajas municipales.

- b) El ochenta y nueve por ciento (89%) se distribuirá de conformidad al régimen establecido por la ley 23.548.

Art. 6º — Las disposiciones del presente título entrarán en vigencia a partir del primer día del mes siguiente al de su publicación.

TÍTULO III

Impuesto sobre Combustibles Líquidos y Gas Natural

Art. 7º — Apruébase como Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y Gas Natural el siguiente texto:

CAPÍTULO I

Combustibles líquidos

Artículo 1º — Establécese en todo el territorio de la Nación, de manera que incida en una sola de las etapas de su circulación, un impuesto sobre los productos de origen nacional o importado, que se detallan en el artículo 4º del presente capítulo.

Art. 2º — El hecho imponible se perfecciona:

- a) Para los productos importados con el registro de la solicitud prevista en el artículo 637 del Código Aduanero debiendo el impuesto ser liquidado y abonado juntamente con los derechos de importación y el impuesto al valor agregado, mediante retención en la fuente a practicar por la Administración Nacional de Aduanas;
- b) Para los productos de origen nacional con la salida de los mismos de la refinería o planta de almacenamiento habilitada como depósito fiscal por la Dirección General Impositiva;
- c) Para los productos consumidos dentro de los depósitos fiscales autorizados con la realización de los consumos. Se exceptúa del gravamen a los productos utilizados como combustibles exclusivamente en la elaboración de otros productos gravados dentro de las mismas plantas;
- d) En el momento de la verificación de la tenencia de los productos cuando se trate de los responsables a que se refiere el último párrafo del artículo 3º de este capítulo.

También constituye un hecho imponible autónomo cualquier diferencia de inventario que determine la Dirección General Impositiva y no se encuentre justificada por tolerancias.

Artículo 3º: Son sujetos pasivos del impuesto:

- a) En el caso de las importaciones quienes las realicen;
- b) En el caso de los incisos b) y c) del artículo 2º los titulares de las plantas de refinación o plantas de almacenamiento habilitadas como depósito fiscal.

Los transportistas, depositarios, poseedores o tenedores de productos gravados que no cuenten con la documentación que acredite que tales productos han tributado el impuesto de esta ley o están comprendidos en las exenciones del artículo 7º, serán responsables por el impuesto sobre tales productos sin perjuicio de las sanciones que legalmente les correspondan ni de la responsabilidad de los demás sujetos intervinientes en la transgresión.

Artículo 4º: Los productos gravados a que se refiere el artículo 1º y el monto del impuesto a liquidar por unidad de medida son los siguientes:

	₳ por litro
a) Nafta sin plomo, hasta 92 RON	2.618
b) Nafta sin plomo, de más de 92 RON	3.496
c) Nafta con plomo, hasta 92 RON	2.909
d) Nafta con plomo, de más de 92 RON	3.885
e) Kerosene	134
f) Gas Oil	614
g) Diesel Oil	904
h) Fuel Oil	268
i) Aeronafta	67
j) Solvente	2.668
k) Aguarrás	2.668

El Poder Ejecutivo nacional determinará, a los fines de la presente ley, las características técnicas de los productos gravados, no pudiendo dar efecto retroactivo a dicha caracterización.

El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para incorporar al gravamen productos que sean susceptibles de utilizarse como combustibles líquidos fijando un monto de gravamen similar al del producto gravado que puede ser sustituido. (En las alconafas el impuesto estará totalmente satisfecho con el pago del gravamen sobre el componente nafta.)

Artículo 5º: Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a aumentar hasta en un veinticinco por ciento (25%) y a disminuir hasta en un diez por ciento (10%) los montos indicados en el artículo anterior cuando así lo aconseje el desarrollo de la política económica. Esta facultad podrá ser ejercida con carácter general o regional para todos o algunos de los productos gravados.

Las modificaciones a que alude el párrafo anterior tendrán como condición que el impuesto unitario promedio ponderado resultante no disminuya respecto del impuesto unitario promedio ponderado de origen.

Se considera impuesto unitario promedio ponderado de origen al que resulta de los impuestos unitarios fijados en el artículo 4º de este capítulo I, considerando para la ponderación los volúmenes de productos gravados comercializados en el mes de mayo de 1991, así como las disminuciones de impuesto de carácter regional que se dispongan durante el mes siguiente al comienzo de vigencia de la presente ley.

Artículo 6º: El Poder Ejecutivo nacional modificará los montos de impuesto a liquidar por unidad de medida que se establecen en el artículo 4º, cuando la relación porcentual entre tales montos y los precios al público experimente un deterioro superior al diez por ciento (10%) comparado con idéntica relación porcentual durante la primera semana de vigencia de la presente ley, en la medida necesaria para recuperar esta misma relación porcentual.

Artículo 7º: Quedan exentas de impuesto las salidas de productos gravados de las refinerías o plantas de almacenamiento habilitadas como depósito fiscal cuando:

- a) Tengan como destino otra planta de refinación o almacenamiento habilitada como depósito fiscal;
- b) Tengan como destino la exportación;
- c) Conforme las previsiones del Código Aduanero, Sección VI, Capítulo Quinto, estén destinadas a rancho de embarcaciones de ultramar o aeronaves de vuelos internacionales;
- d) Tratándose de los solventes y el aguarrás, tengan como destino el uso como materia prima en la elaboración de productos no gravados, con incidencia significativa en el precio final de estos últimos.

Las exenciones del presente artículo sólo operarán cuando se cumplan los requisitos que establezca la Dirección General Impositiva conforme a lo previsto en el artículo 14, debiendo en caso contrario abonarse el impuesto y —en su caso— hacer efectiva la exención por la vía del reintegro según lo previsto en el párrafo siguiente.

Si luego de haberse tributado el impuesto los productos fueran objeto de los destinos a que se alude en los incisos a), b), c) y d) del primer párrafo, será procedente la devolución o acreditación de lo pagado, previa debida documentación que acredite tales hechos.

Artículo 8º: El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para exceptuar total o parcialmente y en forma temporaria del impuesto establecido en el presente capítulo a los productos empleados como combustibles líquidos en la generación de energía eléctrica para servicios públicos.

Ejercida esta facultad será de aplicación al caso lo dispuesto en los párrafos 2º y 3º del artículo anterior.

CAPÍTULO II

Gas natural

Artículo 9º: Establécese en todo el territorio de la Nación un impuesto sobre el gas natural, distribuido por redes, para uso residencial y del comercio y los servicios, excepto el destinado a gas natural comprimido y la generación de energía eléctrica para uso de servicios públicos.

Artículo 10: El impuesto a liquidar será de doscientos cuarenta y un australes (A\$241) por metro cúbico de gas natural. Los consumos gravados que se realicen en las provincias comprendidas en el artículo 1º de la ley 23.272, pagarán un impuesto menor, que fijará el Poder Ejecutivo nacional cuyo monto por metro cúbico no podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) de la suma indicada. En tanto el Poder Ejecutivo nacional no ejerza dicha facultad el impuesto para tales consumos será de noventa australes (A\$90) por metro cúbico.

Artículo 11: El hecho imponible se perfecciona al vencimiento de las respectivas facturas.

Artículo 12: Serán sujetos pasivos del impuesto quienes lo distribuyan al consumidor final.

Artículo 13: Son de aplicación para este impuesto las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo nacional en el artículo 5º y lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 6º.

CAPÍTULO III

Disposiciones complementarias

Artículo 14: Los impuestos establecidos por los capítulos I y II, se registrarán por las disposiciones de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones y su aplicación, percepción y fiscalización estarán a cargo de la Dirección General Impositiva, quien dictará las normas reglamentarias relativas al plazo, forma y demás requisitos para el ingreso y exenciones de los tributos, pudiendo asimismo establecer anticipos a cuenta del gravamen.

El período fiscal de liquidación de los gravámenes será mensual y sobre la base de declaraciones juradas presentadas por los responsables, excepto lo previsto para las importaciones.

Los sujetos pasivos de los impuestos establecidos en esta ley quedan obligados a cumplir los requisitos de documentación y registración que establezca la Dirección General Impositiva.

Cuando se trate de combustibles líquidos la Dirección General Impositiva dispondrá la obligación de establecer un sistema de inventario permanente que facilite la verificación y control de los movimientos de los productos gravados y no gravados y la correcta liquidación del impuesto.

La Dirección General Impositiva queda facultada para designar interventores fiscales, en forma permanente o transitoria, en los depósitos fiscales habilitados. En su caso será de aplicación lo previsto en el quinto párrafo, *in fine*, del artículo 18 de la Ley de Impuestos Internos (texto ordenado en 1979 y sus modificaciones).

Artículo 15: El Poder Ejecutivo dará cuenta al Honorable Congreso de la Nación del ejercicio de las facultades a que se refiere el artículo 5º del capítulo I.

Artículo 16: A los efectos del inciso b) del artículo 3º del capítulo I, se considerarán depósitos fiscales habilitados las refinерías y las plantas de almacenamiento de quienes eran sujetos del impuesto sobre los combustibles de la ley 17.597 con anterioridad al 31 de octubre de 1990 y que hayan comercializado durante el segundo semestre calendario de dicho año no menos de cien mil (100.000) metros cúbicos de productos gravados.

La habilitación como depósito fiscal de las refinерías y plantas de almacenamiento existentes deberá ser ratificada a solicitud de los sujetos del impuesto dentro de los treinta (30) días de la vigencia de este título.

La habilitación de nuevos depósitos fiscales de las empresas que refinan, importen o comercialicen combustibles líquidos y otros derivados de hidrocarburos en todas sus formas —se trate de las empresas existentes o de nuevas que ingresen al mercado— requerirá las siguientes condiciones:

- a) La inscripción del sujeto en la sección Empresas Elaboradoras y/o Comercializadoras del Registro de Empresas Petroleras;
- b) Que comercialicen los combustibles y otros derivados bajo marca propia y en estaciones de servicio de la misma marca;
- c) Que se trate de plantas de almacenaje y despacho acordes con los volúmenes que comercializan.

Artículo 17: Los sujetos del impuesto establecido en el capítulo I del presente título están obligados a presentar a la Dirección General Impositiva una declaración jurada especial, en la forma y con los datos que ella establezca, a los fines de que ningún producto gravado deje de tributar el impuesto o quede doblemente incidido con motivo de la transición del régimen anterior al régimen ahora instituido.

Artículo 18: Deróganse la ley 17.597 y sus modificaciones; la ley 20.073 y sus modificaciones; los artículos 50, 51 y los sin número incorporados a continuación del artículo 51 y del artículo 70 de la Ley de Impuestos Internos, texto ordenado en 1979 y sus modificaciones, por la ley 23.549; el decreto 3.616 del 30 de diciembre de 1976; el artículo 21 de la ley 16.656, el inciso c) del artículo 2º de la ley 17.574 y los incisos a) y b) del artículo 2º de la ley 19.287.

CAPÍTULO IV De la distribución

Artículo 19: El producido de los impuestos establecidos en los capítulos I y II del presente título se distribuirá entre el Tesoro nacional, las provincias y el Fondo Nacional de la Vivienda (ley 21.581) de conformidad con los siguientes períodos y porcentuales:

	Tesoro nac. %	Provincias %	FONAVI %
hasta el 30/6/92	47	13	40
del 1º/7/92 al 31/12/92	42	17	41
del 1º/1/93 al 30/6/93	38	20	42
del 1º/7/93 al 31/12/95	34	24	42
desde el 1º/1/96	29	29	42

Artículo 20: Los fondos que corresponden a las provincias según lo previsto en el artículo anterior se distribuirán entre ellas en la forma que se establece a continuación:

- El sesenta por ciento (60%) por acreditación a las cuentas de cada uno de los organismos de vialidad de las provincias en función de los porcentajes de distribución vigente para la coparticipación vial que fije el Consejo Vial Federal de acuerdo a la distribución prevista en el artículo 23 del decreto-ley 505/58;
- El treinta por ciento (30%) se destinará a cada una de las provincias en función de los porcentajes de distribución vigentes al artículo 3º, inciso c) y 4º de la ley 23.548, con afectación a obras de infraestructura de energía eléctrica y/o obras públicas;
- El diez por ciento (10%) restante será destinado al Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI), que será administrado por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica y se aplicará para lo establecido en el artículo 33 de la ley 15.336.

Artículo 21: A los fines de la distribución a que se refieren los artículos anteriores será de aplicación lo previsto en el artículo 6º de la ley 23.548.

El régimen de distribución que se establece constituye un régimen especial frente a lo dispuesto en el artículo 2º inciso b) de la mencionada ley.

En relación a los combustibles líquidos y el gas natural no es de aplicación lo previsto en el último párrafo del artículo 2º, ni subsisten las limitaciones contenidas en el artículo 9º, inciso b) tercer párrafo y apartado 1, acápites segundo y octavo, todos de la ley 23.548.

Artículo 22: Las provincias podrán dentro de los doscientos setenta (270) días corridos contados a partir de la fecha de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, adherir por ley provincial a sus disposiciones y derogar, en igual término, la legislación local que pueda oponérsele.

Las provincias que adhieran al régimen de esta ley y decidan gravar con el impuesto a los ingresos brutos a los combustibles líquidos y al gas natural, deberán comprometerse a aplicar una tasa que no exceda del tres y medio por ciento (3,5%) sobre el precio final de venta al público excluido de la base imponible el impuesto al valor agregado en el caso de los contribuyentes de derecho de este último impuesto. De este tres y medio por ciento (3,5%) podrá aplicar hasta el uno por ciento (1%) a la etapa de producción o industrialización.

La tasa a que se refiere el párrafo anterior no superará el dos y medio por ciento (2,5%) hasta el 31 de diciembre de 1991, excepto para las jurisdicciones que al 1º de enero de 1991 tenían vigente en el impuesto a los ingresos brutos una tasa general superior, las que podrán continuar con la aplicación de dicha tasa general sobre la base imponible señalada. A partir del 1º de enero de 1992 y hasta el 31 de julio de 1992 la tasa a que se refiere el mencionado párrafo no podrá exceder el tres por ciento (3%) para todas las jurisdicciones.

En el supuesto de no producirse la adhesión en el término señalado en el primer párrafo las provincias deberán reintegrar al gobierno nacional las sumas que hubieran percibido, a cuyo efecto el Poder Ejecutivo podrá efectuar las compensaciones con otros libramientos extendidos a favor de las respectivas provincias. Sobre dichos montos se aplicarán los párrafos segundo y tercero del artículo 16 de la ley 23.548.

Las provincias acordarán con la Subsecretaría de Hacienda mecanismos tendientes a regularizar los reclamos derivados de la aplicación de las disposiciones del último párrafo del artículo 2º de la ley 23.548 con relación a los excedentes que, desde el 1º de enero de 1988 y hasta el 31 de diciembre de 1990, se hubieran producido en la recaudación del impuesto establecido por la ley 17.597 y sus modificaciones, respecto de lo acreditado al Fondo de Combustibles creado por dicha ley.

Artículo 23: Los sujetos a que se refiere el artículo 3º, inciso b) del capítulo I podrán computar como pago a cuenta del impuesto sobre los combustibles líquidos en las condiciones previstas en el presente artículo y con cumplimiento de los requisitos que establecerá la Dirección General Impositiva.

- Los importes que —como sujetos de derecho del impuesto a los ingresos brutos—

acrediten haber abonado a los fiscos de cada una de las provincias y de la Capital Federal por las etapas de la actividad que no quedan gravadas según lo previsto en el segundo párrafo del artículo 22; y que se hubieran devengado a partir de la vigencia del presente título;

- b) Los importes que —los expendedores de sus respectivas marcas— acrediten haber abonado a los fiscos de cada una de las provincias y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, por impuestos devengados con posterioridad a la fecha de vigencia del presente título en exceso de las tasas autorizadas en el artículo 22 y siempre que los mencionados expendedores no hubieran trasladado su incidencia a los precios al público.

Los derechos a que se refiere el párrafo anterior podrán ser ejercidos dentro de los noventa (90) días contados desde el momento del pago.

Los montos que deban reconocerse como computables como pago a cuenta del impuesto serán deducidos de la participación que le corresponda a la provincia respectiva según lo previsto en el artículo 20, inciso b) o al Tesoro nacional si se trata de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Las Direcciones Generales de Rentas de cada jurisdicción recibirán documentación detallada de los montos que les fueron deducidos y se reservarán el derecho de fiscalizar si en cada caso se reunieron los requisitos establecidos en el presente artículo.

CAPÍTULO V

Otras disposiciones

Artículo 24: El producido de los recargos sobre el precio de venta de la electricidad establecidos por el inciso e) del artículo 30 de la ley 15.336 y el inciso b) del artículo 2º de la ley 17.574 se destinará al Tesoro nacional.

Todos los gastos que demande el funcionamiento del Consejo Federal de la Energía Eléctrica y la Administración del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) se atenderán con los recursos que fije a tales fines el Consejo Federal de la Energía Eléctrica destinándose para ello el uno por ciento (1%) como máximo de los recursos totales anuales del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI).

Artículo 25: Excepto en relación a las normas que tengan previstas vigencias distintas lo dispuesto en el presente título regirá a partir del primer día del mes siguiente al de la publicación.

Artículo 26: Con relación a los fiscos contratantes y los contribuyentes, la Comisión Federal de Impuestos tendrá las funciones establecidas en el capítulo III de la ley 23.548.

Los fondos recaudados por aplicación del decreto 2.733/91, hasta la entrada en vigencia de la presente ley serán distribuidos conforme a lo establecido en el mismo.

TÍTULO IV

Modificaciones a la ley del Fondo Nacional de la Vivienda

Art. 8º — Modifícase la ley 21.581 y sus modificaciones en la forma que a continuación se indica:

1. Sustitúyase el artículo 2º por el siguiente:

Artículo 2º: El organismo de aplicación de la presente ley será la Subsecretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental asistida por el Consejo Federal creado para dicha finalidad.

Dicho Consejo será presidido por el titular de la Subsecretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental e integrado por:

- Un representante por cada uno de los organismos ejecutores provinciales y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;
- Un representante del gremio de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina.
- Un representante de la Cámaras Empresarias de la Construcción de Viviendas e Infraestructura.

Este Consejo dictará su propio reglamento de funcionamiento y estará facultado para establecer las normas reglamentarias y aclaratorias que considere necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Fondo Nacional de la Vivienda.

2. Sustitúyase el inciso b) del artículo 3º por el siguiente:

b) El porcentual de la recaudación del impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural que se establece en la ley de creación de dicho impuesto.

3. Derógase el inciso c) del artículo 3º

4. Sustitúyase el artículo 22 por el siguiente:

Artículo 22: El Instituto Nacional de Previsión Social tendrá a su cargo continuar con las gestiones de cobro de:

- a) Los aportes que estableciera el inciso f) del artículo 2º de la ley 19.929 que se encontrasen pendientes de pago;
- b) Las contribuciones que establecía, a cargo de empleadores del ámbito privado, el artículo 3º, inciso b), y las que establecía el artículo 3º, inciso c), en ambos casos según el texto vigente con anterioridad a la vigencia de la ley que reforma el presente artículo, y que se encontraran pendientes de pago a dicha fecha.

En relación a las contribuciones a cargo de empleadores del ámbito público, que establecía el mencionado artículo 3º, inciso b), el Instituto Nacional de Previsión Social se limitará a informar al organismo de aplicación de la presente ley los antecedentes y estado de situación de las contribuciones adeudadas a la misma fecha, las que seguirán en la jurisdicción del Fondo Nacional de la Vivienda.

Para el cumplimiento de las gestiones a su cargo el Instituto Nacional de Previsión Social podrá autorizar a entidades bancarias, públicas o privadas, para recibir sumas destinadas al pago de los aportes y contribuciones a que se refieren los incisos a) y b) del primer párrafo.

5. Sustitúyese en el segundo párrafo del artículo 24 la expresión "Dirección Nacional de Recaudación Previsional" por "Instituto Nacional de Previsión Social".

6. El régimen de financiamiento previsto en la presente para el Fondo Nacional de la Vivienda, deberá proporcionar al sistema, como mínimo, el equivalente a setenta millones de dólares estadounidenses (u\$s 70.000.000) por mes calendario. Para el caso que las percepciones fueran inferiores a esa cantidad, el Tesoro nacional deberá hacer los anticipos necesarios para mantener dicho nivel de financiamiento, los que serán compensados con excedentes posteriores, si los hubiere.

7. Reemplázase en todo el texto de la ley la denominación "Secretaría de Estado de Desarrollo Urbano y Vivienda" por "Subsecretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental".

Art. 9º. — Derógase el artículo 1º de la ley 23.060.

Art. 10. — Las disposiciones del presente título entrarán en vigencia a partir del primer día del mes siguiente al de su publicación.

TÍTULO V

Derogación de regímenes de jubilaciones especiales

Art. 11. — Deróganse a partir del 31 de diciembre de 1991 las normas que establecían privilegios en las siguientes disposiciones legales, con sus modificatorias y complementarias: leyes: 20.954, 19.083, 20.024, 18.464, 20.572, 21.124, 19.396, 21.121 (artículo 15), 19.173, 19.939, 16.989, 23.034, 22.929, 21.540, 23.794, 22.955, 22.731, 23.895 y 22.430, y los decretos: 12.600/62; 667/79; 765/83; 1.044/83; 6.004/63.

También se derogan los artículos que contengan privilegios relativos al régimen de retiro y pasividades de las leyes 19.101, 19.349, 18.398, 13.018, 20.957 y 21.965.

Queda asimismo derogada a partir del 31 de diciembre de 1991 toda otra norma legal que modifique los requisitos y/o condiciones establecidos por la ley 18.037 o el régimen previsional general vigente en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Declárase nulo y sin efecto a partir de la fecha de su publicación el decreto 1.324/91.

Sin perjuicio de lo antes establecido, quedan salvados todos los derechos adquiridos hasta el momento de derogación de las normas legales indicadas.

Art. 12. — Créase una comisión bicameral que tendrá por objeto proponer un régimen legal de jubilaciones y pensiones, la que deberá expedirse antes del 31 de diciembre de 1991 respecto de las normas indicadas en el artículo 11.

Art. 13. — La comisión creada por el artículo precedente estará integrada por cinco miembros del Honorable Senado de la Nación y cinco de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Dichos miembros

serán designados por los presidentes de cada cuerpo, con facultad para remover en caso de necesidad o vacancia, teniéndose especialmente en cuenta la profesionalidad o especialidad de los candidatos, así como la preservación de la representatividad de los respectivos bloques parlamentarios.

Dicha comisión tendrá la facultad de darse su propio reglamento, elegir su presidente, establecer la prioridad de sus reuniones y demás aspectos formales para llenar su cometido.

Art. 14. — La comisión bicameral deberá quedar integrada en un plazo no mayor de diez días corridos, contados a partir del siguiente a la promulgación de la presente ley.

Art. 15. — Invítase a dictar normas del mismo carácter a los estados provinciales.

TÍTULO VI

Impuestos a los bienes no afectados a la actividad productiva

CAPÍTULO I

Disposiciones generales Hecho imponible — Vigencia

Art. 16. — Establécese con carácter de emergencia por el término de nueve (9) períodos fiscales a partir del 31 de diciembre de 1991, inclusive, un impuesto que se aplicará en todo el territorio de la Nación y que recaerá sobre los bienes no alcanzados por la ley de impuestos sobre los activos existentes al 31 de diciembre de cada año, situados en el país y en el exterior.

Sujetos

Art. 17. — Son sujetos pasivos del impuesto:

- Las personas físicas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo, por los bienes situados en el país y en el exterior;
- Las personas físicas domiciliadas en el exterior y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo, por los bienes situados en el país.

Las sucesiones indivisas son contribuyentes de este gravamen por los bienes que posean al 31 de diciembre de cada año, en tanto dicha fecha quede comprendida en el lapso transcurrido entre el fallecimiento del causante y la declaratoria de herederos o aquella en que se haya declarado válido el testamento que cumpla la misma finalidad.

A los fines de este artículo se considerará que están domiciliados en el país los agentes diplomáticos y consulares, el personal técnico y administrativo de las respectivas misiones y demás funcionarios públicos de la Nación y los que integran comisiones de las provincias y municipalidades que, en ejercicio de sus funciones, se encontraren en el exterior, así como sus familiares que los acompañaren.

Art. 18. — En el caso de patrimonios pertenecientes a los componentes de la sociedad conyugal, corresponderá

atribuir al marido además de los bienes propios, la totalidad de los que revisten el carácter de gananciales, excepto:

- a) Que se trate de bienes adquiridos por la mujer con el producto del ejercicio de su profesión, oficio, empleo, comercio o industria;
- b) Que exista separación judicial de bienes;
- c) Que la administración de todos los bienes gananciales la tenga la mujer en virtud de una resolución judicial.

Bienes situados en el país

Art. 19. — Se consideran situados en el país:

- a) Los inmuebles ubicados en su territorio;
- b) Los derechos reales constituidos sobre bienes situados en él;
- c) Las naves y aeronaves de matrícula nacional;
- d) Los automotores patentados o registrados en su territorio;
- e) Los bienes muebles registrados en él;
- f) Los bienes muebles del hogar o de residencias transitorias, cuando el hogar o residencia estuvieran situados en su territorio;
- g) Los bienes personales del contribuyente, cuando éste tuviera su domicilio en él, o se encontrara en él;
- h) Los demás bienes muebles y semovientes que se encontraren en su territorio al 31 de diciembre de cada año, aunque su situación no revistiera carácter permanente, siempre que por este artículo no correspondiera otro tratamiento;
- i) El dinero y los depósitos en dinero que se hallaren en su territorio al 31 de diciembre de cada año;
- j) Los títulos, las acciones, cuotas o participaciones sociales y otros títulos valores representativos de capital social o equivalente, emitidos por entes públicos o privados, cuando éstos estuvieran domiciliados en él;
- k) Los patrimonios de empresas o explotaciones unipersonales ubicadas en él;
- l) Los créditos, incluidas las obligaciones negociables previstas en la ley 23.576 y los debentures —con excepción de los que cuenten con garantía real, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el inciso b)— cuando el domicilio real del deudor esté ubicado en su territorio;
- m) Los derechos de propiedad científica, literaria o artística, los de marcas de fábrica o de comercio y similares, las patentes, dibujos, modelos y diseños reservados y restantes de la propiedad industrial o inmaterial, así como los derivados de éstos y las licencias respectivas, cuando el titular del derecho o licencia, en su caso, estuviere domiciliado en el país al 31 de diciembre de cada año.

Bienes situados en el exterior

Art. 20. — Se entenderán como bienes situados en el exterior:

- a) Los bienes inmuebles situados fuera del territorio del país;
- b) Los derechos reales constituidos sobre bienes situados en el exterior;
- c) Las naves y aeronaves de matrícula extranjera;
- d) Los automotores patentados o registrados en el exterior;
- e) Los bienes muebles y los semovientes situados fuera del territorio del país.

Respecto de los retirados o transferidos del país por los sujetos mencionados en el inciso b) del artículo 17, se presumirá que no se encuentran situados en el país cuando hayan permanecido en el exterior por un lapso igual o superior a seis (6) meses en forma continuada con anterioridad al 31 de diciembre de cada año;

- f) Los títulos y acciones emitidos por entidades del exterior y las cuotas o participaciones sociales, incluidas las empresas unipersonales, y otros títulos valores representativos del capital social de entidades constituidas o ubicadas en el exterior;
- g) Los depósitos en instituciones bancarias del exterior;
- h) Los debentures emitidos por entidades o sociedades domiciliadas en el exterior;
- i) Los créditos cuyos deudores se domicilien en el extranjero excepto que deban ser considerados como radicados en el país por aplicación del inciso b) de este artículo. Cuando los créditos respondan a saldos de precio por la transferencia a título oneroso de bienes situados en el país al momento de la enajenación o sean consecuencia de actividades desarrolladas en el país, se entenderá que se encuentran con carácter permanente en el exterior cuando hayan permanecido allí más de seis (6) meses computados desde la fecha en que se hubieren hecho exigibles hasta el 31 de diciembre de cada año.

Exenciones

Art. 21. — Estarán exentos los siguientes bienes situados en el país:

- a) Los bienes pertenecientes a los miembros de las misiones diplomáticas y consulares extranjeras, así como su personal administrativo y técnico y familiares, en la medida y con las limitaciones que establezcan los convenios internacionales aplicables. En su defecto, la exención será procedente en la misma medida y limitaciones sólo a condición de reciprocidad.

Igual tratamiento será aplicable para miembros de las representaciones, agentes y en su caso, de sus familiares, que actúen en organismos internacionales de los que la Nación sea parte, en la medida y con las limitaciones que se establezcan en los convenios internacionales respectivos.

- b) Los títulos, bonos y demás títulos valores emitidos por la Nación, las provincias o municipalidades, cuando exista una ley general o especial que los declare exentos del presente o de todo gravamen.

Autorízase al Poder Ejecutivo para eximir del presente gravamen a los títulos, letras, bonos y demás títulos valores emitidos hasta la fecha y que se emitan en el futuro por la Nación, las provincias y las municipalidades;

- c) Los bienes amparados por las franquicias de la ley 19.640;
- d) Las acciones y participaciones en el capital de entidades sujetas al impuesto sobre los activos incluidas las empresas y explotaciones unipersonales;
- e) Las cuotas partes de fondos comunes de inversión;
- f) Las acciones de cooperativas;
- g) Los inmuebles rurales a que se refiere el inciso e) del artículo 2º de la ley 23.760 y sus modificaciones.

CAPÍTULO II

Liquidación del gravamen

Valuación de los bienes situados en el país

Art. 22. — Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, los bienes situados en el país se valorarán conforme a:

a) Inmuebles:

1. Inmuebles adquiridos: al costo de adquisición o valor a la fecha de ingreso al patrimonio, se le aplicará el índice de actualización mencionado en el artículo 28 referido a la fecha de adquisición o de ingreso al patrimonio, que indique la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva para el mes de diciembre de cada año.
2. Inmuebles construidos: al valor del terreno, determinado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se le adicionará el costo de construcción, al que se le aplicará el índice de actualización mencionado en el artículo 28 referido a la fecha de finalización de la construcción, que indique la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva para el mes de diciembre de cada año.

El costo de construcción se determinará actualizando mediante el citado índice, cada una de las sumas invertidas desde la fecha de cada inversión hasta la fecha de finalización de la construcción.

3. Obras en construcción: al valor del terreno determinado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1, se le adicionará el importe que resulte de actualizar cada una de las sumas invertidas, mediante el índice citado en los puntos anteriores, desde la fecha de cada inversión hasta el 31 de diciembre de cada año.

4. Mejoras: su valor se determinará de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 para las obras construidas o en construcción, según corresponda.

Cuando se trate de inmuebles con edificios, construcciones o mejoras, al valor atribuible a los mismos, determinado de acuerdo con los apartados 1, 2 y 4, se le restará el importe que resulte de aplicar a dicho valor el dos por ciento (2%) anual en concepto de amortización. A los efectos de la aplicación de lo dispuesto precedentemente, en el caso de inmuebles adquiridos, la proporción del valor actualizado atribuible al edificio, construcciones o mejoras, se establecerá teniendo en cuenta la relación existente entre el valor de dichos conceptos y el de la tierra según el avalúo fiscal vigente a la fecha de adquisición. En su defecto, el contribuyente deberá justipreciar la parte del valor de costo atribuible a cada uno de los conceptos mencionados.

El valor a computar para los inmuebles, de acuerdo con las disposiciones de este inciso, no podrá ser inferior al de la base imponible fijada al 31 de diciembre de cada año a los efectos del pago de los impuestos inmobiliarios o tributos similares. Este valor se tomará asimismo en los casos en que no resulte posible determinar el costo de adquisición o el valor a la fecha de ingreso al patrimonio.

De tratarse de los inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente o del causante en el caso de sucesiones indivisas, del valor determinado de conformidad a las disposiciones de este inciso podrá deducirse el importe adeudado al 31 de diciembre de cada año en concepto de créditos con garantía hipotecaria constituida sobre dichos inmuebles.

En los supuestos de cesión gratuita de la nuda propiedad con reserva del usufructo, el cedente deberá computar, cuando corresponda a los fines de este impuesto, el valor total del inmueble, determinado de acuerdo con las normas de este inciso. En los casos de cesión de la nuda propiedad de un inmueble por contrato oneroso con reserva de usufructo se considerarán titulares por mitades a los nudos propietarios y a los usufructuarios.

- b) Automotores, aeronaves, naves, yates y similares: al costo de adquisición o construcción o valor de ingreso al patrimonio, se le aplicará el índice de actualización mencionado en el artículo 28 referido a la fecha de la adquisición, construcción o de ingreso al patrimonio, que indique la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva. Al valor así obtenido se le restará el importe que resulte de aplicar el coeficiente anual de amortización que para cada tipo de bienes fije el reglamento o la Dirección General Impositiva, correspondiente a los años de vida útil transcurridos desde la fecha de adquisición, finalización de la construcción o de ingreso al patrimonio, hasta el año, inclusive, por el cual se liquida el gravamen.

En el caso de automotores, el valor a consignar no podrá ser inferior al que establezca la Dirección General Impositiva, al 31 de diciembre de cada año, con el asesoramiento de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro.

- c) Los títulos públicos y demás títulos valores — incluidos los emitidos en moneda extranjera — que se coticen en bolsas o mercados: al último valor de cotización al 31 de diciembre de cada año.

Los que no se coticen en bolsa se valuarán por su costo, incrementado, de corresponder, en el importe de los intereses, actualizaciones y diferencias de cambios que se hubieran devengado al 31 de diciembre de cada año;

- d) Los bienes inmateriales (llaves, marcas, patentes, derechos de concesión y otros activos similares): por el costo de adquisición u obtención o valor a la fecha de ingreso al patrimonio, a los que se le aplicará el índice de actualización mencionado en el artículo 28, referido a la fecha de adquisición, inversión o de ingreso al patrimonio, que indique la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva para el mes de diciembre de cada año.

De los valores determinados de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, se detraerán en su caso los importes que hubieran sido deducidos, conforme a las pertinentes disposiciones de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1986 con las modificaciones legales introducidas hasta la ley 23.905 y sus normas reglamentarias;

- e) Los depósitos y créditos en moneda extranjera y las existencias de la misma: de acuerdo con el último valor de cotización — tipo comprador — del Banco de la Nación Argentina al 31 de diciembre de cada año, incluyendo el importe de los intereses que se hubieran devengado a dicha fecha;
- f) Los depósitos y créditos en moneda argentina y las existencias de las mismas: por su valor al 31 de diciembre de cada año el que incluirá el importe de los intereses y de las actualizaciones legales, pactadas o fijadas judicialmente que se hubieran devengado a la fecha indicada;
- g) Objetos de arte, objetos para colección y antigüedades que se clasifican en el capítulo 99 de la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, objetos de adorno y uso personal y mobiliario de mesa en cuya confección se hubiera utilizado preponderantemente metales preciosos, perlas y/o piedras preciosas: por su valor de adquisición, construcción o ingreso al patrimonio, al que se le aplicará el índice de actualización mencionado en el artículo 28 referido a la fecha de adquisición, construcción o de ingreso al patrimonio, que indique la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva para el mes de diciembre de cada año;
- h) Otros bienes no comprendidos en los incisos siguientes: por su costo de adquisición, construcción o valor a la fecha de ingreso al patrimonio actualizado por aplicación del índice mencionado en el artículo 28 referido a la fecha de adquisición, construcción o de ingreso al patrimonio que

indique la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva para el mes diciembre de cada año;

- i) El valor de los bienes que constituyen el amoblamiento de la vivienda o casa de recreo o veraneo se fijará en el diez por ciento (10%) del valor atribuido al inmueble;
- j) El valor de los demás objetos personales y del hogar se fijará en el dos por ciento (2%) de la valuación total de los bienes gravados.

Art. 23. — En el caso de los bienes a que se refieren los incisos a), b), g) y h) del artículo anterior las valuaciones asignadas no podrán ser inferiores al ochenta por ciento (80%) de su valor de mercado excepto para los automotores respecto de los cuales se estará a lo dispuesto en el inciso b) del artículo anterior.

Se presumirá además que dicho valor de mercado no es inferior al atribuido a los bienes en el caso de existir seguros que cubran riesgos sobre los mismos.

Valuación de los bienes situados en el exterior

Art. 24. — Los bienes situados en el exterior se valuarán de la siguiente forma:

- a) Inmuebles, automotores, aeronaves, naves, yates y similares, bienes inmateriales y los demás bienes no incluidos en los incisos siguientes: a su valor de plaza en el exterior al 31 de diciembre de cada año;
- b) Los créditos, depósitos y existencia de moneda extranjera, incluidos los intereses de ajustes devengados al 31 de diciembre de cada año: a su valor a esa fecha;
- c) Los títulos valores que se coticen en bolsas o mercados del exterior: al último valor de cotización al 31 de diciembre de cada año.

Para la conversión a moneda nacional de los importes en moneda extranjera de los bienes a que aluden los incisos anteriores se aplicará el valor de cotización, tipo comprador, del Banco de la Nación Argentina de la moneda extranjera de que se trate al último día hábil anterior al 31 de diciembre de cada año.

Mínimo exento

Art. 25. — No estarán alcanzados por el impuesto los sujetos indicados en el inciso a) del artículo 17 cuyos bienes, valuados de conformidad a lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 24 resulten iguales o inferiores a un mil millones de australes (₡ 1.000.000.000.).

Alícuotas

Art. 26. — El gravamen a ingresar por los contribuyentes a que se alude en el artículo anterior, surgirá de la aplicación de la alícuota del uno por ciento (1%) sobre el valor total de los bienes sujetos al impuesto.

Los sujetos de este impuesto podrán computar como pago a cuenta las sumas efectivamente pagadas en el exterior por gravámenes similares al presente que consi-

deren como base imponible el patrimonio o los bienes en forma global. Este crédito sólo podrá computarse hasta el incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de los bienes situados con carácter permanente en el exterior.

Art. 27. — Los contribuyentes del impuesto sobre los activos, las sucesiones indivisas radicadas en el país y toda otra persona de existencia visible o ideal domiciliada en el país que tenga el condominio, posesión, uso, goce, disposición, depósito, tenencia, custodia, administración o guarda de bienes sujetos al impuesto que pertenezca a los sujetos mencionados en el inciso b) del artículo 17, deberán ingresar con carácter de pago único y definitivo por los respectivos bienes al 31 de diciembre de cada año, el uno por ciento (1%) del valor de dichos bienes, determinado con arreglo a las normas de la presente ley.

No corresponderá efectuar el ingreso establecido en este artículo cuando su importe resulte igual o inferior a dos millones quinientos mil australes (₡ 2.500.000).

Los responsables obligados al ingreso del gravamen tendrán derecho a reintegrarse el importe abonado, incluso reteniendo y/o ejecutando directamente los bienes que dieron origen al pago.

CAPÍTULO III

Otras disposiciones

Art. 28. — A los efectos de esta ley los índices de actualización deberán ser elaborados anualmente por la Dirección General Impositiva sobre la base de los datos relativos a la variación de índices de precios al por mayor, nivel general, que deberá suministrar el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

La tabla a que se refieren los incisos a), b), d), g) y h) del artículo 22 contendrá valores mensuales para los veinticuatro (24) meses inmediatos anteriores, valores trimestrales promedio —por trimestre calendario— desde el 1° de enero de 1975 y valores anuales promedio para los demás períodos y tomará como base el índice de precios correspondiente al mes para el cual se elabore la tabla.

Asimismo, la Dirección General Impositiva a partir del período fiscal 1992 actualizará anualmente, sobre la base de la variación experimentada en el índice mencionado en el primer párrafo del presente artículo durante el período fiscal a que se refiere la liquidación del gravamen, el importe previsto en los artículos 25 y 27.

Art. 29. — Facúltase a la Dirección General Impositiva a dictar las normas complementarias de información y percepción o retención del gravamen, que resulten necesarias para su aplicación e ingreso.

Art. 30. — La aplicación, percepción y fiscalización del presente gravamen estará a cargo de la Dirección General Impositiva y se regirá por las disposiciones de la ley 11.683 (texto ordenado en 1978 y sus modificaciones).

Art. 31. — El producido del impuesto establecido en la presente ley se distribuirá, conforme al siguiente régimen especial:

a) El noventa por ciento (90%) para el financiamiento del régimen nacional de previsión social

que se depositará en la cuenta del Instituto Nacional de Previsión Social;

b) El diez por ciento (10%) para ser distribuido entre las jurisdicciones provinciales y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a un prorratador formado en función de la cantidad de beneficiarios de las cajas de previsión o de seguridad social de cada una de esas jurisdicciones al 31 de mayo de 1991. Los importes que surjan de dicho prorratado serán girados directamente y en forma diaria a las respectivas cajas con afectación específica a los regímenes previsionales existentes. El prorratado será efectuado por la Subsecretaría de Seguridad Social sobre la base de la información que le suministre la Comisión Federal de Impuestos.

Cuando existan cajas de previsión o de seguridad social en jurisdicciones municipales de las provincias, el importe a distribuir a las mismas se determinará en función a su número total de beneficiarios existentes al 31 de mayo de 1991, en relación con el total de beneficiarios de los regímenes previsionales nacionales, provinciales y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

El noventa por ciento (90%) del importe mencionado en el párrafo anterior se deducirá del monto a distribuir de conformidad al punto a) y el diez por ciento (10%) del determinado de acuerdo con el punto b). Los importes que surjan de esta distribución serán girados a las jurisdicciones provinciales, las que deberán distribuirlos en forma automática y quincenal a las respectivas cajas municipales.

TÍTULO VII

Destino de los recursos de privatizaciones

Art. 32. — Destínase al Régimen Nacional de Previsión Social el treinta por ciento (30%) de los recursos brutos que se obtengan de las privatizaciones realizadas conforme a los mecanismos de la ley 23.696 o normas especiales, ya sea por venta de activos, concesión, transferencia de bienes muebles, acciones o servicios, venta de inmuebles, tanto del Estado nacional como de empresas del Estado y organismos descentralizados.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior se destinarán al Régimen Nacional de Previsión Social la totalidad de los recursos brutos que se obtengan por la venta de las acciones de propiedad del Estado nacional de las sociedades licenciatarias Norte S.A. y Sur S.A. de los servicios de telecomunicaciones. A partir de la vigencia de esta ley, el banco fideicomisario —encargado de la venta— procederá a girar al Régimen Nacional de Previsión Social el producido bruto de la venta encomendada, el que será depositado directamente en la cuenta referida en el párrafo siguiente. El término de duración del fideicomiso será el menor posible para el cumplimiento del objetivo.

El adquirente, concesionario, licenciatario o socio, depositará directamente el referido porcentaje del precio, canon, derecho de asociación con contraprestación en

una cuenta que a tal efecto abrirá la Subsecretaría de Previsión Social en el Banco de la Nación Argentina.

Art. 33. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor Presidente.

ALBERTO REINALDO PIERRI.

Juan Estrada.

Sr. Presidente (Brasesco). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Britos — Antes de entrar en el debate del tema que ahora nos ocupa, quiero hacer una introducción. Evidentemente en los últimos tiempos éste ha sido uno de los asuntos principales discutidos por nuestra sociedad. De alguna manera los legisladores hemos aparecido como que no estábamos interesados por quienes ayer trabajaron y dieron muchos años de sus vidas para sacar el país adelante. Desgraciadamente hoy pareciera que no recibieron la solidaridad del resto de la clase trabajadora. Digo esto con mucho dolor, porque me consta la profunda preocupación que han tenido los distintos gobiernos democráticos en la Argentina por este problema. Y me consta también cuando se produjeron las crisis del sistema previsional.

El sistema nació a principios de siglo. Durante el gobierno radical de don Hipólito Yrigoyen se lograron algunas conquistas, como las que obtuvimos nosotros, los ferroviarios, en 1919.

Sr. Rodríguez Saá. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Presidente (Brasesco). — ¿Permite la interrupción, señor senador?

Sr. Britos. — Sí, señor presidente.

Sr. Rodríguez Saá. — Solamente quiero referirme a un tema de forma. Se encuentra el señor ministro en esta casa, y desea participar en la sesión, de acuerdo con la facultad constitucional que le asiste.

Solicito en consecuencia la venia de la Presidencia para que se lo invite a pasar al recinto, sin perjuicio de que continúe con su discurso el señor senador por San Luis.

Sr. Presidente (Brasesco). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por San Luis, y se hará efectiva la invitación al señor ministro para que ingrese en el recinto.

Sr. Britos. — Decía que la preocupación por este tema había sido la introducida por un gobierno radical, el de don Hipólito Yrigoyen, concretándose entonces algunos regímenes previsionales.

Posteriormente, nuestro país vivió una época muy difícil: la década del treinta. Los trabajadores perdieron algunos de estos beneficios. Pero con el advenimiento del justicialismo en 1945 logramos muchas conquistas y se crearon muchas cajas. En un principio estos organismos previsionales tenían un superávit tal que permitía hasta planes de vivienda. En efecto, la cantidad de compañeros que aportaban les daba un sustento que hacía posible promover el sistema habitacional.

Más adelante las cosas fueron cambiando en nuestro país. Las grandes transformaciones en el sistema previsional tuvieron lugar durante el proceso militar en 1979, oportunidad en la que se determinó la eliminación de los aportes empresariales de un 15 por ciento por cada trabajador. Se pensó sustituirlos por el IVA, pero esto no se cumplió, ya que lo recaudado fue a "Rentas generales". Esto condujo a que el sistema dejara de percibir alrededor de ocho mil millones de dólares.

Más adelante el gobierno radical restituyó por ley en 1984 un aporte patronal del 7,5 por ciento. Pero los empresarios no respondieron a esta intención del gobierno radical, iniciándose entonces una etapa dura, crítica. Para evadir la contribución se empezó a tomar trabajadores calificados en negro, con lo cual los empresarios no hacían ningún tipo de aporte al sistema previsional. Cuando el doctor Alfonsín entregó el gobierno había ya casi dos millones de trabajadores en negro en nuestro país; actualmente tenemos dos millones quinientos mil. Esto significa que las cajas dejan de percibir ciento cincuenta millones de dólares mensuales, aproximadamente.

Ya en 1979 el doctor Estrada, que estaba al frente de las cajas, había permitido que se ampliara el régimen de trabajadores autónomos con un aporte mínimo que no se compadecía con el que realizaban los otros sectores. Empiezan a aparecer algunos regímenes especiales, denominados vulgarmente de privilegio, que trataban de salvar la situación de algunos sectores.

Debemos reconocer que los compañeros y nuestros colegas parlamentarios llegaron a este tipo de régimen en 1958, durante la gestión del doctor Frondizi. Pero ya anteriormente se subsanaba la forma en que podían cobrar los legisladores. Esto se hacía en épocas anteriores a las del doctor Frondizi mediante pensiones.

Pareciera que permanentemente los legisladores hemos estado en la mira. No trato de defender lo que hemos obtenido en alguna oportunidad a través de una ley. Es cierto que en 1984

fuiamos autores de una propuesta sancionada por el Senado. En ella decíamos que teniendo en cuenta la situación en que se encontraban las cajas, tal como las recibió el gobierno radical, con un déficit de casi 4.000 millones de dólares de deuda con los jubilados, era necesario establecer un nuevo régimen para dichas cajas. Los legisladores estábamos dispuestos a dejar de lado ese régimen especial o de privilegio.

Este proyecto fue analizado por este cuerpo y se sancionó. Pasó entonces a la Cámara de Diputados. Lamentablemente, nuestros pares no supieron cumplir con un deber que tal vez hubiera sido el salvataje para el sistema previsional.

Nosotros sancionamos aquí una ley que determinaba que los topes debían llegar hasta el 70 por ciento. ¿Por qué? Porque el sistema no estaba en condiciones de dar respuesta a los distintos regímenes que existían hasta ese momento.

Hemos seguido caminando. El gobierno radical no pudo arreglar este problema, que es muy serio. El gobierno peronista tampoco.

Hoy les debemos a los compañeros jubilados casi 5.000 millones de dólares, cifra imposible de pagar.

En la actualidad algunos compañeros deambulan y muchos se acercan hasta el Palacio de Justicia para tratar de que se efectivicen sus justos reclamos. Son aquellos que están comprendidos por el régimen de la ley 18.037, que no reclaman más que el 82 por ciento que establece la norma. ¿Pero cuánto suman esos reclamos?

Cada uno de esos compañeros debe percibir entre 15.000 y 40.000 dólares. Esto es lo que ha determinado la justicia y es legítimo el pago.

¿Cómo puede solucionarse esto? La forma de solucionarlo no es únicamente mediante un decreto como el dictado por la Presidencia, por el que se dejan sin efecto cuatro o cinco regímenes de privilegio. En primer lugar, hay que derogar todas aquellas leyes especiales, y posteriormente, a través de una comisión —como bien lo han puesto de manifiesto los señores diputados en su proyecto— buscar un tipo previsional que sirva a los intereses de todos los sectores, pero teniendo en cuenta la capacidad económica real que tienen las cajas.

La recaudación actual es de aproximadamente 500 millones de dólares, y se les da a los compañeros jubilados 120 dólares por mes.

Quiero destacar que lo afirmado por la prensa acerca de que el 7,5 por ciento de los jubilados y pensionados perciben jubilaciones y pensiones

de privilegio no es así. La realidad es que se trata de sólo un 2 por ciento. Han incluido a 60 mil compañeros que entrarían en los distintos regímenes. En este momento son ochocientos los compañeros, entre las pensionadas y aquellos que por suerte siguen con vida, que están incluidos dentro del régimen previsional que tienen los señores legisladores. Nosotros no pretendemos salvar nuestra situación.

Entendemos y creemos que tenemos que buscar un remedio a este problema: ¿Cuál va a ser el remedio? Justamente distribuir lo que reciben las cajas. Pero cuando nosotros hemos ampliado el proyecto del Poder Ejecutivo diciendo que también vamos a hablar sobre el régimen que tienen las fuerzas armadas hay algunos que se han alarmado por la propuesta de la Cámara de Diputados; no nos tiene que alarmar. Porque los militares tienen 88 mil hombres en actividad y casi 120.000 señores en retiro que reciben el ciento por ciento del salario real que percibe cada hombre en actividad. Hay algunos que los han defendido diciendo que no tienen caja, que tienen un régimen especial. ¿Pero cuál es el régimen especial? En cada presupuesto que nosotros sancionamos cada año está incluido lo que tenemos que pagar a cada integrante de las fuerzas armadas. No tengo nada en contra de ellas, pero me disgusta cuando algunos le quieren dar un trato muy especial porque dicen que generalmente quien se retira no tiene dónde trabajar. Yo pienso: cuando se retira un ferroviario ¿a dónde va a ir a trabajar?, o cuando se retira un compañero que desempeña otra función en esta sociedad.

Entonces, lo que tenemos que buscar, si ellos no tienen la capacidad económica para autofinanciarse, es un sistema donde el gobierno ya no tenga que aportar más aproximadamente 200 millones de dólares anuales en el presupuesto para financiar el sistema de los representantes de las fuerzas armadas. Así ocurrió con otros regímenes. Como se ha dado así, por números, tal vez la sociedad no sepa entenderlo y crea que nosotros queremos únicamente solucionar —con el proyecto de la Cámara baja— el problema de los senadores o el de los diputados. Queremos solucionar, a través de la comisión bicameral que se va a integrar, el problema de todo el sistema previsional.

En cuanto a la derogación de las leyes 20.954 —ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo—, 19.083 —personal civil de la Policía Federal—, 20.024 —tribunal fiscal—, 18.464 —magistrados y funcionarios del Poder Judicial—, 20.572 —legisladores nacionales—,

21.124 —personal del Poder Legislativo—, 19.396 —personal de la Presidencia de la Nación—, 21.121, artículo 15 —Tribunal de Cuentas—, 19.173 —personal civil de Inteligencia—, 19.939 —jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación—, 16.989 —presidente y vicepresidente de la Nación—, 23.034 —Secretaría de Planeamiento—, 22.929 —investigadores tecnológicos—, 21.540 —arzobispos, obispos y vicarios castrenses—, 23.794 —guardaparques nacionales—, 22.955 —personal de la administración pública—, 22.731 —servicio exterior—, 23.895 —docentes, que se incorpora a la 22.955—, 22.430 —sacerdotes seculares— y los decretos 12.600/62 —Ministerio del Interior—, 667/79 —asesores del gabinete del Ministerio del Interior—, 765/83 —Secretaría de Planeamiento—, 1.044/83 —concejales y funcionarios municipales de la ciudad de Buenos Aires—, 6.004/63 —Servicio de Informaciones del Estado—, 1.645/78 —empleados de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires—, dentro de la ley 19.101, que es de las fuerzas armadas, la 19.349 —Gendarmería Nacional—, 18.398 —Prefectura Naval— y 13.018 —Servicio Penitenciario Nacional—, este Parlamento no tratará de tomar una actitud agresiva porque tal vez en ese momento existió alguna circunstancia muy especial por la que tuvo que ser contemplada la situación de estos sectores.

Pero ahora el sistema previsional está en crisis, no existen fondos y, mediante este proyecto, estamos tratando de crearlos para socorrer a esos 3 millones 100 mil compañeros que están esperando una actitud solidaria de nuestra parte. Por eso, sería muy mezquino pensar que estamos tratando de crear una comisión para intentar rehacer especialmente el sistema de jubilaciones de los parlamentarios.

Debemos pensar que los fondos que actualmente se recaudan alcanzan escasamente para abonar hasta un tope del 58 por ciento del salario real a cada jubilado.

Esto les ha dolido a algunos compañeros que dicen que no puede ser que se les rebaje el sueldo. Inclusive, hay quienes han acudido a citas constitucionales, al artículo 14 bis de la Constitución Nacional y además, a aquella ocasión del debate en que dos hombres pertenecientes al radicalismo hablaban de la posibilidad de que el salario del jubilado fuera móvil. Creo que eso está bien mantenerlo, respetando la posibilidad económica del sistema previsional, pero entiendo que ahora, señor presidente, no estamos en las mismas condiciones aunque, en

alguna oportunidad, tal vez podamos superar la situación.

Por eso, en este proyecto incluimos algunas disposiciones urticantes que más adelante serán debatidas. Me refiero, por ejemplo, al punto en que decimos que vamos a autorizar o facultar al Poder Ejecutivo a clausurar un negocio cuando se pueda comprobar la evasión.

¿Por qué queremos tomar una medida tan dura? Porque en este país existe, y se ha hecho carne, una cultura de evasión. Y si algún día no la damos por terminada será muy difícil que podamos solucionar estos problemas.

Señor presidente: nuestro bloque, a través de su presidente, abundará en detalles acerca de la parte impositiva de esta iniciativa. Pero quiero poner de manifiesto que tanto el espíritu de sus integrantes como el de los miembros de otras bancadas es legislar solidariamente para los compañeros de la clase pasiva a fin de que ellos no piensen que nosotros, los parlamentarios, nos hemos olvidado de sus padecimientos.

Ellos están esperanzados respecto de estos treinta dólares que estamos por otorgarles en concepto de aumento. No los tenemos pero estamos tratando de crear los fondos necesarios a través de este proyecto.

¿A cuánto asciende el valor de esos fondos que necesita el sistema? Se trata de aproximadamente 90 millones de dólares, de los que carece el sistema de seguridad social.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Eduardo Menem.

—Ingresan en el recinto el señor ministro de Economía, doctor Domingo Cavallo, el señor subsecretario de Finanzas Públicas, doctor Carlos Tacchi y el señor subsecretario de Relaciones Institucionales, doctor Guillermo Seita, y ocupan sus sitials.

Sr. Britos. — Por eso, señor presidente, quiero recordar algunas leyes que se sancionaron y que no se cumplieron, aun en nuestro propio gobierno.

En 1984 sancionamos la ley 23.549, que establecía un impuesto sobre los combustibles y otro sobre el pulso telefónico. A través de ella lográbamos ingresar mensualmente en el sistema 70 o 75 millones de dólares. Lamentablemente, hubo quienes no cumplieron, especialmente, la señora interventora de ENTEL que en ese momento estaba al frente del área. Nosotros hicimos las denuncias, aun habiendo sido designada esa funcionaria por nuestro gobierno. Pero esta señora siempre tuvo actitudes soberbias en

contra del Parlamento y nunca quiso responder los pedidos de informes por incumplimiento.

En noviembre de 1989 se le dio una moratoria. Finalmente, dentro de la ley de reforma del Estado, se había determinado la venta de ENTEL a compañías privadas. Así se hizo; pero cuando se concretó la venta, esta señora interventora —tal vez por olvido; no sabemos exactamente cuáles fueron las causas— también dejó de transferir al sistema previsional 130 millones de dólares. Esto fue reclamado ante la justicia. Esos 130 millones de dólares, actualizados, hoy equivalen a 246 millones de dólares, cifra con la que si nosotros hubiéramos contado, habríamos podido solucionar el problema de estos compañeros jubilados y ya haber adelantado estos pocos australes que les podemos otorgar de aumento.

Nuestro gobierno no se niega a dar el aumento a los jubilados pero necesita de la responsabilidad y del apoyo del Parlamento para que entre todos, mediante una norma específica, podamos determinar un régimen que beneficie a todos ellos.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital Federal.

Sr. Trilla. — Señor presidente: el proyecto de ley que estamos considerando viene en revisión de la Cámara de Diputados, donde por la preocupación que despertó derivó en una serie de reformas tendientes a encontrar soluciones circunstanciales —después voy a explicar por qué— a este tema del régimen de seguridad social que afecta, según planillas de cobro, a alrededor de 3.300.000 beneficiarios.

Por cierto, aquí también se ha creado una gran expectativa y sentimos una profunda preocupación por encontrar una salida rápida a efectos de que el Tesoro nacional cuente con los fondos necesarios para hacer frente a las erogaciones que deberán realizarse como consecuencia de esta decisión.

Comparto lo expresado por el señor senador por San Luis respecto de la esperanza de toda la población beneficiaria del sistema de jubilaciones y pensiones de la República Argentina de poder cobrar algo así como unos treinta dólares adicionales por mes. Estoy convencido de que se trata de una solución parcial. De lo que no estoy convencido, señor presidente, es de que sea la panacea que elimine los problemas del sistema de seguridad social en la Argentina. Digo esto porque si bien es cierto que debemos ofrecer este paliativo en forma inmediata, no puedo dejar de manifestar con absoluta claridad que el sistema de seguridad social en la República Ar-

gentina prácticamente está quebrado. Esto es así no sólo porque falten fondos que, de existir, quizás podrían brindar alguna solución, sino porque el sistema no ofrece la consistencia necesaria para su autofinanciamiento como producto de una serie de circunstancias que se fueron dando, fundamentalmente a partir del momento en que ciertas áreas importantes se financiaron a su costo.

El sistema de seguridad social, como muy bien dijo el señor senador Britos, nace a principios de siglo, cuando se vota en la Cámara de Diputados, en 1903, la ley 4.349, que atendía específicamente la situación de los empleados públicos. Sobre esa base, a posteriori se dieron las distintas alternativas que realmente permitieron crear un sistema que en aquel momento era efectivo en su totalidad. Tenemos que estar orgullosos de que haya existido un sistema como aquel que se fue creando paulatinamente desde principios de siglo hasta fines de los años 50.

Posteriormente comenzaron a sucederse circunstancias importantes que descalificaron el sistema y tornaron su estructura endeble en cuanto a su propia financiación, la cual pudo resistir varios años en razón de la acumulación inicial de fondos y debido a que funcionaba la ecuación ahorro-distribución. En aquel entonces los ingresos superaban holgadamente a los egresos, y durante la década del 50 la relación entre activos y pasivos fue prácticamente de 4 a 1. Debido a ello, era posible financiar un sistema beneficioso, holgado, responsable y realmente solidario para todos los compatriotas que eran beneficiarios de este régimen en razón de los años de servicio cumplidos en bien del propio país, de su familia y de sí mismos.

Sin embargo, el sistema empezó a deteriorarse, en primer lugar —y sin entrar en el problema de fondo en las circunstancias o connotaciones políticas que pueda tener—, como consecuencia de que el propio Estado comenzó a recurrir a las cajas, a los fondos de los servicios de seguridad, procurando solventar sus déficit presupuestarios, desde luego con la colocación, en los primeros momentos, de los títulos del crédito argentino interno que con los años y en razón del proceso inflacionario y de la propia renta terminaron prácticamente en cero.

Pero además, y lo dijo bien el señor senador Britos, se fueron agregando situaciones de regímenes especiales, más allá de los que ahora tienen popularidad periodística, como es el caso de los regímenes de privilegio. Esas situaciones también fueron deteriorando paulatinamente los fondos del sistema porque los beneficios que se

fueron otorgando a algunos sectores —seguramente justos y con plena conciencia de la realidad de los trabajadores de cada uno de esos sectores— producían un efecto que iba en contra del propio sistema, que no recibía de esos mismos sectores los fondos suficientes para hacer frente a los posteriores reclamos de esos beneficios.

También nos tenemos que referir a los regímenes que permiten el retiro con muchos menos años de los que son habituales, o sea, los 55 y 60 establecidos por la ley 18.037, o los 60 y 65 de la ley 18.038, de autónomos. Contrariamente a lo establecido por estas normas, hay retiros a los 45 o a los 52 años, según los regímenes y situaciones especiales cuya razón no entramos a criticar. También hay retiros con 20 ó 25 años de servicios, como es el caso de los maestros de frontera y de los docentes de todo el país, respectivamente, respecto de los cuales —repito— no discutimos su legitimidad, pero no tienen, como es obvio, la financiación apropiada.

Vale decir que hace bien el Congreso cuando determina la creación de una comisión bicameral, porque no sólo se tiene que revisar la totalidad de los regímenes especiales que se derogan por esta iniciativa sino también la infraestructura total de los distintos regímenes que comprenden un importantísimo número de beneficiarios y que necesitan una financiación especial de otro tipo para cubrir sus faltantes y hacer realidad el beneficio que se pretende otorgar.

Pero, a su vez, deberíamos rever si las nuevas realidades que se viven no aconsejarían elevar los promedios de vida actuales. Todo esto lo tenemos que analizar a la luz de los avances de la medicina clínica y quirúrgica, de la farmacopea y de la salud de excelencia a la que se está llegando en el mundo privilegiado. Es probable, entonces, que haya que introducir alguna reforma relacionada con este tema que dejó planteado.

Además, hay tecnología de avanzada que permite aislar a los obreros que actúan en ámbitos contagiosos. Esto también hay que tomarlo en cuenta.

En fin, el asunto es muy complejo y hay que encararlo con valentía, considerando la totalidad del sistema. Es cierto que está en crisis y que va en camino de ser terminal; por eso digo que es importante que el problema se analice desde una perspectiva integral. Los trescientos mil australes por mes son una gota de agua en el mar de las dificultades por las que hoy atraviesa este sistema.

Señor presidente: el bloque radical ha analizado en profundidad esta cuestión y está absolutamente decidido, por propia convicción, a lograr los fondos que permitan salvar circunstancialmente esta coyuntura financiera que se ha presentado.

Sin embargo, nuestra bloque es absolutamente consciente de que esto no constituye una solución completa. De una vez por todas y de una manera u otra tenemos que encarar el camino que nos lleve a una solución integral. Hay que producir una transformación para que al final de ese camino tengamos la seguridad de encontrarnos con un sistema adecuado y saneado.

Nuestro bloque va a votar favorablemente en general este proyecto de ley y va a apoyar en particular aquellas medidas relacionadas con la generación de fondos que alimenten el tesoro de este sistema, con el objeto de hacer frente a las erogaciones comprometidas.

De cualquier modo, nuestro bloque es consciente de que en los últimos tiempos venimos utilizando métodos similares para buscar recursos que permitan ir salvando, de forma también circunstancial, a otros sectores del quehacer nacional. Así, por ejemplo, el Parlamento aprobó medidas para recaudar fondos que alimentaran el sistema educativo. No hemos hecho el monitoreo acerca de cómo fueron manejados esos fondos, pero seguramente se cumplieron las disposiciones que en su oportunidad dispuso el Congreso a tales fines, que por cierto no han resultado suficientes para solucionar en forma definitiva la situación de ese sector.

La crisis abarca obviamente también al ámbito educacional. En otra oportunidad tendremos que encarar a fondo este tema. De cualquier forma, todo esto está indicando que cada tanto nos vemos obligados a dar pinceladas circunstanciales para solucionar situaciones coyunturales. Esto que hoy vamos a hacer para el sistema previsional también tendremos que hacerlo en algún momento con el de salud, con el vinculado con la infraestructura eléctrica y con tantos otros sectores.

Hay que terminar con la mala costumbre de dejar las cosas para mañana cuando hay un poco de respiro. Aquello de "argentinos a las cosas" es algo que debemos empezar a hacer, coincidiendo con quien alguna vez nos lo dijo. Parece que todavía seguimos creyendo que podemos salvar las cosas cuando el agua nos llegó al cuello.

Como dije, vamos a apoyar este proyecto de ley en lo relacionado con los fondos para este sistema.

Para dar un orden al tratamiento de esta iniciativa, consideraremos los distintos aspectos del proyecto de ley tal como vino de la Cámara de Diputados para tener una visión orgánica.

Sabemos que la bancada justicialista pondrá oportunamente algunas modificaciones, pero nosotros nos vamos a ceñir exclusivamente a los puntos que vamos a apoyar.

Como en particular perderemos la votación en aquellos títulos que votaremos en contra, algunos de los senadores del bloque de la Unión Cívica Radical harán las observaciones pertinentes a fin de que puedan tenerse en cuenta en algún momento.

El título I, que se refiere al financiamiento del Régimen Nacional de Previsión Social, va a ser votado favorablemente por nuestra bancada teniendo en cuenta su vinculación con los títulos III y IV en cuanto al impuesto a los combustibles líquidos y gaseosos y a las modificaciones a la ley del Fondo Nacional de la Vivienda. En efecto, los aportes con destino al Fondo Nacional de la Vivienda quedan transferidos, a partir de la fecha de entrada en vigor del proyecto de ley que estamos considerando, al Régimen Nacional de Previsión Social. Esos aportes, que antes se hacían teniendo en cuenta la nómina salarial, a partir de la sanción de este proyecto tienen en cuenta la estructura del impuesto a los combustibles.

El efecto en la recaudación es neutro. Lo que se pierde en recaudación del impuesto a los combustibles líquidos y gaseosos se compensa con el aporte directo del 5 por ciento de la parte empleadora, que antes lo hacía con destino al FONAVI.

El proyecto tuvo su origen en el Ministerio de Economía. Esta noche tenemos el gusto de tener en el recinto al señor ministro de Economía, al subsecretario de Finanzas Carlos Tacchi y al subsecretario de Recursos Tributarios, quienes conocen el tema desde el punto de vista macroeconómico y han plasmado la homogenización del sistema para que cada área tenga sus propios recursos.

Desde un punto de vista estrictamente académico o técnico, esto estaría bien; pero nosotros consideramos que la reforma que se promueve en el título III necesita un mayor estudio porque existen dificultades de interpretación en cuanto a la estructura de los nuevos precios y de los impuestos sobre los combustibles.

Sabemos que las provincias se preocupan por el hecho de encontrarse con un menor importe provocando cierto tipo de inquietudes. De cual-

quier manera esto tiene que responder a otro tipo de legislación, o sea que cada asunto debe tener su propia ley que defina la transformación del mismo. Así, la ley creadora del Fondo Nacional de la Vivienda concreta y definida deberá tener en un momento determinado una ley que la reforme, sin quedar inmersa en un manejo de situaciones mayores en las que de rondón se solucionen problemas que deben ser tratados estructuralmente en función de metodologías de legislación más adecuadas.

El criterio de homogeneización habría funcionado en todo caso para el problema que estamos mencionando. De cualquier manera, este proyecto busca otro tipo de recursos que no pertenecen al mismo sistema para cubrir las diferencias, si bien académicamente sería correcto encontrar los recursos en el sistema de seguridad social para solventar sus necesidades.

El título II se refiere a la afectación del IVA al régimen nacional de previsión social. Estamos de acuerdo con ello porque en verdad éste es uno de los dos puntos más importantes para encontrar los resortes de la financiación de esta nueva erogación.

Concretamente se eleva la alícuota del impuesto al 18 por ciento, es decir, dos puntos más. Se trata prácticamente de un 11 por ciento más que permitirá encontrar una solución, por lo menos mínima, en la medida en que se mantenga la cifra actual de 60 millones de dólares mensuales. Pero hemos escuchado al señor ministro que frente a una reactivación económica seguramente se encontrará una mejor solución o un mayor monto.

En el texto del proyecto están hechas las modificaciones necesarias que permiten adaptar las disposiciones originales a la ley de impuesto al valor agregado y modifican taxativamente aquellos artículos que merecen un tratamiento específico a raíz de esta modificación.

Consecuentemente se produce un hecho nuevo en el texto legal, es decir, la forma en que se distribuirán los fondos destinados al tesoro del sistema. Así, hay un artículo que dispone que del producido del impuesto establecido, el 11 por ciento se destinará al régimen nacional de previsión social. Este 11 por ciento representa, prácticamente, los dos puntos más de incremento del impuesto al valor agregado —del 16 al 18 por ciento—. Del 11 por ciento, el 90 por ciento es para el financiamiento del régimen nacional de previsión social y el 10 por ciento para ser distribuido entre las jurisdicciones provinciales y la Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires, considerada a estos efectos como una provincia más.

Cuando además existan cajas de previsión o de seguridad social en jurisdicciones municipales de las provincias, el proyecto crea para ellas un mecanismo de distribución. El importe a distribuir se determina en función del número total de beneficiarios de los regímenes previsionales nacionales, provinciales y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. El 90 por ciento a distribuir se deducirá de acuerdo con lo indicado en el inciso a), que son los fondos destinados al Tesoro nacional y el 10 por ciento va al tesoro de las provincias y de las municipalidades.

Según el inciso b), el 89 por ciento restante permanece dentro del sistema de la ley 23.548, de coparticipación. En consecuencia, estos artículos tendrán nuestra aprobación.

En cuanto al título III, sobre el impuesto a los combustibles líquidos, sé que ha suscitado inquietudes de senadores de otros partidos, como el señor senador por San Juan, que determinan su voto en contra. Considero que este asunto es neutral respecto del tema que vamos a tratar fundamentalmente, y que algunas de las modificaciones que se van a producir mejorarán ciertos aspectos técnicos concernientes a este título. Seguramente, los senadores que representan a las diferentes provincias harán los planteos que consideren necesarios en función de las lesiones a los intereses provinciales que, según ellos interpretan, puede causar este proyecto. Yo solamente me ocupo de fundamentar el voto de nuestro bloque.

En lo que se refiere al título IV, sobre modificaciones a la ley del Fondo Nacional de la Vivienda, mantenemos, desde un punto de vista académico, nuestro criterio en el sentido de que cada ley debe ser modificada individualmente y no introduciendo de contrabando esas modificaciones en medio de disposiciones que se refieren a un asunto completamente distinto.

El inciso 6 del artículo 8º del título IV establece un mínimo de 70 millones de dólares mensuales para afrontar la construcción de viviendas en casi todas las provincias. Esto es muy importante. Si no tiene éxito nuestra propuesta de eliminar este título, propondremos que esta cantidad pase a ser de 80 millones de dólares, de acuerdo con los cálculos que hemos hecho teniendo en cuenta la desestacionalización de los aguinaldos. Esta cantidad sería el término medio de lo que se viene recaudando ahora como consecuencia del sistema que se anula por el título I. En su momento volveremos a plantear esta cuestión.

Sé que el señor senador Britos ha dicho algo con respecto a la derogación de regímenes de jubilaciones especiales, —contenida en el título V— y también ha dejado de decir algunas cosas. Estamos totalmente de acuerdo con que se incorpore el decreto 1.645/78 porque se refiere a las jubilaciones del área respectiva en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. En esto la lógica permite dar un sentido global y equilibrado a esta nueva orientación.

También creemos que deben hacerse algunas otras correcciones en cuanto a la terminología.

Hemos dicho al comienzo de nuestra exposición que esto debe ser tratado por la comisión bicameral. Nos parece bien que deba emitir su dictamen antes del 31 de diciembre a efectos de que las cámaras puedan resolver el tema, no solamente revisando y volviendo a estudiar todos los regímenes sino también todos los sistemas de los que hemos hablado al comienzo de nuestra disertación.

Con respecto al título VI, sobre el impuesto a los bienes no afectados a la actividad productiva, se trata también de un recurso que se busca para complementar los gastos que irroga la nueva promoción. Se está tratando de dar un aumento a cada uno de los beneficiarios del sistema a través de un "impuesto a los bienes no afectados a la actividad productiva". Los sujetos serán las personas físicas y tendrán que pagar, salvo algunas situaciones específicas, el 1 por ciento cuando se superara el equivalente a 100 mil dólares en activos.

El conocimiento global del tema nos ha permitido establecer que se podrían recaudar 60 millones de dólares anuales que, de alguna manera, complementarían las necesidades del Tesoro.

Considerando el total de lo que teóricamente se erogaría por el aumento que estamos tratando —90 millones de dólares—, lo producido por el IVA, salvo un incremento importante en la recaudación, no alcanza de ninguna manera.

Hemos considerado más prudente tener la fuente de estos recursos a través de la reimplantación del impuesto a los patrimonios. ¿Por qué? En primer lugar por una razón de tipo práctico pero también doctrinaria: una ley debe tener al ser votada una serie de acondicionamientos que le permitan incorporarse al universo de la economía, en este caso de nuestro país. El impuesto a los patrimonios, que es progresivo, tiene jurisprudencia administrativa proveniente de la Dirección General Impositiva y jurisprudencia judicial para resolver los reclamos existentes.

Entonces, ya es un paquete unificado, de situación definida y de fácil colocación, porque hay un acostumbramiento a este pago, que hace dos años no se efectúa.

En reemplazo de esto tenemos un sistema totalmente distinto, que no considera las deudas y cuya liquidación recién podrá hacerla el contribuyente el 31 de diciembre de este año.

Si la obligatoriedad se trasladara al año que viene se ocasionarían muchas dificultades, salvo que de alguna manera se logre con algún artículo el pago de los anticipos antes de que los contribuyentes hagan su propio cálculo de lo que les corresponde pagar. Esto deben hacerlo al 31 de diciembre, lo cual nos parece muy difícil. De manera que cuando tratemos este título presentaremos como propuesta la restitución del impuesto a los patrimonios y oportunamente lo haremos llegar a la Secretaría para su tratamiento.

Es cierto que en este título se consideran también los bienes que los contribuyentes de la Argentina tienen en el exterior. Pero también es cierto, a nuestro criterio y también lo ha manifestado así en la Cámara de Diputados el diputado Baglini, que el sistema de recaudación respecto de los capitales colocados en el exterior, ya sea en inmuebles u otra forma que provocan una inversión fuera del país, debe ser tratado también específicamente y con el cuidado necesario, teniendo en cuenta el manejo de las relaciones legislativas en el orden internacional. Quizás éste sería un factor importante para incorporar en la reestructuración impositiva, cuyo proyecto ingresó por la Cámara de Diputados como iniciativa del Poder Ejecutivo.

Nosotros estamos de acuerdo en que deben pagar impuestos los que de una manera u otra tienen dineros invertidos en el exterior. Pero debe existir un lógico y total ordenamiento del sistema para que estas situaciones no se incluyan de rondón, no digo con un análisis somero pero sí no completo, como es debido. Honestamente no lo hemos hecho así, por lo menos en mi caso, por la complejidad del tema.

Si en este título reemplazáramos este nuevo impuesto por el ya existente, provocaríamos una mayor recaudación. Recordemos que en 1988 llegó a los 150 millones de dólares.

Por otra parte, también sabemos que los impuestos van tomando cuerpo, se va introduciendo una mecánica de la gestión económica en el país, viene el acostumbramiento y la aceptabilidad de quienes deben contribuir, de manera que se produce un paulatino incremento en esta materia.

Que quede bien claro que estamos de acuerdo en encontrar otra boca de expendio, llamémosla así, de bienes y de fondos que nos permita alimentar el tesoro del sistema. Pero entendemos que debe ser a través de la vieja ley de patrimonios.

El título que sigue es el VII, que se refiere al destino de los recursos de privatizaciones. Nosotros también estamos de acuerdo, pero con alguna disidencia en cuanto a su formulación, ya que en ella no hay una orientación definida ni una concreta aclaración de para qué se van a utilizar estos fondos. Se dice sencillamente en su artículo 32: "Destínase al Régimen Nacional de Previsión Social el treinta por ciento (30%) de los recursos brutos que se obtengan de las privatizaciones realizadas conforme a los mecanismos de la ley..." Entonces, tal cual está redactado parecería que esos fondos tienen que ser distribuidos para ubicarlos en razón de la ecuación ingreso-distribución, que es la que se opone al de ahorro-distribución. Como dije al principio de mi disertación, estos importes serán temporales y circunstanciales como consecuencia de las privatizaciones que pueden darse paulatinamente, pero que ocurren una sola vez. Es decir, la privatización de un bien del patrimonio nacional o la venta de inmuebles, de acciones o de lo que fuere ocurre una sola vez.

Y nuestra pretensión, señor presidente, es crear un fondo especial de capitalización. Por eso hemos elaborado nuestro propio proyecto, que haré llegar a Secretaría cuando resulte oportuno. Se propone la creación de un fondo con el que se puedan originar esos capitales, para que se recree lo que alguna vez existió en el sistema de previsión social; era casualmente un fondo específico que se alimentaba con la rentabilidad de sus propias colocaciones, que beneficiaba al sistema global e incluía a los beneficiarios en ese ordenamiento de retribuciones, teniendo en cuenta la calidad de vida necesaria.

Tenemos conocimiento del proyecto tal como ha sido sancionado por la Cámara de Diputados. Tengo entendido que la bancada oficialista ha incorporado algunos puntos. Pero, como todavía ello no ha sido mencionado en este recinto, en el momento oportuno formularé los comentarios del caso.

Sr. Romero Feris. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — La Presidencia informa que, en virtud de lo establecido por el artículo 92 de la Constitución Nacional, el señor ministro ha manifestado su intención de concurrir a este recinto para participar en el debate.

Por esta razón, concedo el uso de la palabra al señor ministro de Economía.

Sr. Ministro de Economía. — Señor presidente, señores senadores: no deseo extenderme demasiado, pero sentí la necesidad de venir a rendir cuentas. Ocurre que las seis jornadas en que ustedes me interpellaron durante febrero y parte de marzo pasados, me resultaron muy importantes y ciertamente muy útiles; pude palpar en este recinto la importancia que los señores senadores otorgaban a varias cuestiones relacionadas con lo que hoy se está discutiendo.

En aquel momento percibí que con gran razón los señores senadores de prácticamente todas las bancadas señalaban la importancia de aumentar en forma global la recaudación impositiva para poder eliminar el déficit fiscal y prestar atención a urgentes necesidades sociales. Pero indicaban que esa recaudación debía estar preponderantemente disponible para las provincias y para el sistema de seguridad social, dado que son ellas las responsables de prestar los servicios de educación, salud, seguridad, justicia y asistencia social. Y es el sistema de seguridad social el que debe atender las legítimas demandas de quienes han dedicado toda su vida al trabajo y tienen ahora derecho a gozár de su merecido retiro.

En febrero ustedes habilitaron el tratamiento de un proyecto que introdujo algunas modificaciones a la legislación impositiva; pero sobre todo nos brindó herramientas para mejorar la administración tributaria.

En marzo ustedes aprobaron otro importante proyecto que introdujo modificaciones sustantivas en el sistema monetario argentino: lo que luego fue la denominada ley de convertibilidad.

Quiero decirles, señores senadores, que estos dos importantes instrumentos, esos dos importantes proyectos que ustedes sancionaron en aquella oportunidad han comenzado a producir resultados: los que ustedes muy acertadamente señalaron que debíamos conseguir.

Tengo aquí las cifras que corresponden al trimestre en curso en materia de recaudación, particularmente julio. Se trata de proyecciones mensuales pero que al día 23 se hallan cumplidas con una precisión que indica sólo el 1 por ciento de error; es decir, prácticamente logradas de manera total.

Vale la pena destacar que julio del año pasado fue el mes de mejor recaudación de todo 1990, con un monto de 20 billones de australes, a valor corriente de julio de este año. Esta recaudación fue lograda en concepto de lo ingresado a la Dirección General Impositiva, a la Administración

Nacional de Aduanas y al sistema de seguridad social. Este mes se van a recaudar —prácticamente, en los veintitrés primeros días, ya se ha recaudado la proporción correspondiente— 24,7 billones de australes, lo que representa un aumento global del 23,3 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado. Este aumento global en la recaudación se obtiene a pesar de que los recursos no coparticipados experimentan una caída del 49 por ciento por la eliminación de las retenciones a las exportaciones. Esto quiere decir que todo el aumento viene por la recaudación de impuestos coparticipados y por los recursos del sistema de seguridad social.

Esta composición de la recaudación determina que el Tesoro nacional reciba en julio exactamente la misma cifra que percibió en el mismo mes del año anterior. En realidad el aumento es insignificante —1,4 por ciento—; pero las provincias reciben este mes de julio 6,9 billones contra 4,9 billones que percibieron en julio del año pasado; o sea un aumento del 41,4 por ciento, siempre expresado en moneda constante.

Por su parte, el sistema de seguridad social recibe en julio 7,3 billones contra 5,5 billones que percibió en el mismo mes del año anterior, o sea un aumento del 31,4 por ciento. Esto quiere decir que la legislación por ustedes sancionada y posibilitada con gran énfasis en la administración tributaria ha permitido por un lado un muy importante aumento global en la recaudación. Pero tal como ustedes señalaron que era importante que ocurriera, el grueso de este aumento va destinado a las provincias y al sistema de seguridad social.

La aprobación de la ley de convertibilidad del austral ha posibilitado erradicar la recaudación del impuesto inflacionario. Esto significa que la Nación ya no recurre a este impuesto que en la práctica era no coparticipable, con la desventaja adicional de que erosionaba las bases de recaudación de recursos coparticipables de la Nación y de recursos propios de las provincias. Como contrapartida, las provincias han recibido en el trimestre abril-mayo-junio niveles "récord" de coparticipación federal de impuestos.

Tengo aquí cifras en moneda constante correspondientes a junio de 1991. En el trimestre abril-mayo-junio el conjunto de provincias recibió 18 billones de australes contra 12 billones del mismo trimestre del año anterior, y contra 6 billones de australes —siempre en moneda constante— correspondientes al mismo trimestre de 1989. Esto quiere decir que hemos triplicado la coparticipación federal del impuesto con res-

pecto a dos años atrás y la hemos aumentado en un 50 por ciento con respecto a 1990.

Si agregamos los aportes del Tesoro y las regalías petroleras, vemos que hemos pasado de 11 billones en abril-mayo-junio de 1989, a 14 billones en 1990 y a 20,5 billones en abril-mayo-junio de 1991.

Es decir, que estas cifras que quise traer al debate hablan a las claras de que hemos conseguido los objetivos de la legislación que ustedes aprobaron en febrero y marzo, con el énfasis que quedó claro en los planteos que legítimamente hicieron los señores senadores en aquel momento.

Con la autoridad que brinda el poder mostrar resultados consecuentes con lo que los señores senadores exigieron en aquella oportunidad, quiero decirles hoy que el proyecto de ley para el financiamiento del sistema de seguridad social que oportunamente elaboró el Poder Ejecutivo, con las modificaciones que se le introdujeron en la Cámara de Diputados en base a una tarea muy eficaz que hizo la Cámara baja y con las propuestas de modificación que ha decidido proponer el bloque justicialista de la Honorable Cámara de Senadores, impulsa una modificación muy importante que vá a dar excelentes resultados, pues va a mejorar el financiamiento del sistema de seguridad social permitiendo afrontar un aumento que no es demasiado grande; más bien es todavía muy reducido, diríamos, pero va a ayudar a paliar la situación crítica por la que atraviesan los jubilados y pensionados.

—Ingresa en el recinto el señor asesor de la Subsecretaría de Combustibles del Ministerio de Economía, doctor Bernardo Luis Beller y ocupa su sitio.

Sr. Ministro de Economía. — No voy a entrar en los detalles del texto del proyecto en consideración. Las exposiciones que acabo de escuchar, tanto de parte del señor senador Britos como del señor senador Trilla, han sido muy claras. Sólo quiero explicar algunos pocos temas que surgieron como interrogantes de los señores senadores en la conversación que mantuvimos ayer con los presidentes de bloque.

En particular quiero referirme a una inquietud planteada por el señor senador por San Juan, sobre los fondos de energía eléctrica. Hay un artículo en el capítulo que se refiere a las modificaciones al impuesto a los combustibles, que dispone que los fondos anteriormente denominados de energía eléctrica y de grandes obras eléctricas, pasen al Tesoro Nacional.

El senador por San Juan planteó el interrogante de qué ocurriría con el Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior que anteriormente se alimentaba con un porcentaje del Fondo Nacional de Energía Eléctrica y señaló que posiblemente lo que estábamos disponiendo en este proyecto de ley podía significar una reducción de los recursos de las provincias para el desarrollo eléctrico.

Pues bien, he examinado el tema con detenimiento y quiero traerles la tranquilidad de que de ninguna manera se afecta la disponibilidad de recursos para el desarrollo eléctrico del interior. En el régimen anterior al decreto 2.733 que sancionó el Poder Ejecutivo con carácter de necesidad y urgencia a fines de 1990, el Fondo Nacional de Energía Eléctrica recibía una recaudación anual del orden de los 100 millones de dólares y el Fondo Nacional de Energía, que se nutría del impuesto a los combustibles, recibía otros 160 millones de dólares. Del primero, un 20 por ciento iba al FEDEI (Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior); y del segundo, un 10 por ciento se destinaba al referido fondo. Eso significaba ingresos anuales al Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior por 36 millones de dólares.

Pues bien, en el proyecto que está a consideración de esta Honorable Cámara se deriva al Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior el 10 por ciento del porcentaje que corresponde a las provincias, en concepto de distribución del impuesto a los combustibles. Ese 10 por ciento del 13 por ciento actual —que será del 29 por ciento al final del período porque el porcentaje de las provincias aumenta con el tiempo— significa ahora un importe de 32 millones de dólares. A medida que se va ampliando el porcentaje asignado al conjunto de las provincias, esa cifra llegará prácticamente a los 60 millones de dólares al final del período.

En consecuencia, para el lapso en consideración, el FEDEI va a recibir cifras equivalentes e incluso mayores a las que estaba recibiendo con anterioridad. Adicionalmente, en la propuesta de marco regulatorio para el sector eléctrico que está siendo considerada por este Honorable Senado, sobre la base de un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, se recrea el Fondo Nacional de Energía Eléctrica, con una recaudación aproximada a los 90 millones de dólares anuales; cifra que se obtendrá con un impuesto de 3 dólares sobre... no recuerdo bien en este momento cuál es la unidad de generación eléctrica, pero la recaudación será de 90 millones de dólares por año.

Lo concreto es que de esa suma el 40 por ciento se adicionaría al FEDEI y el 60 por ciento restante se distribuiría entre las provincias, conforme a los distribuidores que determine el Consejo Federal de Energía.

Quiero señalar, entonces, que además de la alimentación de recursos que el actual proyecto prevé para el FEDEI —que equivale en monto a lo que recibía este Fondo antes de ser modificado por el decreto 2.733— hay otro proyecto en el Honorable Senado de la Nación relacionado con una propuesta de marco regulatorio eléctrico, en función del cual se adicionará una cifra prácticamente triplicada de recursos con destino al desarrollo eléctrico del interior.

Por lo tanto, quiero traer a los señores senadores la seguridad de que el proyecto que está en consideración esta noche no significa ninguna disminución de recursos para el Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior.

Otra cuestión que fue planteada por los señores senadores se refiere al régimen de los procedimientos tributarios para luchar contra la evasión. Presenté este tema en la reunión de presidentes de bloque, pero debo reconocer que lo hice sin todos los conocimientos técnicos necesarios para poder valorar adecuadamente la importancia de las modificaciones que el bloque Justicialista de esta Honorable Cámara está proponiendo al proyecto que vino aprobado de Diputados y que también habían sido expresadas por el bloque Justicialista en la Cámara Baja.

Por esta razón, si ustedes lo permiten, voy a pedir al subsecretario de Finanzas Públicas, que es especialista en esta materia y que a través de la tarea de administración tributaria que realiza es el artífice del importante aumento de recaudación que hemos logrado en estos meses, que les explique con mayor precisión que la que yo puedo tener el significado de las modificaciones a las que les asignamos tanta importancia dentro del régimen de procedimientos tributarios.

Si el señor presidente y los señores senadores lo permiten, le pediré al doctor Tacchi que haga una breve exposición acerca de esta cuestión.

Con esto daré por concluida mi intervención y desde ya agradezco mucho a los señores senadores el haberme dado la oportunidad de expresar estos conceptos en esta Honorable Cámara.

Sr. Presidente (Menem). — A los efectos de que el señor subsecretario pueda exponer se requiere el consentimiento del cuerpo.

En consecuencia, se va a llamar para proceder a votar el pedido formulado por el señor ministro.

—Se llama para votar.

Sr. Genoud. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: para aprovechar estos minutos hasta que se obtenga quórum, quiero preguntar al señor ministro, teniendo en cuenta su breve exposición, cómo podemos hacer para que no se contradiga el optimismo que él mismo expresa respecto a la mayor recaudación impositiva, si en los últimos meses con esa urgencia que manifestó varias veces para que se reúna el Parlamento y apruebe este proyecto de ley como única vía para poder incrementar en trescientos mil australes el haber de los jubilados, nos hizo quedar a los legisladores nacionales casi como exclusivos responsables ante la opinión pública de la demora en el aumento a los jubilados, afirmando que sancionábamos la ley o no había aumento.

¿Cómo es posible que ello haya sido así, cuando ahora advertimos que el fisco ha logrado una mayor capacidad recaudatoria produciendo un incremento en sus recursos?

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor ministro de Economía.

Sr. Ministro de Economía. — Señor presidente: este importante aumento de la recaudación impositiva ha alcanzado apenas para eliminar el déficit fiscal.

Debo decir a los señores senadores que la recaudación del trimestre abril, mayo y junio, incluyendo todos los ingresos de la DGI, de la Administración Nacional de Aduanas y del sistema de seguridad social, más los ingresos provenientes de la privatización de áreas centrales petroleras, del orden de los seiscientos millones de dólares, toda esa recaudación —repito— permitió cubrir en un ciento por ciento el conjunto de erogaciones corrientes y de capital del Tesoro nacional más las transferencias a las provincias, el cubrimiento de los déficit de algunas empresas del Estado y los pagos de intereses de deuda externa e interna que se hicieron en el período.

Ahora bien, para afrontar aumentos de erogaciones era necesario, y continúa siéndolo, producir un aumento adicional de la recaudación. Por eso, para afrontar el pago de cien millones de dólares adicionales que representan los trescientos mil australes de aumento a los jubilados

que se pretende otorgar era imprescindible que se mejorara el financiamiento del sistema de seguridad social.

Quizás ustedes se pregunten por qué habiéndose producido ya un aumento del 31 por ciento en los recursos del régimen de previsión social en comparación con el año pasado aún necesitamos una recaudación adicional para otorgar este mínimo aumento a la clase pasiva.

La respuesta es sencilla. El nivel del haber jubilatorio mínimo que se está pagando ahora, que ciertamente es muy bajo, se encuentra sin embargo en un 27 por ciento por arriba del nivel que tenía a moneda constante en los dos años anteriores.

Quiere decir que los haberes jubilatorios son reducidos, no obstante lo cual están en un nivel 27 por ciento más alto que hace uno o dos años. Entonces, ya se ha producido un aumento en los haberes jubilatorios.

Por otro lado, ustedes conocen muy bien que con las leyes en vigencia se producen aumentos en las erogaciones del sistema de seguridad social sin que crezcan los haberes. Eso se debe simplemente a la incorporación de nuevos jubilados y pensionados. En los últimos meses se ha producido un aumento del orden de los veinte millones de dólares mensuales en las erogaciones del sistema de seguridad social debido a la incorporación de nuevos jubilados y pensionados a medida que van llegando a la edad del retiro y van cumpliendo con los requisitos para jubilarse.

Además, también se produjo un aumento de las jubilaciones por regímenes especiales, que ha tenido cierto impacto en el costo de las prestaciones. Y como ustedes saben, desde diciembre de 1990 se pagan sentencias que significan costos adicionales del orden de los veinte millones de dólares.

Por eso el importante aumento en la recaudación que se produjo durante los últimos meses en el sistema de seguridad social, en la DGI y en la Administración Nacional de Aduanas apenas alcanzó para cubrir las mayores erogaciones que ya se están afrontando. En consecuencia, para poder soportar un aumento adicional de trescientos mil australes resultaba imprescindible que se sancionaran normas que lo permitieran.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar si el cuerpo autoriza al señor subsecretario de Finanzas Públicas a hacer uso de la palabra en este recinto.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Gass. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — La Presidencia entiende que no existe inconveniente en conceder la palabra al señor senador por Buenos Aires con la aclaración de que acaba de ser aprobada la autorización para que el señor subsecretario de Finanzas Públicas haga uso de ella.

Sr. Gass. — Tengo una inquietud.

Si no entendí mal, el señor ministro expresó que se están pagando juicios a los jubilados. ¿No se dejó esto sin efecto por la ley de emergencia económica?

Sr. Ministro de Economía. — No; 18 mil jubilados que consiguieron sentencias firmes fueron tratados de la siguiente forma. Se les ofreció una transacción consistente en el pago del 60 por ciento del monto de la sentencia en 15 cuotas iguales. De estos 18 mil jubilados con sentencia favorable, 10 mil aceptaron el arreglo propuesto. En consecuencia, se comenzó a pagar el 60 por ciento del monto estipulado en la sentencia en 15 cuotas iguales. Esto representa un costo aproximado de 27 millones de dólares mensuales. Y todavía tenemos varios meses más por delante.

En el caso de que hubieran aceptado la transacción los 18 mil jubilados con sentencia firme, en lugar de 27 millones se estaría pagando mensualmente alrededor de 65 millones de dólares, porque quienes no aceptaron son justamente los jubilados que obtuvieron en promedio sentencias por montos más significativos que aquellos que accedieron a la transacción.

De ahí que el tema de las sentencias, que obliga al sistema previsional a pagar las diferencias entre los beneficios que otorga la ley 18.037 y los haberes efectivamente cobrados por los jubilados, plantea un problema serio a las cajas de jubilaciones.

Existen 55 mil juicios susceptibles de dar lugar a sentencias en períodos muy cortos, que podrían triplicar las demandas de fondos del sistema previsional destinados a su cumplimiento.

De aquí surge también la urgencia en el tratamiento del proyecto de ley de consolidación de pasivos que en este momento se encuentra en la Cámara de Diputados y que esperamos pase luego a esta Honorable Cámara de Senadores.

Realmente se trata de un problema serio. No está muy clara la cuestión de si la ley de emergencia económica suspendió la ejecución de las sentencias o no. Como ustedes saben, la ley exceptuó a las sentencias de los denominados juicios por causa alimentaria. Y los jueces interpretaron que las resoluciones a favor de los jubilados se encuentran en esta categoría.

Reitero que el problema es serio. En realidad las cajas de jubilaciones utilizaron la ley de emergencia económica para dilatar el pago de las sentencias. Se trata de un problema grave, latente, que podría dar lugar a embargos sobre los recursos de las cajas de jubilaciones en cualquier momento. Y son alimentarios por su naturaleza.

Sr. Presidente (Menem). — La Presidencia solicita por favor al señor auxiliar que le acerque el micrófono al señor subsecretario.

Sr. Velázquez. — De todos modos, no fue la información que nos dio el senador Britos.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor subsecretario de Finanzas Públicas.

Sr. Britos. — Lo engaño una vez más, señor senador.

Sr. Velázquez. — Así nos tiene.

Sr. Subsecretario de Finanzas Públicas. — Señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores, señores senadores: agradezco que me permitan expresar mi criterio y mi convicción acerca de lo que considero que resulta hoy más que nunca necesario para luchar contra el incumplimiento tributario: el proyecto de incorporación de reformas a la ley de procedimiento tributario. Se basa principalmente en que no hay mejor impuesto que combatir la evasión; de esa manera se introduce equidad en todo el sistema tributario y se evita la ficción derivada de manejarse en términos puramente nominales en lugar de guiarse por la recaudación efectiva.

La realidad ha indicado que no es con medidas espectaculares sino con acciones sistemáticas como se podrá reducir el alto grado de evasión que hoy se percibe. La propuesta incorpora tres medidas básicas y dos complementarias. Se trata de un desprendimiento del Título V de la propuesta de reforma tributaria presentada en mayo en la Honorable Cámara de Diputados.

Una de las medidas, tal vez la de mayor relevancia, incorpora la acción sancionatoria, inducida por propia voluntad del consumidor. ¿Cuál es la circunstancia que mueve a proponer esa sanción? Es un hecho claro desde el punto de vista económico. Si bien no hay en el mercado una gran competencia que permita que el mecanismo de los precios actúe con total transparencia, no se justifica la ausencia de dos precios.

Cuando cada uno de nosotros concurre, en su carácter de consumidor atomizado, a un comercio para demandar un producto, encuentra generalmente sobre el mostrador principal, o cercano a la caja, los formularios de facturación para el pago de los tributos. Pero cuando después de abonar solicita la factura, el empresario

retira otro formulario que estaba debajo del mostrador, agrega un importe y se lo da. ¿Qué ha ocurrido? Algo muy importante. No hubo dos precios. No hubo un precio sin impuesto y uno con impuesto. El ciudadano, el consumidor, pagó un solo precio, pagó el impuesto, pero éste ha visto interrumpido el camino de doble vía y de tránsito obligatorio que permanentemente mencionamos y que el señor ministro anunciara en su discurso inaugural. Por una vía los recursos van al Estado, que los exige en forma coercitiva a la ciudadanía; por la otra vía el Estado da un respaldo ético a la acción de recaudar, volcando esos recursos a través del gasto público bien orientado y administrado con honestidad y eficiencia. El camino queda interrumpido porque los recursos no son captados por el Estado. La sociedad no percibe que los recursos le corresponden, porque si lo hubiera percibido, esa sociedad hubiera quitado mucho antes en la Argentina el marco con el cual durante muchos años hemos "bañado de derecho" al evasor y nos hemos olvidado de respetar el derecho a que los dineros de la ciudadanía circulen y no queden interrumpidos en el camino en poder del comerciante o el empresario que al vender el producto le dio una factura falsa y se quedó con los recursos.

Esto trae graves consecuencias desde un punto de vista macroeconómico. Primero porque se da pie a un destructivo juego de suma cero que es la evasión, porque origina otro de autodefensa, que es de mayor evasión puesto que el que está cumpliendo no puede competir con su homogéneo productor o comercializador de productos. Además de no poder competir, muchas veces se incorpora ineficiencia a la economía porque quien evade lo hace para poder subsistir económicamente. Al hacerlo, de esta manera obtiene una cuasirrenta, nada más que a costa de la sociedad.

Pero lo que es más grave aun y que la sociedad no ha percibido y tampoco fue destacado por los tributaristas y economistas es lo siguiente. ¿Qué es lo que ha recibido este señor que se quedó con los dineros de la sociedad al no diferenciarle al consumidor atomizado el precio con o sin impuesto? Ha percibido en forma autónoma un subsidio.

Estos se votan en la ley de presupuesto. Este señor toma subsidio sin necesidad de dicha ley, y a él es al que permanentemente protegemos.

Pero la medida de la clausura, con la acción sancionatoria del consumidor, siempre permite la posibilidad de una total revisión judicial. ¿Por qué tiene esta posibilidad? Porque dispone con

carácter devolutivo del acceso a la Justicia. ¿Qué pedirá el señor? El lucro cesante y el daño emergente.

Cito un ejemplo que vemos todos los días. Habrán visto que a quien estaciona mal se le aplica un cepo. Se le dice que concurra a la Justicia para que se lo saquen. Pero podría ocurrir que el auto estuviera bien estacionado, en un lugar permitido, y que por una equivocación de quien aplicó el cepo se cometiera una restricción al derecho de propiedad, ya que el dueño del automóvil no pudo disponer de él y puede llegar a perder una operación importante, por ejemplo. Tiene derecho entonces a pedir el lucro cesante y el daño emergente a quien le aplicó mal el cepo. Es decir, que el derecho no está lesionado sino ubicado en el lugar que corresponde.

La acción de clausura inducida por el consumidor, para que verdaderamente sea una acción efectiva, es un desglose de la contenida en la ley de procedimientos.

Esto no ha dado los resultados esperados. ¿Por qué? Porque se libra un acta de constatación y se da curso a la Dirección Jurídica de la Dirección General Impositiva, la que en aproximadamente 8 a 10 días dicta una resolución en la mitad de los casos que se le presentan. Es decir que la propia DGI seleociona y elimina la mitad: de cien casos quedan cincuenta en el camino por propia decisión del fisco. Con los restantes cincuenta, como debe darse vista del caso —ya sea en persona o por presentación de un escrito— y como cada vez actúa más la DGI, con la acumulación de audiencias se prolonga el plazo para considerarlos. Hoy estamos en sesenta días, más diez, son setenta. Luego en ese acto de audiencia quedan reconocidos los derechos del contribuyente en otra mitad, con lo que van quedando veinticinco casos de los cien iniciales.

De esos veinticinco casos se dicta resolución fijando la clausura en diez días; estamos ya en ochenta y nos encontramos con que luego se le dan treinta días para que él pueda concurrir a la Justicia y comenzar a aplicársele la clausura. La mitad no concurre; es decir que doce o trece casos aceptan la clausura. La Justicia está recargada de trabajo y congestionada en lo penal económico.

Si llegan tres casos más que se agregan a los citados anteriormente, tendremos dieciséis o diecisiete casos de cincuenta. No los tomo de los cien iniciales, porque cincuenta han hecho la declaración respectiva.

Cuando llega esa medida, ¿qué ocasiona? Unas vacaciones programadas. El individuo, comerciante o empresario, que sabe el día que se

le va a aplicar la clausura con tanta anticipación, organiza unas vacaciones inducido por el Estado o por el fisco. La sanción de clausura no tiene ningún efecto económico porque ha perdido la inmediatez. Esto es lo que se gana con esta propuesta sin perder derecho alguno para el contribuyente porque puede concurrir con acción devolutiva...

Sr. Gass. — ¿Me permite una interrupción, señor subsecretario?

Sr. Presidente (Menem). — Señor subsecretario: el señor senador por Buenos Aires le solicita una interrupción. ¿La concede?

Sr. Subsecretario de Finanzas Públicas. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Gass. — Realmente me asustan sus argumentos. Con este mismo criterio el día de mañana —porque la Justicia es lenta en nuestro país y por ejemplo se crea el lucro cesante o bien una persona puede estar detenida mucho tiempo hasta tener sentencia— la Policía puede aducir este argumento para tomar medidas. Me asusta que se descrea en la Justicia, por más lenta que ésta sea.

Creí que el argumento económico estaba resuelto cuando se hablaba de la lotería del IVA. Ahora resulta que se necesita una medida coercitiva de esta naturaleza.

Sr. León. — Firestone tiene una sentencia de la Corte Suprema de Justicia por la que se la obliga a pagar millones de dólares; han pasado cincuenta y tres días y no se ha notificado ningún abogado de la DGI.

Sr. Subsecretario de Finanzas Públicas. — En mi opinión no es exacto. Fíjense ustedes, y los invito a pensar a algunos de los que están aquí presentes...

Sr. Velázquez. — Todos pensamos.

Sr. Presidente (Menem). — Ruego a los señores senadores que no interrumpan al señor subsecretario.

Continúa en el uso de la palabra el señor subsecretario de Finanzas Públicas.

Sr. Subsecretario de Finanzas Públicas. — ¿A alguno de los que estamos aquí presentes nos preocupa o nos quita el sueño la existencia del Código Penal? En absoluto, porque todos adoptamos y adaptamos nuestro comportamiento a la normativa jurídica tutelada en el Código Penal. Por ejemplo, no matamos, no violamos, no defraudamos, no estafamos. En consecuencia, esa normativa no se nos aplica. Del mismo modo, si

el contribuyente factura y no evade, no se le aplicará la clausura. Es decir que tiene la posibilidad de adaptar su comportamiento y su conducta a la normativa jurídica para que la misma no se le aplique.

Respecto al Loter-IVA, todas las medidas son necesarias. Fijense que en este caso se remiten facturas de las facturas que entrega el contribuyente. Pero ellas no constituyen el ciento por ciento de la base imponible del tributo porque existe la informalidad. Con una acción sistemática se las piensa incorporar al circuito de la formalidad.

Se incorporan dos medidas más. Es común en la Argentina de los últimos tiempos apreciar lo que yo he denominado como el efecto "Triángulo de las Bermudas". El contribuyente aduce haber perdido sus libros de contabilidad. Generalmente los pierde en un taxi; en el interior, como es conocido, se alega que le han sido robados o extraviados.

Otro aspecto más. Cuando se concurre a hacer una inspección, se alega que no están los libros explicando que por razones de economía hubo que despedir personal y que por deslealtad le han destruido los comprobantes.

Y aquí aparecen los tres vértices del triángulo de las Bermudas. En el primero, el juez no puede aplicar sanción. El abogado del fisco no puede hacer valer ninguna determinación de oficio; esto, en el segundo vértice. Y en el tercer vértice, el contribuyente disfruta de los recursos que ha capturado de la sociedad. En el centro, se halla la impotencia en el mar de irregularidades.

Entonces, se incorporan los dos últimos párrafos al artículo 25, admitiendo prueba en contrario, fehaciente, para que el contribuyente efectúe la correspondiente demostración sobre lo que el fisco le determina, aplicando esos índices o por comparación con agentes económicos homogéneos; asimismo, se apunta al monto evadido y a la intimación del pago.

La otra medida incorporada al artículo 25, sin admisión de prueba en contrario, está orientada a cuando en el allanamiento que se efectúa a un contribuyente se captura, se pesca, la informalidad, es decir, se encuentra la contabilidad negra, la que está indicando cuál es el monto de fondos evadidos en ese mes. En tal caso, se solicita autorización para aplicar el porcentaje correspondiente a la evasión sobre las ventas declaradas de los últimos doce meses. Si la informalidad es detectada por doce meses, por un ejercicio, se permite actuar sobre todos los ejercicios no prescritos.

Hay dos medidas más de carácter menor. En cuanto a una de ellas, cabe señalar que el modernismo ha permitido que en la evasión, en ciertos segmentos de la intermediación, principalmente en el segundo segmento, no en el gran segmento, con dos subsectores claros y evidentes, los grandes mayoristas y supermercados, ellos acusen una baja rentabilidad y gran volumen de transacción. La baja rentabilidad, el bajo mercado, es producto de que el software está preparado para que cuando a uno le dan el *ticket* éste refleje lo que ha comprado y tiene que abonar, pero para el registro contable el software está elaborado de tal manera que cada tres o cuatro líneas una sea eliminada a los fines de la contabilidad. Y cuando el monto de compra de una línea supera cierta cantidad, se corre un cero. Entonces, hay baja rentabilidad.

Y viene como anécdota el hecho de que para capturar en parte ese comportamiento se orientó la percepción del IVA al primer segmento, que es el más importante, reteniendo un 20 por ciento del 16 por ciento.

Fueron a la Dirección General Impositiva a plantear el problema del bajo margen de rentabilidad. Se los recibió. Fui consultado e indiqué que contestaran con la declaración de más fondos con un mejor software, creciendo el margen de rentabilidad para los volúmenes reales que mueven y, en consecuencia, no tendrían problemas de saldos excedentes. No ocurrieron más.

Por último, se incorpora también —dado que este tema fue aprobado por ustedes en febrero— un capítulo por el cual se privilegia la fiscalización y cumplimiento, promocionándolo en el sentido de que si hoy se cumple en el ciento por ciento no se haría la verificación respecto de los períodos pasados.

Esta disposición que se había dictado y proyectado fue modificada en la Cámara de Diputados, perdiendo su carácter de presunción de derecho y admitiéndose la prueba en contrario. Está reglamentada pero no la hemos podido poner en vigencia como consecuencia de que se se lo hacía antes de modificar las normas que interrumpen la prescripción mientras se sustanciaba la prueba para todo aquel que hubiera evadido, hoy se abría proceso hacia atrás y alegada o invocada la prueba en contrario llegaba la prescripción.

Este es un aspecto que, para ser corregido, se hallaba incorporado en el proyecto de ley de fe de erratas impreso en el Orden del Día N° 1.163, con fecha 18 de marzo de este año; específicamente en su artículo 5°. Se trata de una he-

rramienta sistemática que, como todas las herramientas útiles, debe ser aplicada.

Entonces, eso es lo que se incorpora como último punto a esta propuesta de reforma tributaria que quedará a consideración de esta Honorable Cámara cuyo único objetivo es, sin lugar a dudas, lograr el claro apotegma por el cual todo el mundo debe pagar para que, a la vez, todos paguemos menos. Pero indudablemente aquí hay una clara segunda finalidad: debemos terminar con la ficción de los sistemas tributarios que no se cumplen, que no sirven para nada, que no implican equidad alguna y que lo único que ofrecen son subsidios implícitos a quienes no corresponde, a consecuencia de lo cual la sociedad ve disminuir recursos que ella necesita en materia de educación, salud, sistemas jubilatorios y seguridad interior.

Sr. Trilla. — Señor presidente, ¿me permite una acotación sobre este tema?

Sr. Presidente (Menem). — Si es breve . . .

Sr. Trilla. — Seré breve.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Señor presidente: cuando realicé mi exposición en defensa de la posición de la minoría indiqué que no iba a plantear algunos aspectos por cuanto hasta ese momento los mismos no habían sido mencionados. Desde luego, a esa altura del debate sólo había hecho uso de la palabra el señor senador por San Luis. Manifesté, reitero, que había algunos elementos que yo entendía iban a ser propuestos por el bloque Justicialista pero que evidentemente, al no haberse concretado propuesta alguna, no podía realizar apreciaciones sobre las ideas que teníamos al respecto.

En lo personal, lógicamente, no puedo interpretar la propuesta del señor subsecretario como si fuera la de un senador; institucionalmente así debe ser. En consecuencia, no podemos tratar a fondo ese tema hasta tanto no tenga estado netamente parlamentario en el recinto, a propuesta de un señor senador.

No obstante quiero indicar, más allá de felicitar al señor ministro por su presencia permanente al tratarse asuntos de importancia como éste, mi especial agradecimiento por la gentileza del doctor Tacchi al concurrir a mi despacho para aclarar algunos temas y por hacer lo propio fundamentalmente con relación al que acaba de exponer. Todo esto me indica su franqueza, su transparencia en el manejo de la cosa pública y su gran formación ética en la concepción de las leyes.

Pero a veces los legisladores debemos tratar los aspectos en consideración en función de la interpretación del comportamiento humano y del nivel de aceptación de las leyes, fundamentalmente impositivas, por parte de nuestra sociedad.

Es cierto que existe un alto nivel de evasión y que esa evasión constituye uno de los fundamentos de las dificultades por las que atraviesa el Tesoro nacional. Pero también lo es que fundamenta los problemas por los que atraviesa el sistema y que constituye uno de los aspectos considerados como anclaje para poder superar la crisis que, como dije al principio de mi alocución, sufre el sistema. Asimismo, si no afrontamos la necesidad de reestructurar toda esta infraestructura, será difícil manejarnos hacia adelante porque el sistema de crear nuevos impuestos para cada una de las necesidades existentes nos llevará a un callejón sin salida.

En cuanto a este tema bien explicado por el señor subsecretario, sobre el cual hay algunas contradicciones, lo trataremos en el momento en que ello sea propuesto oficialmente por algún señor senador. Lo empezariamos a considerar si se tratara de algún mecanismo para la recaudación y para salvar la evasión al sistema de seguridad social. La esencia fundamental de este proyecto es crear los fondos complementarios o reales del propio sistema, que representan el 40 por ciento del total potencial que se va de él.

Si se hubiera incluido algún capítulo especial vinculado con la aplicación legal para poder solventar la evasión que existe, tendríamos que considerarlo ya, pero como se trata de un aspecto extemporáneo como es la recaudación impositiva, más allá de las urgencias que requiere el Tesoro, debería ser tratada la modificación de la ley 11.683, de procedimientos, cuando se considere definitivamente el paquete de reformulación impositiva cuyo proyecto girado por el Poder Ejecutivo tiene en estos momentos estado parlamentario en la Cámara de Diputados. Ese es el universo donde se debe tratar esta cuestión.

Con respecto a la iniciativa que nos ocupa, tendríamos que haber tratado la forma de evitar el escape de recaudación por algunas argucias muy parecidas a las que se indican en este proyecto pero relacionadas con el sistema de seguridad social.

Sr. Brasesco. — ¿Me permite hacer una consulta al señor subsecretario, señor presidente?

Sr. Presidente (Menem). — La Presidencia hace notar que nos encontramos en la discusión en general; no en el debate en particular. De

manera que si se efectúan interrupciones, se priva a los demás señores senadores de realizar sus exposiciones en general.

Por otra parte, no ha concluido aún el discurso del señor ministro. Por ello la Presidencia le cede la palabra al señor ministro para que termine su exposición. A su turno, cada señor senador podrá hacer uso de su derecho de réplica o de refutar lo que manifiesta el señor ministro.

Sr. Gass. — Pido disculpas, señor presidente, pero habíamos entendido que el señor ministro había terminado su exposición.

Sr. Presidente (Menem). — No es así, señor senador. El señor ministro me ha manifestado que todavía no ha concluido.

Sr. Brasesco. — Señor presidente: quiero formular una pregunta al señor subsecretario, como complemento de su exposición, para tener un concepto global. Como no conocemos las reformas concretas, deseo saber si el planteo del nuevo procedimiento se limita única y exclusivamente a la percepción del IVA o si está referido a muchos otros tipos de impuestos.

Sr. Subsecretario de Finanzas Públicas. — En el orden nacional, claramente está circunscripto a la recaudación del impuesto al valor agregado y a aquellos productos que abonan el impuesto interno, sobre los cuales también tendrá su efecto.

Esta acción va a replicarse, sin ninguna duda, con efectos beneficiosos en las recaudaciones provinciales porque aumentará la base blanca, la base formal del impuesto sobre los ingresos brutos y tendrá también un efecto en los municipios aumentando las bases en aquellos casos en los cuales el impuesto de seguridad e higiene tiene como hecho imponible las transferencias. Evidentemente, esto está dirigido a los impuestos que gravan las transacciones: los principales, que están dentro de los que he mencionado.

Sr. Gass. — ¿Me permite otra interrupción señor subsecretario? Tenemos que aprovechar, señor presidente, esta oportunidad de informarnos.

Quiero saber si esta norma debe considerarse como un ejemplo para los demás, porque he leído en algún periódico o escuchado en un medio oral que esta cláusula va a servir de ejemplo a los comerciantes que evaden los impuestos. ¿Ese es el sentido de esta norma, señor subsecretario?

Sr. Subsecretario de Finanzas Públicas. — Siempre tiene un efecto demostración combatir la evasión con medidas sistemáticas, no espectaculares, es decir, la acción diaria, consistente en

invitar al consumidor, es decir, a la sociedad, a que sea el juez, de manera que el inspector sea nada más que el instrumento labrador del acta. Entonces, con la individualización del consumidor y su firma se permite la clausura inmediata de ese comercio.

Cuando el contribuyente evasor es clausurado una vez y vuelve a sus andanzas porque está necesitando ese subsidio que él mismo se atribuyó sin ningún derecho que lo ampare y de espaldas a los requerimientos de la sociedad, volverá a ser sancionado. Es decir, si vuelve a incurrir en el hecho de entregar facturas "truchas", como se dice vulgarmente, o a no entregar facturas, será nuevamente sancionado y así llegará un momento en que esa acción sistemática permitirá doblegar el comportamiento altamente evasivo que acusa nuestra actividad empresarial, sobre todo a nivel de consumidor.

Además de esa circunstancia, también la pena aplicada servirá a manera de ejemplo, por aquello de "si las barbas de tu vecino ves cortar, pon las tuyas a remojar". Entonces, tal vez existirá una menor necesidad de aplicar clausuras y ojalá nosotros mismos podamos vislumbrar y ser testigos algún día de que la acción de clausura no da resultado porque ese día todos estaremos seguros de que los recursos no le son sustraídos a la sociedad y por lo tanto llegan al Tesoro, de modo que éste, con esfuerzo y buena administración, los revierta para satisfacer las necesidades del país.

Como ustedes pueden apreciar, a esto se tiende con la clausura, por su efecto demostración y por la mejora que sobrevendrá en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Sr. Gass. — Justamente, señor presidente, no estamos de acuerdo. No sirve esa medida.

Sr. Presidente (Menem). — Señor senador: creo que se está excediendo respecto al motivo por el cual se le ha concedido la palabra. En su momento, pídala nuevamente y va a poder replicar.

Esta no es una interpelación. El señor ministro y sus colaboradores hacen uso de la palabra como cualquier otro señor senador. Por eso ahora voy a pedir al señor ministro que concluya su exposición.

Sr. Romero Feris. — Quiero hacer una propuesta respecto de la metodología a seguir en este debate.

Sr. Presidente (Menem). — Precisamente, estoy tratando de encarrilar el debate.

Tiene la palabra el señor ministro de Economía.

Sr. Ministro de Economía. — Señor presidente: voy a ser muy breve.

Quiero llevar tranquilidad a los señores senadores respecto de la propuesta que hizo el bloque Justicialista de esta Cámara y que ya había formulado el mismo bloque de la Cámara de Diputados, con relación a un proyecto que oportunamente presentara el Poder Ejecutivo en materia de procedimientos tributarios, en el sentido de que la medida de clausura que se propone no es algo sin antecedentes en nuestro régimen legal. Tampoco se trata de una medida inconsulta o sin antecedentes en la legislación comparada.

En efecto, en nuestro propio régimen legal está vigente la denominada Ley de Abastecimiento. No tengo noticias de que últimamente algún legislador haya propuesto su derogación. Dicha ley contempla la posibilidad de clausurar negocios por parte de los inspectores que controlaran los precios, en el supuesto de que fueran fijados por el gobierno.

Adviertan ustedes que para un control que la realidad económica, tanto en la Argentina como en el resto del mundo, ha probado que se trata de algo antinatural y antieconómico — como es el control de los precios —, nuestra legislación prevé que un inspector puede clausurar un negocio en caso de que no se cumpla con lo dispuesto en tal materia.

Nosotros estamos proponiendo algo que es mucho más natural y que se refiere al control del cumplimiento del pago de los impuestos por quienes ejercen el comercio.

Por lo tanto, en un país que tiene una ley que prevé clausuras de negocios por incumplimiento de precios fijados por el gobierno, no vemos por qué debe llamar tanto la atención que se proponga la clausura inmediata por el inspector, con la firma del cliente como testigo, cuando un comerciante vende sin factura, violando leyes impositivas que en todos los países del mundo se controlan rigurosamente.

Por supuesto, en casi ninguna nación del mundo se controlan los precios, pero sí se ejerce contralor del pago de los impuestos.

Y ahora voy a la legislación comparada. Países que tuvieron gravísimos problemas de evasión los han logrado superar con este tipo de mecanismos. Puedo citar el caso concreto de Italia, país donde los inspectores disponen de la posibilidad de clausurar instantáneamente negocios cuando constaten que venden sin factura, aun sin mediar la firma del cliente. Nosotros agregamos el requisito de que el cliente firme como testigo del acto.

Sin ir más lejos, allende la cordillera, en Chile, también funciona un mecanismo similar.

Es decir, que no se está proponiendo nada esotérico. Se trata de algo que tiene antecedentes que lamentablemente apuntan en una mala dirección, porque no es natural ni conveniente ni eficiente controlar precios. Sin embargo, hay leyes en vigencia que para esos casos contemplan la clausura del negocio. ¿Cómo no vamos a contemplar la clausura del negocio en caso de incumplimiento de las leyes impositivas, si el control es función fundamental del gobierno, como sucede en casi todos los países del mundo?

Con respecto al efecto demostración, nosotros insistimos en que es muy importante que el contribuyente sienta que hay una tarea eficaz de control del cumplimiento de las obligaciones porque de esa forma el incentivo a evadir va a ser mucho menor.

Es con este espíritu que exhortamos a los señores senadores a que den al Poder Ejecutivo este instrumento, que va a ser muy eficaz. Creemos que ello corresponde a este paquete que se está considerando esta noche, que está orientado al beneficio de los jubilados por dos razones. En primer lugar, porque aquí se incluye una afectación del diez por ciento de la recaudación del IVA precisamente para dar financiamiento al Sistema de Seguridad Social, que en caso de que se pueda lograr un aumento de la recaudación será menos necesario en el futuro el incremento de las alícuotas y tal vez podría permitir incluso una disminución de las mismas, con significativos beneficios para toda la economía.

En segundo lugar, porque la DGI y el organismo de recaudación previsional están trabajando con información cruzada del impuesto al valor agregado y de las contribuciones al Sistema de Seguridad Social. En definitiva, los aportes de seguridad social tienen como base una proporción del valor agregado por los sueldos y salarios. Por lo tanto, cruzando la información de los aportes de seguridad social y del pago del impuesto al valor agregado va a ser factible aumentar también la recaudación del propio Sistema de Seguridad Social.

Por lo tanto, todo lo que hagamos a través de un correcto procedimiento tributario para luchar contra la evasión del impuesto al valor agregado automáticamente va a reeditar en términos de mayor recaudación del Sistema de Seguridad Social.

Muchas gracias, señor presidente y señores senadores. Les pedimos disculpas por el tiempo

que hemos tomado, y por supuesto, si ustedes desean que contestemos alguna otra pregunta, quedamos a disposición de esta Honorable Cámara.

Sr. León. — ¿Me permite una pregunta?

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Romero Feris. — Autorizo la interrupción.

Sr. León. — Dada la exposición del señor ministro, tengo la información de que existe sentencia de la Corte Suprema que condena a la firma Firestone al pago de aproximadamente 25 millones de dólares por evasión impositiva. Hace cincuenta y tres días que se dictó la sentencia. Esto podría constituir un ingreso para el Estado. Sin embargo, no se ha presentado ningún abogado de la DGI en cincuenta y tres días para ser notificado. Hay que cuidar a los de afuera y no castigar tanto a los de adentro...

Sr. Ministro de Economía. — Creo que se está iniciando la ejecución. El señor subsecretario Tacchi puede contestarle con mayor precisión.

Sr. Subsecretario de Finanzas Públicas. — Es una pena que no haya traído ese material; generalmente lo llevo conmigo.

La sentencia que abre la puerta a la ejecución fiscal es del 28 de junio pasado. Hay trámites procesales que cumplir; además coincidió con el período de feria judicial. Por eso anda preocupada Firestone solicitando audiencia porque tiene que pagar el primer juicio de apremio que llega a la etapa de ejecución con un monto aproximado de cuatro millones de dólares.

Sr. León. — Si vamos a cerrar un negocio criollo por evasión debemos actuar con mucha mayor energía con las grandes empresas que burlan una actitud importante para nuestro crecimiento y desarrollo.

Le agradezco mucho la información suministrada que tranquiliza mi preocupación.

Sr. Presidente (Menem). — Continúa en uso de la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Romero Feris. — A pesar de lo avanzado de la hora y de la importancia del tema que estamos tratando —fundamentalmente el aumento al sector pasivo, respecto del que adelanto mi voto afirmativo, discrepando con relación al régimen del FONAVI y de los combustibles— quiero decir con sinceridad que hemos escuchado con atención al señor ministro, que tan amablemente ha venido a expresar su opinión y dar las explicaciones del caso, así como también el señor subsecretario.

Estamos considerando este proyecto en general, que ya recibió sanción de la Cámara de

Diputados. Pero creo que nos detuvimos mucho tiempo en considerar el tema que hoy ha llegado como propuesta pero que no ha tomado estado parlamentario. Me refiero al último título de este proyecto al que se refirió fundamentalmente el señor subsecretario, y en alguna medida el señor ministro.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador Luis A. J. Brasesco.

Sr. Romero Feris. — Creo que es fundamental, importante y necesario que analicemos este tema, porque así lo merece, cuando consideremos el proyecto en participar y debatamos artículo por artículo, título por título, capítulo por capítulo. De lo contrario seguiremos prolongando el tratamiento en general, que es lo que en definitiva se hace en este momento, cuando existen muchos señores senadores anotados para hacer uso de la palabra.

Quiero señalar que fuimos convocados nuevamente con premura para abordar el tratamiento de un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento y que tiene una profunda incidencia en las cuestiones económicas, impositivas, fiscales, energéticas, habitacionales y previsionales. Es decir, que se trata de un nuevo paquete ómnibus que el cuerpo debe examinar, analizar, y también en este caso aprobar quizás en poco tiempo, con el riesgo de aparecer ante la sociedad como moroso en el cumplimiento de sus funciones.

Resulta llamativa, señor presidente, la frecuencia con que se ha acentuado la ofensiva que señala al Congreso como fuente de muchos o de todos los problemas políticos, económicos y sociales que vive el país. Es así que muchas figuras relevantes de la política y otros ámbitos han lanzado indiscriminadamente contra el Poder Legislativo recriminaciones que se están haciendo comunes en nuestro tiempo.

Como vengo sosteniendo continuamente, creo que es necesario destacar —la sociedad debe y sabrá comprenderlo— que la función del Poder Legislativo en un sistema republicano, cuya principal característica es la división e independencia de los poderes, es proveer al país de una legislación perdurable para la sociedad de hoy y para la de mañana, intentando que las normas que emanan del órgano "legiferante" cuenten con una seriedad, profundidad y consenso social tales que no deban ser modificadas ante la primera crisis o dejadas de lado en su cumplimiento por la comunidad por no estar acordes con la realidad histórica de la Nación.

Pretender que el Congreso o este cuerpo decidan en escaso tiempo la derogación o modificación de leyes de distinta naturaleza que poseen más de veinte años de vigencia en algunos casos no se adecua al criterio de responsabilidad que deben observar los representantes del pueblo en el cumplimiento de sus mandatos.

Solamente respetando ese criterio se logrará el consenso y el convencimiento políticos, al igual que el fortalecimiento de las instituciones, que permitirán el afianzamiento definitivo del sistema y el despegue largamente esperado de un país con crónicos problemas estructurales y económicos, pero no con menos crónicos problemas de tolerancia política. Es que de una vez por todas debemos comprender que los tiempos de los distintos poderes del gobierno son diferentes e independientes, más allá de la lógica y necesaria coordinación que el sistema mismo prevé a través del equilibrio y el control recíprocos.

Lejos está este alegato de pretender eximir al Congreso de sus importantes responsabilidades. Su intención se centra en señalarle a nuestra comunidad —última destinataria de la preocupación por el bien común— que el ejercicio constante que la Constitución impone al Poder Legislativo y el respeto de sus propios tiempos no atentan contra el sistema y la situación de emergencia sino todo lo contrario: preservan el sistema a través del necesario control que debe agudizarse en épocas en la que las facultades ordinarias del Ejecutivo se ven imperiosa pero peligrosamente incrementadas a causa de la crisis, con sustento en la teoría jurisprudencial y doctrinal de la emergencia.

Los títulos que integran el proyecto en debate han sido justificados principalmente por la necesidad de crear los recursos suficientes para el devastado régimen nacional de previsión social y derogar los regímenes de jubilaciones especiales como forma de disminuir las erogaciones extraordinarias, preservando la correcta distribución de dichos importes entre las denominadas "jubilaciones mínimas".

A tal fin, el proyecto incursiona en lo siguiente: aumento de los aportes de los afiliados y contribuciones de los empleadores, con facultades otorgadas al Poder Ejecutivo para incrementarlos o disminuirlos; afectación de alícuotas del IVA; creación del impuesto sobre combustibles líquidos y gas natural; modificaciones a la ley del Fondo Nacional de la Vivienda; derogación de regímenes de jubilaciones especiales; afectación de un impuesto sobre bienes no alcanzados por la ley de impuestos sobre los activos;

afectación del 30 por ciento de los recursos provenientes de las privatizaciones realizadas de acuerdo con la ley 23.696 de reforma del Estado.

Debo manifestar con el mayor respeto que existe un grado de ligereza en el proyecto remitido por el Poder Legislativo. La envergadura de las necesidades financieras del Estado nacional para dar solución a la gran cantidad de problemas que el país soporta, no puede compadecerse con que las mismas deban solucionarse en cada emergencia, modificando las leyes o transfiriendo recursos emergentes de fondos creados con fines específicos, convocando permanentemente a la Legislatura para sancionar proyectos de ley que redactados a veces sin tanta claridad requieren de salvedades y modificaciones para evitar que bajo el objetivo justo de paliar urgentes necesidades de sectores de la comunidad se perjudique a otros sectores no menos necesitados. Utilizando un arraigado dicho popular, por intentar vestir a un santo el proyecto desviste a otro.

A pesar de esto, señor presidente, bajo el beneficio de inventario que la premura del tiempo impuso en el análisis del proyecto, el bloque autonomista que represento, como ya lo he dicho anteriormente, ha decidido aprobar en general el proyecto del Ejecutivo con las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, es una prueba más de la posición críticamente constructiva que ha caracterizado a mi partido, sin dejar de señalar las salvedades que a mi criterio deben ser puntualizadas.

El concepto general de este proyecto, publicitado ante la opinión pública en el sentido de que procura recaudar fondos para aliviar la desesperante situación de los jubilados, es plenamente compartido por el bloque autonomista, teniendo en cuenta los magros e insuficientes recursos que ellos perciben.

¿Quién puede ignorar la desesperante situación que soportan los jubilados en su gran mayoría en estas difíciles horas por las cuales nuestro país transita? ¿Quién puede desoír los legítimos reclamos que estos jubilados plantean desde hace años ante gobiernos que no han canalizado con la sensibilidad que el tema merece estas peticiones? ¿Quién puede mantenerse al margen de la responsabilidad que implica debatir en este recinto temas que para miles de personas se resumen en una cuestión tanto sencilla como desesperante: llegar o no al 30 de cada mes?

Estas cuestiones elementalmente humanas hacen que todo proyecto destinado a favorecer al sector pasivo argentino cuente siempre con el

apoyo del bloque autonomista. Prueba de lo dicho resulta la variedad de proyectos presentados en estos tres años y medio que llevo en el Senado de la Nación, que desde diferentes ópticas procuran solucionar los problemas básicos del sector pasivo.

Esos proyectos, más allá de su perfeccionamiento técnico, se encuentran imbuidos de la filosofía que sustenta mi partido. En este sentido: la humanización creciente de las políticas que conducen los actos de gobierno, ya que el fin jamás justifica los medios y mucho menos cuando se encuentran comprometidas las necesidades básicas de algún sector de la sociedad.

Pero es necesario que el Estado nacional prevea sus recursos en forma ordenada, optimice el rédito de sus privatizaciones, tanto desde el punto de vista económico como procedimental, y acelere sus planes de crecimiento para que a través del incremento de la población económicamente activa se amplíe su base tributaria, y de esta forma acceda legítimamente a los recursos genuinos necesarios para cumplir sus compromisos con la población que soporta y comparte el ajuste.

Dentro de dicha línea de pensamiento, debo remarcar mi oposición al aumento de la alícuota del impuesto al valor agregado, llevándola del 16 al 18 por ciento, según se establece en el título II, artículo 5º del proyecto.

Si bien el destino de dicho aumento resulta el Régimen Nacional de Previsión Social, entiendo que el objetivo pretendido se tornará rápidamente abstracto por el carácter regresivo del impuesto en juego. Así, el traslado del aumento del impuesto será soportado a través del incremento de los precios de los productos por la sociedad toda, pero especialmente por los sectores de más bajos recursos, entre los que se encuentra —es obvio decirlo— la clase pasiva.

La provisión de los recursos para el Régimen Nacional de Seguridad Social se hubiera salvaguardado de mejor manera aumentando el porcentual de la recaudación del impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natural en reemplazo del ingreso proveniente de la sustitución de los recursos del FONAVI.

De esta manera se hubieran generado los recursos necesarios para el Régimen Nacional de Previsión Social sin afectar los fondos que se destinan a la construcción de viviendas económicas cuyo programa, de claro interés social, encuentra raigambre constitucional en el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna; de aprobarse el proyecto en tratamiento significará obligar a legislar en el futuro cercano sobre la solución del

grave problema habitacional que conmueve al país.

Existe en ambas Cámaras más de una docena de proyectos relacionados con la acuciante solución del problema de la vivienda para que, en un raptó de inspiración, se pretenda salvarlo con esta medida.

La importancia del déficit habitacional en nuestro país es de tal magnitud que ningún argentino puede permitirse la libertad de resignar recursos genuinos, creados y mantenidos por una ley que lleva casi veinte años, sin dar lugar a una discusión seria que transmita a la ciudadanía el pensamiento de los distintos partidos políticos y de los sectores interesados en la cuestión.

Si bien coincido en el aumento de los recursos a través de los mecanismos que meritúan los títulos I, II, V, VI y VII, creo que éstos se encuentran lamentablemente agregados a una sustitución de recursos que reemplaza —creando por ley el impuesto a los combustibles líquidos y gas natural— el aporte que hasta aquí ingresa como mayor recurso del Fondo Nacional de la Vivienda y torna compleja la falta de necesidad de modificar artículos de la ley de creación del FONAVI que siendo perfectible ha permitido disponer en todo el territorio nacional de los recursos para la construcción de viviendas económicas, obras de infraestructura y equipamientos comunitarios.

Debemos interpretar entonces, que el proyecto en tratamiento constituye un ejercicio aritmético de sumas de pequeños recursos obtenidos ora de uno, ora de otro, lo que en tal caso igualmente sería posible reconstruir sin necesidad de deteriorar el conjunto de leyes vigentes.

En la medida en que los recursos destinados al Fondo Nacional de la Vivienda se conserven o fueren mayores, serían superiores las fuentes de empleo para todos aquellos operarios idóneos o no calificados que componen el amplio espectro actual que ocupa el FONAVI.

La ley de creación del Fondo Nacional de la Vivienda constituye un cuerpo orgánico normativo que puede modificarse por medio del organismo de aplicación a través de resoluciones reglamentarias, lo que le permite mantener una determinada modernidad, más allá de la falta de continuidad que representa el cambio constitucional de autoridades y la renovación implícita en ello.

La modificación en el artículo 2º de la ley 21.581, innecesaria en función de lo dicho, es dable de ser aceptada, en la medida en que no se

transforme en un órgano masivamente burocrático.

Para finalizar el tema en análisis, en relación con el punto 6 del mismo artículo, considero conveniente elevar el monto mínimo a 90 millones de dólares por mes calendario, por considerar que el importe aprobado por la Cámara de Diputados es insuficiente, pues reducirá las posibilidades del fondo y no ha tenido en cuenta los promedios históricos de recaudación, de inversión, ni los convenios en curso con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y obviamente, el hecho de que los meses calendarios para el FONAVI deben considerarse trece, pues los aportes del sueldo anual complementario han permitido muchas veces nivelar las curvas de inversión y dimensionar las alternativas de soluciones del déficit global y por jurisdicción.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, senador Juan Ramón Aguirre Lanari.

Sra. Gurdulich de Correa. — Usted habla de los promedios históricos. ¿A qué se refiere? ¿Los tiene calculados?

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Ruego a la señora senadora que solicite permiso a la Presidencia para hacer uso de la palabra.

Sra. Gurdulich de Correa. — ¿Me permite una interrupción, para una aclaración?

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — La señora senadora le solicita una interrupción, señor senador por Corrientes. ¿Se la concede?

Sr. Romero Feris — Concedo la interrupción.

Sra. Gurdulich de Correa. — Deseo conocer su estimación sobre los promedios históricos de los últimos tiempos, señor senador.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Romero Feris. — Serían noventa millones mensuales para cubrir las necesidades mínimas.

Sra. Gurdulich de Correa. — ¿Para usted esos montos son los históricos?

Sr. Romero Feris. — Se trata de una ley perfecta que dio buenos resultados. Algunos de los que estamos aquí y otros que no han sido gobernadores hemos tenido la posibilidad de poder construir viviendas con un déficit en la materia de más de tres millones de viviendas.

Sra. Gurdulich de Correa. — Nuestros cálculos no arrojan esa cifra de noventa millones.

Sr. Romero Feris. — Este es un cálculo que he obtenido por mi parte, distinguida senadora, y no estamos obligados a coincidir.

Además, el ministro lo dijo ayer en la reunión de presidentes de bloque. Si usted estuvo presente —creo que lo estuvo en algún momento—, habrá escuchado lo que manifestó el ministro. Yo no invento ni apporto una cifra caprichosa en este momento.

Sra. Gurdulich de Correa. — El ministro no se refirió a noventa millones...

Sr. Romero Feris. — Dio esa cifra.

Sr. Brasesco. — Habló de sesenta millones...

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Ruego a los señores senadores que no dialoguen.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Romero Feris. — Con relación a las disposiciones del proyecto que destinan el 30 por ciento de los recursos brutos que se obtengan de las privatizaciones realizadas conforme a los mecanismos de la ley 23.696, previsto en el Título VII, comparto plenamente el objetivo y procedimiento, formulando votos para que las nuevas privatizaciones cuenten con la prolijidad y transparencia que en muchos casos hasta el día de la fecha no han tenido. De eso es testigo la señora senadora Gurdulich de Correa, quien es presidenta de la Comisión Bicameral, en la que hemos realizado estudios en ese sentido.

Otro de los temas candentes que encuentra tratamiento en el proyecto en debate y que en forma general irrita justificadamente el sentimiento de la comunidad, es el de las leyes jubilatorias especiales.

Desde hace mucho tiempo se hallan impuestos en el debate público los privilegios con que cuentan algunos sectores de la comunidad que acceden en condiciones poco usuales a montos jubilatorios exorbitantes en relación con la media que percibe la gran mayoría de la clase pasiva argentina.

Considero que el debate ha sido manipulado desde distintos sectores con intenciones políticas electoralistas por un lado y cargadas de ideologismos por el otro.

No creo sensato afirmar que toda jubilación especial implique privilegios, repugnantes al principio constitucional de igualdad que fija el artículo 16 de nuestra Carta Magna.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al interpretar el principio de igualdad, ha establecido en uno de los clásicos de la doctrina judicial que la igualdad es el derecho que tienen todos los habitantes a que no se establezcan excepciones o privilegios para unos con respecto a lo que se da a otros en iguales circunstancias.

En tal sentido, sostener que algunos sistemas jubilatorios provenientes de actividades típicamente riesgosas o insalubres y aquellas que no poseen esta nota distintiva deben ser iguales, no es tan acertado y está un poco alejado de la correcta interpretación del principio de igualdad ante la ley.

Es por esto que el alto tribunal ha decidido en innumerable cantidad de fallos que "la garantía constitucional de la igualdad no obsta para que el legislador contemple en forma distinta situaciones diferentes, con tal de que la discriminación no sea arbitraria ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o grupos, aunque su fundamento sea opinable".

Sin perjuicio de lo dicho, el bloque que represento apoyará la iniciativa venida de la Cámara de Diputados que deroga los regímenes de jubilaciones especiales, estableciendo la creación de una comisión bicameral que tendrá por objeto proponer el nuevo régimen de jubilaciones y pensiones, con la certeza de que la actuación de la misma resguardará correctamente las diferencias que provengan de las distintas actividades.

Otra de las consecuencias que plantea la derogación de los regímenes de jubilaciones especiales es el tema de los llamados "derechos adquiridos". El proyecto de ley venido en revisión sostiene que "quedan salvados todos los derechos adquiridos hasta el momento de derogación de las normas legales indicadas" —artículo 11, último párrafo, del proyecto de ley—.

Tengo la certeza de que debemos precisar qué se entiende por derechos adquiridos a los fines de esta norma, ya que tanto doctrinaria como jurisprudencialmente la cuestión no ha encontrado aceptación pacífica y unánime. De esta forma —es decir, precisando los términos del proyecto de ley— evitaremos o al menos disminuirémos futuros conflictos interpretativos que en su gran mayoría finalizan abarrotando la recargada justicia laboral.

El concepto de derechos adquiridos se encuentra íntimamente relacionado con el de la protección constitucional de la propiedad que consagra el artículo 17 de la Carta Magna. La jurisprudencia de la Corte Suprema definió desde antiguo el derecho adquirido como aquel que se ha incorporado definitivamente al patrimonio del titular, por oposición al llamado "derecho en expectativa", que aún no se ha consolidado. La ubicación del momento preciso en el que un derecho se ha incorporado al patrimonio del titular es de la mayor importancia porque de esto depende la posibilidad de aplicar retroactivamente las leyes o no. Me refiero, por supuesto, a las

leyes penales, ya que como es sabido el artículo 18 de la carta fundamental prohíbe específicamente la aplicación retroactiva de la ley penal.

Si bien la Corte Suprema ha sentado el criterio de que el derecho adquirido al amparo de la legislación anterior no puede ser alterado por una nueva ley, su jurisprudencia ha sido casuística en el tema, sin que podamos apreciar una línea definida que puede seguirse como parámetro de guía.

Así, en la materia que nos ocupa, la previsional, la Corte ha dicho que el derecho a la prestación se adquiere recién en la fecha del acto administrativo firme que acuerde el beneficio, y por ende, la ley aplicable es la vigente en ese momento.

Asimismo, la Corte ha venido restringiendo el concepto de derecho adquirido afirmando, incluso, que nadie puede invocar la existencia de un derecho adquirido para oponerse a un cambio en la política de gobierno. Tal lo decidido por el alto Tribunal en la causa "Coutinho, Felipe".

Por lo dicho, entiendo que corresponde a una correcta técnica legislativa precisar los conceptos jurídicos cuando éstos no encuentran interpretación pacífica dentro del marco social y del poder que por imperio del artículo 100 de la Constitución Nacional tiene a su cargo el conocimiento y la decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y las leyes de la Nación.

Asimismo, entiendo que el corte de los derechos adquiridos debe hacerse efectivo a partir de la promulgación de la presente ley y no a partir del 31 de diciembre de 1991. No resulta ético ni ejemplificador para el fortalecimiento de la vida democrática reconocer, como lo hace el proyecto, la existencia de privilegios o excepciones y otorgar un plazo que permite que nuevos aspirantes a privilegios ingresen a los sistemas que esta misma ley repudia.

De esta manera, propongo el reemplazo del último párrafo del artículo 11 del proyecto, por el siguiente texto: "Sin perjuicio de lo antes establecido, quedan salvados todos los derechos adquiridos hasta el momento de promulgación de la presente ley. A los efectos de esta ley se entiende por derechos adquiridos los beneficios jubilatorios que a la fecha de promulgación de la presente ley se encontraren concedidos por acto administrativo y/o sentencia judicial firme".

Por último, para cerrar la cuestión en análisis y evitar que la comisión creada por el artículo 12 no se expida dentro del plazo previsto, exhorto a mis pares a comprometer todo nuestro esfuerzo

y responsabilidad para cumplir puntualmente con el mandato que la norma que tratamos nos vendría a imponer. No hacerlo sería burlar el espíritu y la letra del proyecto.

Por todo lo expuesto, señor presidente, el bloque autonomista vota favorablemente en general el proyecto en tratamiento, con las salvedades que se dejan reservadas para el debate en particular de la iniciativa, y que fueron ya adelantadas en estas palabras.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Brasesco. — Señor presidente: indudablemente este debate es consecuencia de nuestras desorganización histórica de los últimos sesenta años en materia impositiva. En el lapso mencionado, por razones que todos conocen e invocando la emergencia y la excepción, la Nación comenzó a percibir impuestos que eran genuina y exclusivamente provinciales. Y a partir de allí, con distintos nombres, con distintas explicaciones y metodologías, también se empezó con las coparticipaciones o participaciones de hecho hasta llegar a las legislaciones finales de coparticipación, con las cuales todos estamos descontentos, desde el gobierno central hasta cada una de las provincias.

Esta circunstancia impositiva no va a terminar hasta que las fuerzas políticas, los gobiernos provinciales y el gobierno nacional lleguen a concretar la gran concertación fiscal de la República Argentina para volver al cumplimiento estricto de los postulados de la Constitución de 1853, circunstancia para la cual, sin dudas, se va a necesitar un período de transición de seis a diez años. Si no existe esa concertación fiscal, donde cada una de las provincias perciba lo que le corresponda sobre la base de sus propios impuestos — más de uno de ellos está siendo percibido ahora por la Nación —, no habrá solución estable. También habrá que prever el auxilio a las provincias que no puedan cumplir con las exigencias del artículo 5º de la Constitución; me refiero a garantizar la administración de justicia, el sistema municipal de gobierno y la educación primaria. Este sería el único caso en que estaría justificado el auxilio a las provincias.

Por estas razones entiendo que se necesita una concertación fiscal. De lo contrario, vamos a encontrarnos con esta misma realidad cada trimestre. Es decir, las Cámaras legislativas tendrán que dialogar con los ministros de Economía y con el Poder Ejecutivo de turno para llegar a redactar textos legales que intenten resolver problemas coyunturales.

No me voy a referir al aspecto fiscal de este proyecto de ley. Sí consideraré la cuestión previsional y, teniendo en cuenta lo anunciado por el señor ministro de Economía, también habré de expresar mis opiniones con respecto al procedimiento fiscal que habrá de aplicarse ante ciertas infracciones cometidas respecto del IVA y de impuestos internos, según lo manifestado por el subsecretario Tacchi.

El sistema previsional argentino está deteriorado desde hace mucho tiempo. Todos han dado sus razones y no sólo en esta Cámara. Incluso, se ha escrito mucho sobre esto y se han hecho estudios que hoy permiten conocer los motivos y las causas históricas de esta distorsión.

También es necesario decir que se han hecho estudios importantes en el marco del Programa Nacional de Asistencia Técnica para la Administración de los Servicios Sociales de la República Argentina, llevado a cabo por organismos de las Naciones Unidas que han analizado el sistema nacional de previsión social.

En este ámbito hay una realidad que tiene nombre: la evasión del aporte previsional. Este hecho prueba dos situaciones categóricas que se dan en esta materia en nuestro país. Por un lado, vemos la voluntad tramposa de sectores que tienen la obligación de depositar los fondos que retienen, obligación que no cumplen. Esos sectores han sido beneficiarios de medidas económicas, de protecciones de tipo industrial, de créditos bancarios, de políticas preferenciales de precios.

Por otra parte, en este ámbito hay otro cáncer: no tenemos policía fiscal ni previsional, ni laboral. No tenemos capacidad de control y por lo tanto no podemos ejercer ninguna acción eficaz en estos campos. En concreto, no tenemos cuerpos de inspectores bien dotados técnicamente y bien pagados económicamente. Y ha sido imposible, por falta de gente y de elementos materiales, que se pudiera cumplir en forma orgánica y planificada con las inspecciones previsionales, al igual que en el terreno laboral. Ha habido etapas históricas durante las cuales hemos superado estos inconvenientes, pero han sido islotes, lapsos pequeños de nuestra historia.

Así, entramos en la modalidad de la moratoria. Todos tuvimos la buena voluntad, a través de los distintos turnos de gobierno, de dar la oportunidad a los deudores previsionales de acogerse a moratorias. Muchas moratorias salieron por disposiciones legales y otras a través de resoluciones de los propios directorios de las cajas.

Incluso, señor presidente, hemos tenido moratorias previsionales durante este gobierno, en

el afán de invitar a los sectores morosos a encuadrarse dentro de los andariveles de la ley, pero no se han obtenido resultados auspiciosos.

Esto también se engancha con la ley de empleo y con los trabajadores en negro. Esto se engancha con la pretensión de sectores de empleadores de la República Argentina que quieren el blanqueo de trabajadores en negro con el reconocimiento de la antigüedad y el no pago de los aportes jubilatorios durante ese largo período de trabajo en negro.

Todo eso ha provocado un gran vaciamiento en las cajas, circunstancia que nosotros todavía estamos a tiempo de corregir. Pero junto con ese hecho, nos encontramos con otra realidad que es necesario estudiar.

Lamento que no se encuentre presente en este momento el señor ministro de Economía porque quiero hacer no una crítica pero sí una reflexión. El dijo hace pocos minutos que si bien había crecido la recaudación, el sistema no tenía capacidad económica ni financiera para pagar el aumento de trescientos mil australes a los jubilados a raíz del incremento del número de pasivos.

Esto que dijo el señor ministro es cierto, señor presidente. La cantidad de pasivos no solamente aumenta como consecuencia del mayor número de personas que se van acogiendo naturalmente a los beneficios jubilatorios, sino también como resultado de la reforma del Estado.

No nos olvidemos de que numerosos obreros y empleados de Ferrocarriles Argentinos que estarán en condiciones de jubilarse el 31 de diciembre de 1993, por decreto del Poder Ejecutivo se encuentran, desde enero de 1991, gozando de licencia paga para acogerse a esos beneficios.

Por otra parte, la disminución del personal de los bancos, de la Administración Pública Nacional, de la Dirección Nacional de Vialidad y de otros organismos del Estado aumentan, sin lugar a dudas, las grandes legiones de sectores pasivos que les van exigiendo mayores obligaciones de pago a las cajas de jubilaciones.

Por otra parte, señor presidente, hay un hecho claro y concreto manifestado por el Banco Mundial de Pagos —no lo digo yo—, que es la institución internacional más antigua que convoca a todos los presidentes de los bancos centrales europeos de Occidente y de Estados Unidos. Quienes dirigen dichos bancos centrales —son los banqueros que manejan el mundo— reunidos en Basilea, Suiza, realizaron un estudio de tipo económico-financiero del mundo y lle-

garon a la conclusión de que la recuperación económica de los países, inclusive los industrializados, no es clara, y que es necesario profundizar y seguir con la recesión; realizan una alta crítica de aquellos gobiernos que pretenden salir de la recesión a través de tasas de interés y creando determinadas medidas so pretexto del desarrollo.

Nosotros estamos insertos en el mundo, somos deudores, tenemos que ajustarnos a ciertos lineamientos fijados por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional, con quien discutimos determinadas pautas. Precisamente hace pocos días el presidente del Banco Central se manifestó satisfecho por algunas reuniones en las que se habrían aprobado —diría yo— los informes de nuestro Ministerio de Economía.

Lo que quiero decir, señor presidente, es que nosotros indudablemente al seguir la tónica de esas pautas internacionales no tenemos tiempo para vislumbrar un proceso de desarrollo, aun cuando estamos luchando por la estabilidad.

Existen algunos aspectos que resulta importante aclarar. Hablamos de la apertura económica; inclusive hace pocos minutos nos referimos, llenos de júbilo y con gran honradez —porque así es nuestra voluntad política— al Mercosur.

Con respecto a este asunto, el actual embajador argentino ante las Naciones Unidas en Ginebra, frente al 37º período de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo llevada a cabo entre el 11 y el 22 de marzo de este año, refiriéndose al comercio internacional manifestó que éste repercute en las entradas y en nuestra capacidad de dar trabajo y de crear recursos económico-financieros hacia las cajas de previsión social.

Asimismo expresó que “a fines de 1990 seguían aplicándose la casi totalidad de las restricciones cuantitativas y otras barreras arancelarias que ya existían en el momento de iniciarse la ronda de Uruguay; la proporción del comercio afectado por medidas no arancelarias aplicadas por los países desarrollados se ha mantenido invariablemente desde 1988 a 1990, las importaciones provenientes de los países en desarrollo siguen siendo relativamente más afectadas por la aplicación de medidas no arancelarias que las provenientes de los países desarrollados. Esto es particularmente más agudo en los sectores en que los primeros han adquirido una ventaja comparativa: materias primas agrícolas, textiles y vestidos, cueros y calzado, aceites vegetales. Algunos ejemplos adicionales ilustran la magnitud

que alcanzan la distorsiones estructurales y el proteccionismo en el sector de la agricultura”.

Digo esto, señor presidente, porque a lo mejor algún desprevenido o distraído puede considerar que estoy fuera de tema. Esto tiene implicancia directa y fundamental en la riqueza de nuestro país y en el movimiento económico-financiero. El monto anual de subsidios a la producción agrícola a los países de la comunidad europea es del orden de los 250 mil millones de dólares; casi el 50 por ciento de la renta de los productores provienen de estas transferencias. En 1970 la comunidad europea era importadora neta de 400 mil toneladas de carne. En 1985 ya era exportadora neta de 700 mil toneladas, y el volumen neto exportado en 1990 alcanzó una cifra del orden de las 900 mil toneladas. Observemos que estamos hablando de un mercado históricamente comprador de carnes de la República Argentina, al que están enganchadas nuestra exportación agrícola-ganadera y nuestra industria frigorífica. Sólo la práctica de los subsidios a la producción y luego a la comercialización posibilitó esta situación.

En 1970 la comunidad europea era importadora neta de 3.500.000 toneladas de trigo. En 1985 la comunidad exportó un neto de 11.200.000 toneladas, y en 1990 el volumen neto exportado fue de 19 millones de toneladas. Ese año Estados Unidos otorgó una subvención a las exportaciones de trigo de 55 dólares por toneladas; la subvención de la comunidad europea alcanza los 140 dólares por tonelada.

En 1970 la comunidad era exportadora neta de 1.500.000 toneladas de azúcar. En 1985 exportó un neto de 2.400.000 toneladas de azúcar. En 1990 el volumen neto exportado fue de 4.800.000 toneladas.

No estamos operando en un mercado con reglas equitativas universales. Es necesario conciliar la voluntad política con declaraciones.

He traído estos datos, señor presidente, por la sencilla razón de que tenemos que hablar del sistema previsional y esto nos está demostrando que tendremos cada vez menos aportantes dentro de este proceso que nadie quiere pero que todos tenemos que vivir y arreglar en conjunto. Vamos a tener menos aportantes porque no se va a dar la posibilidad de un pleno desarrollo, de crear masivamente nuevas fuentes de trabajo. Si la agricultura y la ganadería no incorporan un proceso de industrialización de las materias primas agropecuarias no van a poder desde ningún punto de vista crear nuevas fuentes de trabajo. De aquí que los sectores aportantes vayan a disminuir. Los sectores pa-

sivos van a aumentar y la financiación por vía fiscal va a estar cada vez más distorsionada y a ser cada vez más compleja.

De aquí que yo haya hablado de la necesidad de un acuerdo fiscal federal para volver a las pautas constitucionales, con una transición de seis a diez años. Es necesario inspeccionar y rescatar todo el dinero que se encuentra evadido de las cajas, que tiene nombre y apellido, y los establecimientos que se encuentran trabajando.

Es indudable que un aumento de 300.000 australes —cifra que tomada aisladamente es ridícula— produce un costo muy importante. Frente a la situación que acabo de explicar, frente a la emergencia, no hay otra solución que la misma que se tomó en meses anteriores con relación al impuesto a los combustibles. Es decir que el mismo jubilado debe colaborar a través del impuesto con su propia financiación para el aumento.

Junto a todo esto surge hoy —como bien claramente lo ha dicho el señor senador por San Luis— el mito de las llamadas jubilaciones de privilegio o jubilaciones especiales.

Nadie ignora que estos regímenes especiales que no están basados en razones de salubridad o de higiene —como puede ser el caso de la jubilación de los trabajadores de la industria frigorífica, de los camioneros o del personal aeronavegante— han traído quejas basadas fundamentalmente en las distorsión del sistema de regímenes especiales y también en defectos que esos textos legales contienen.

Es necesario que hablemos claramente al respecto para que el misterio no quede flotando en el ambiente.

No voy a decir lo que pienso sino que voy a leer muy pocos párrafos de las conclusiones a las que ha arribado el Programa Nacional de Asistencia Técnica para la Administración de los Servicios Sociales de la República Argentina, realizado por las Naciones Unidas.

“Otras causales estructurales”. Se refiere a la situación de las cajas de jubilaciones del sistema. Bajo este acápite se incluyen dos temas que si bien afectan al conjunto del SNPS, en particular las consecuencias básicas en última instancia recaen sobre los dependientes del área privada.

Los dos aspectos que se considerarán son los regímenes jubilatorios de privilegio y las pensiones graciables.

Existe dentro de la legislación que comprende el SNPS una serie de normas que permiten a personas que llegan a cumplir determinadas funciones dentro del quehacer gubernamental ob-

tener un trato privilegiado como beneficiario del SNPC.

Esas prerrogativas consisten en permitir a ciertos individuos acogerse al régimen jubilatorio a través de un trato preferencial que puede incidir, ya sea sobre la edad mínima que debe contarse para obtener los beneficios previsionales, el número de años de servicios computados a los efectos de la jubilación o en el cálculo del haber de la prestación. En definitiva, estos tratamientos preferenciales implican la posibilidad de que personas, que en principio ante el régimen jubilatorio se encontrarían en situaciones laborales similares, unas obtengan mayores beneficios que otras. A su vez gracias a ese trato diferencial se ve aumentado el número de beneficiarios del SNPS así como también los montos que éste debe abonar.

Cabe señalar que en general las sumas asignadas al pago de estos privilegios no se muestran como relativamente elevadas y menos aún por el número de personas que se encuentran bajo esta situación. Del examen realizado únicamente entre los beneficiarios de la Caja de Trabajadores del Estado, se llegó a establecer que sólo el 0,7 por ciento de los beneficios brindados a través de esa institución correspondía a casos de jubilaciones privilegiadas (4.699 beneficios), llegando a representar esos beneficios el 6,1 por ciento del total de pagos efectuados por la mencionada caja.

Dado que los montos de los beneficios del Sistema Nacional de Previsión Social que se canalizan a través del referido organismo representan entre el 25 y el 30 por ciento del total del régimen, se infiere que esa cifra se aproximaría al 2 por ciento de los pagos del Sistema Nacional de Previsión Social. A ella deberían adicionársele aquellos casos que se viabilizan a través de las otras cajas. De acuerdo con el parecer de funcionarios del Sistema Nacional de Previsión Social, sobre todo en la Caja de Trabajadores Autónomos, podrían estos privilegios observar cierta significación.

Además, debería agregarse a estos montos el tratamiento preferencial que tiene en general el personal de la administración pública nacional cuyo haber jubilatorio, de acuerdo con la ley 22.955 del año 1983, se establece en el 82 por ciento del sueldo que percibía como activo al momento de su retiro, apartándose así de la norma general cuyo cálculo se efectúa seleccionando los tres mejores años de ingresos dentro de los últimos diez años de aportes y con un porcentaje que varía del 70 al 82 por ciento según la edad de la persona al momento de jubilarse.

Dada la situación financiera mostrada por las tres cajas que componen el Sistema Nacional de Previsión Social, puede advertirse que estos tratamientos de excepción para ciertos funcionarios públicos en última instancia han debido ser financiados por los trabajadores dependientes del área privada.

El otro aspecto que se desea incluir en este párrafo está referido a las pensiones graciables. Estas se brindan a través del Poder Legislativo y tienen como finalidad resolver problemas particulares de personas, en su mayoría indigentes, que se encuentran impedidas de lograr los beneficios regulares del Sistema Nacional de Previsión Social.

Estas pensiones que se ofrecen en forma discrecional a través del apoyo de un legislador son financiadas por medio de los ingresos generales del Sistema Nacional de Previsión Social; en última instancia, los trabajadores en relación de dependencia del área privada son también quienes han financiado esos pagos.

Ese tipo de beneficio tiene sin lugar a dudas un fuerte sentido distributivo, pues en general va dirigido a personas de muy escasos recursos; pero si a su vez la fuente de ingresos proviene del propio sector de los trabajadores, al efecto neto de la redistribución deseada posiblemente se vea reducido.

En definitiva, si estimamos que las pensiones graciables significaron en los últimos períodos el 1,3 por ciento del total de beneficios abonados por el Sistema Nacional de Previsión Social y como mínimo puede pensarse que los tratamientos de privilegios alcanzan al 3 por ciento de esa suma, ello nos indicará que entre ambos conceptos se aproximaría al 5 por ciento del total del pago del Sistema Nacional de Previsión Social, representando a su vez ese monto para el caso particular de los trabajadores dependientes, aproximadamente el 9 por ciento, cifra no desestimable para esta caja que se mantiene cercana al equilibrio".

He leído esto, señor presidente, porque tenemos que sincerarnos, dejar de hablar del fantasma; ésta es una cosa que hay que corregir. Cuando hablamos del retiro militar también lo tenemos que corregir, porque no nos referimos a que por la carrera militar una persona tenga que retirarse a los cuarenta o treinta y cinco años o porque de acuerdo con los ascensos y con las reglas de cantidad determinada de personas que debe haber en cada grado tenga que pasar a ese retiro; pero sí es necesario tener en cuenta cuánto le insume el sistema de las Fuerzas Ar-

madas al presupuesto de la Nación, que se paga con Rentas Generales.

También es necesario reflexionar en cuanto a que el privilegio que pueden tener las Fuerzas Armadas no es el retiro, sino que a cualquiera de sus integrantes que se encuentre sancionado por los tribunales castrenses o por los tribunales ordinarios de la Justicia por haber cometido un delito encuadrado dentro del Código Penal y sancionado incluso con su degradación, se lo considera muerto y su esposa cobra la pensión. Entonces, ése es el privilegio. Es que aquella persona sancionada por el Código Penal y por los tribunales castrenses o tribunales de justicia — repito —, por haber cometido un delito común, es considerada muerta y su esposa goza de los beneficios de la pensión.

Cuando hablamos de la Secretaría del Servicio de Informaciones nos referimos a un problema que hace muchos años planteó la Caja de Jubilaciones del Personal de la Policía Federal, porque el agente civil del Servicio de Informaciones, con un día de prestación del servicio, se engancha al sistema previsional de la Policía Federal con lo que le ocasiona un gran deterioro. Y también vamos a hablar de las jubilaciones o pensiones de los presidentes, vicepresidentes y ministros; de las de algunos sectores como, por ejemplo, según se dijo recién, el de los guardabosques o el de los maestros, a quienes hace pocos días les consagramos el 82 por ciento.

Pero lo haremos en relación con el sistema previsional total, considerando que estamos frente a todos estos acontecimientos de que hablamos, frente a un proceso económico complicado basado en la recesión, en que el Banco Mundial dice que se debe profundizar la recesión, que todavía no tenemos que adoptar medidas de desarrollo porque producirían ciertos desequilibrios, que debemos ajustarnos a pautas internacionales; en que tenemos una reforma del Estado que provoca la inserción de una extraordinaria cantidad de agentes en la clase pasiva; en que esa recesión determina que es muy difícil que se creen nuevos puestos de trabajo; en que nos encontramos con un sector de trabajadores en negro que se quiere blanquear según las pretensiones de sectores empresarios, lo que ocasionaría la aparición de trabajadores en negro que nunca trabajaron y a quienes les faltan pocos años para jubilarse, bastando con la simple manifestación del empleador, a quien no le cuesta nada porque no paga los años que debe, ya que con el posible titular del beneficio se presentaría a la Caja, obteniéndose así un nuevo beneficio. Y todo esto complicaría el panorama.

Si bien esta situación no provocaría ningún problema en el orden cuantitativo, sí los presentaría en una dosis pequeña pero importante, apareciendo la subvención a través de los mecanismos del sistema considerando a los sectores de aportes privados. Por eso hablamos también de las jubilaciones de los prelados de la Iglesia.

Acá no queremos tiros ni troyanos. Aquí venimos a arreglar todo. Y los senadores estamos cómodos en esa situación porque el 31 de diciembre de 1991 ningún senador cesa en su mandato.

Aquí nadie incurre en especulaciones espurias.

Ahora bien, esa comisión que se ha creado, o se va a crear si se sanciona el proyecto, tendrá que trabajar con los grupos técnicos más importantes que pueda tener el Servicio de Seguridad Social de la Nación y con los hombres del sector privado que más conozcan este problema.

Ocurre que tenemos que trabajar contra reloj antes del 30 de septiembre próximo, fecha en que concluye el período ordinario de sesiones. Estamos con el anuncio de un veto, y lo digo con el mayor de los respetos porque se trata del ejercicio de un derecho constitucional. La noche anterior el presidente de la Nación ha manifestado que va a ejercer el derecho de veto que le confiere la Constitución Nacional frente a la sanción del proyecto en consideración.

La sanción remitida por la Cámara de Diputados consagra la nulidad y la no efectividad o eficacia jurídica del decreto de derogación de algunas jubilaciones especiales que todos conocemos.

Yo tengo confianza en que el señor presidente no va a vetar la ley porque indudablemente, dentro del mecanismo de formación y sanción de las leyes, al Poder Ejecutivo —que es unipersonal— la Constitución le otorga el mismo derecho que da a cada una de las Cámaras para revisar la norma, aprobarla o desecharla; porque la Constitución establece que el presidente podrá observar total o parcialmente un texto legal aprobado por el Congreso. De ahí provienen justamente los vetos parciales o totales.

Pero de basarme en la hipótesis de que el presidente vetará la ley, la conclusión es que ello traería como consecuencia la circunstancia de que nos faltaría tiempo si nosotros no aprobamos y formalizamos todo el procedimiento antes del 30 de septiembre. Digo esto porque si el presidente veta la ley, no va a abrir la instancia extraordinaria, para dejar que las Cámaras puedan ejercitar la aceptación o rechazo del veto recién en el período ordinario del 92.

Esto determina que nosotros debamos asumir responsabilidad de trabajar conscientemente en lo que respecta a todos estos regímenes especiales, de no crear injusticias, de no establecer privilegios, en fin, de trabajar con la mayor exactitud posible, con el máximo concurso de recursos humanos y con el más alto consenso entre todos los hombres que nos hallamos aquí y en la Cámara de Diputados, porque nuestra intención —al menos la de todos los que estamos acá— es sanear el sistema y ubicar las cosas en su debido lugar. Por ello me he tomado el trabajo de leer una pequeña parte del documento elaborado por las Naciones Unidas sobre nuestro sistema previsional: quería develar el misterio de las jubilaciones de privilegio para que no se crea que es materia de fantasmas y para concretar todas las correcciones que sean necesarias.

De manera alguna esto significa jugar a la demagogia ni mantener un *match* de discusiones con el Poder Ejecutivo. Esto implica plantear el perfeccionamiento de una intención que tuvo el presidente de la República; el perfeccionamiento de un enfoque global de todo el problema.

El señor presidente de la República debe pensar que nosotros, en éste momento, lo estamos ayudando; que no estamos manteniendo con él una competencia para ver quién es más tozudo, quién tiene los dos tercios o quién no.

Hace mucho tiempo que hablamos de este tema y los acontecimientos han querido que hoy discutamos el proyecto de ley en consideración. Por eso confío en que cuando tenga que realizar el estudio de lo sancionado por el Congreso, más allá de las coincidencias que tengamos los señores senadores respecto de las distintas reformas que se pueden plantear o no, el presidente llegue a la conclusión de que el Congreso de la Nación le remite para su promulgación un texto legal que es el principio del buen camino para resolver los problemas previsionales del país.

Señor presidente: escuché al señor subsecretario Tacchi exponer su hipótesis de tipo procesal para que se inserte la modificación pertinente en el texto legal aprobado por la Cámara de Diputados, en virtud de la cual se consagra el procedimiento de la clausura inmediata a la constatación de una infracción.

El señor subsecretario expuso un perfecto diagnóstico sobre la evasión del impuesto, y lo comprendo porque tiene la misma formación profesional y sectorial que hemos tenido algunos de nosotros, inclusive quien habla, cuando se desempeñó como funcionario que tuvo que

hacer cumplir una ley, en mi caso, una ley laboral. Indudablemente, frente a los hechos claros y concretos de evasión o incumplimiento, existía la tendencia de llegar a tomar las drásticas medidas de clausura.

Pero acá hay un detalle, señor presidente. Ese Código Penal Tributario que muchos sectores de la opinión pública criticaron acerbamente por ser un código fuerte y rígido, salió consensuado por todas las bancadas —más allá de las discrepancias que, en particular, pudo haber habido sobre algún artículo— y por los ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo.

Lo que no tenemos hasta este momento es un informe exhaustivo, claro y concreto por parte de la Dirección General Impositiva acerca de cómo ha hecho funcionar ese Código Penal Tributario. A mí me llamó mucho la atención cuando se dijo que de cien actas la DGI, automáticamente, descarta cincuenta. Yo presumo que esas cincuenta actas serán descartadas porque contienen errores formales que traerían como consecuencia la realización de un trámite costoso que repercutiría económicamente, inclusive, en contra de la DGI y que no serviría para su objetivo. Porque si se seleccionan cincuenta actas que no se tendrán en cuenta y otras cincuenta que sí prosperarán, se estaría ante una práctica mala como la que se da en algunos juzgados donde se seleccionan ciertos expedientes y se los coloca en un estante para que prescriban.

Sin embargo, en este caso tenemos una garantía constitucional que es la del debido proceso nos guste o no y nos cueste o no que está basada en lo que los penalistas denominaron el derecho penal liberal que se asienta en la doctrina del tipo penal y que es totalmente distinto del derecho penal totalitario.

Ese debido proceso, señor presidente, no se cumple cuando un inspector —por lo menos eso es lo que nos han comunicado, ya que no hemos leído el texto aún—, toma la denuncia de un consumidor o de alguien que ha recibido la prestación de un servicio —porque el IVA no lo pagan solamente quienes están en el área del comercio sino también los que prestan servicios—, que le dice que no le han dado la boleta pertinente, y firma el acta, procediéndose a la clausura. Por supuesto, todo aquel al que se le haya clausurado un comercio va a efectuar un recurso judicial, pero éste no suspende la clausura, teniendo que esperar el resultado de la decisión judicial. Aquí, señor presidente, no estamos discutiendo la sanción.

Nosotros hemos votado sanciones hasta de prisión en el Código Penal Tributario; también

hemos votado la clausura y la multa. Pero aquí no estamos hablando de sanciones, no estamos propugnando que no se clausure a nadie: estamos hablando de los procedimientos. Y este procedimiento no se condice con la Constitución Nacional. Este procedimiento, inclusive, abre la puerta a la arbitrariedad. La ley debe crear todos los elementos necesarios para que el arbitrario deje de serlo. La ley debe provocar conductas para que al tramposo se lo obligue a ser honesto. En cambio, en lo que aquí se propone se deja abierta la puerta a la arbitrariedad. Es decir, esa medida de clausura quedará librada a la buena o mala conducta del funcionario de turno.

Con lo que digo no pretendo descalificar a los inspectores; descalifico la norma porque da la oportunidad de que se comentan hechos ilícitos.

No descalifico al abogado cuando en la legislación vinculada con el Código de Procedimientos en materia laboral exijo que al ganar un juicio por despido el cheque con la indemnización se haga a nombre del trabajador y no a nombre de su apoderado. Con este artículo que como legislador introduzco en la norma no pretendo descalificar al abogado; simplemente, estoy creando la metodología para evitar que se le haga fraude al trabajador.

Con la medida que se propone ahora en materia impositiva, se está dejando abierta la puerta a la arbitrariedad.

Señor presidente: aquí también se ha hablado de la ley de abastecimiento. Es cierto que esta norma existe, aunque jurídicamente decimos que se trata de una ley positiva no aplicable, en desuso. ¿Por qué no se aplica? ¿Por qué no la hemos utilizado desde 1983 en adelante? Esto nos comprende a todos. No se ha aplicado porque la Corte Suprema se cansó de declarar la inconstitucionalidad de las clausuras automáticas de negocios, tanto sea por violación de precios como por agio y especulación.

Nosotros tenemos bien presente esta cuestión porque fuimos los que hicimos esa ley en el gobierno de Illia. Hubo un director nacional de Abastecimiento en ese gobierno, el señor Cabiche —ejemplar funcionario—, que sí la aplicó y todos recordamos los resultados jurisprudenciales totalmente negativos que se sucedieron respecto del objetivo que oportunamente se perseguía con ese tipo de medida.

Acá se ha hablado de un trámite muy largo; incluso se mencionó la posibilidad de diagramar las vacaciones. Debemos reconocer que hay juicios que son lentos porque no se trabaja con pasión en el expediente. Como son tantos, de dos-

cientas demandas sólo se cobran tres por mes y con eso se vive bien.

Se dijo que el trámite puede llevar hasta ciento veinte días. Entonces, el que va a ser clausurado prepara todo para que sus empleados salgan de vacaciones. Eso puede coincidir con el período en que los trabajadores están en condiciones de tomarse las vacaciones. Pero lo que no se dice es que esa sanción termina con la clausura, en virtud de la cual se coloca una faja en la puerta del negocio donde se dice por qué se clausuró. De ese modo, el comerciante evasor recibe la sanción.

Ahora bien, ¿qué significa la clausura, más allá del lucro cesante y de que el dueño deba pagar los salarios a los trabajadores, en caso de tener empleados? Se trata de una sanción de tipo moral y que sirve para el escarnio del comerciante frente a la sociedad y frente a sus antecedentes comerciales.

El subsecretario dijo aquí cosas ciertas; dijo verdades. Señaló, por ejemplo, cómo se evade el IVA.

¿Por qué no hacemos que en ese procedimiento se labre el acta y dentro de las 48 horas, en un juicio oral y actuado en el que sean ejercidos todos los derechos de defensa, una autoridad judicial pueda determinar si se clausura o no? Hasta podemos hacer que un tribunal fiscal resuelva recursos de inaplicabilidad de la ley para el caso de que se viole algún procedimiento.

Pareciera que todo este procedimiento es para la Capital Federal; pues recuerdo que el IVA se paga en todo el país. Entonces yo quiero saber qué va a pasar con la evasión del IVA en los lugares donde no hay materialmente ningún inspector de la Dirección General Impositiva.

Hay gente que está convencida de que esto es viable jurídicamente y de que con ciertas y determinadas medidas espectaculares que entren por los ojos, como las clausuras, se puede provocar una especie de temor reverencial a la ley que obligue a su cumplimiento. Sin embargo, nosotros no conseguimos con la ley de abastecimiento ni el escarmiento ni el miedo de los evasores que no cumplían con los precios oficiales. Tampoco logramos el temor de los agiotistas ni de los acaparadores.

Este remedio que se inserta en este proyecto ya fue discutido con representantes del Senado y de la Cámara de Diputados, cuando se buscaban las conciliaciones en la ley penal tributaria, por distintos funcionarios del Poder Ejecutivo como el ministro Mera Figueroa, el entonces secre-

tario legal y técnico Granillo Ocampo, el entonces ministro de Economía González y algunos asesores de carrera —que estaban ayer y continuaban estando hoy—, descartándose la idea.

Señor presidente: esta solución va a traer más dolores de cabeza que beneficios, porque incluso se otorga un tratamiento desparejo a los evasores, no cumpliéndose con el principio de igualdad ante la ley.

Se ha dicho que esto incursiona en el IVA y en los impuestos internos. Pero si hay una empresa que durante 1990 ha evadido los aportes previsionales y de obras sociales —existen muchas de estas empresas en la República Argentina— y se labra un acta por evasión, el inspector no la puede clausurar, no puede poner la faja con engrudo en la puerta de entrada para que luego vaya el juez a determinar las responsabilidades.

El dueño de esa empresa que retiene parte del salario de sus obreros pero no envía los fondos al sistema previsional, está tranquilo porque el sistema le permite discutir durante meses.

Entonces, tenemos que enfocar este problema a la luz del Código Penal Tributario. Y si nosotros queremos un procedimiento más rápido que el que éste establece y consideramos que en el período de vigencia de este régimen se nos presentan una serie de inconvenientes porque no modificamos los términos, porque no omitimos ciertos y determinados pasos, porque no establecemos las audiencias verbales y actuadas, porque no disponemos que la justicia debe resolver problemas en términos perentorios, mi pregunta es: ¿por qué no estudiamos el tema en este contexto en lugar de colocar este injerto aquí?

¿Acaso hace tiempo, cuando se violaba una ley de policía del trabajo, diligenciábamos una constatación y procedíamos inmediatamente a la clausura del establecimiento? Pero este texto legal tiene que modificarse porque todas las clausuras que se hicieron por esa vía fueron revocadas.

Señor presidente: compartimos totalmente el diagnóstico que el señor subsecretario de Estado dio esta noche relativo a los panoramas trágicos que a diario nos ofrecen los espurios traficantes que estafan a la Nación y a la sociedad no pagando sus impuestos.

Pero la metodología que este apasionado hombre de gobierno pretende, que implica que luego de una discusión nos convenzamos y la insertemos como texto legal, no servirá porque viola la Constitución y al mismo tiempo abre la

puerta para la arbitrariedad y la injusticia. Y no vivimos tiempos muy favorables para creer que todo aquello que puede ser ilegítimo y las conductas reprochables en el terreno moral no pueden ocurrir cuando se da la liberalidad de decisiones tan importantes.

Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la clausura, las multas y todas las penas previstas por el Código Penal Tributario. Pero no compartimos este procedimiento porque no será eficaz y es inconstitucional.

Por otra parte, señor presidente, deseo hacer una aclaración. Es necesario que tengamos presente cuando hablamos de legislación comparada que no se trata solamente de una disposición legal sino del derecho positivo en su totalidad. Así, el derecho positivo de la República de Italia no coincide con el derecho positivo argentino. Y la clausura inmediata realizada por el inspector, de acuerdo con el derecho italiano, prevé determinados trámites posteriores y resoluciones inmediatas que no se corresponden con la metodología que aquí se plantea.

Tampoco podemos comparar este problema con el cepo, aplicado en materia de tránsito en Capital Federal. Podría compararse, señor presidente, con las disposiciones aun vigentes de la ley orgánica de la Policía Federal, por la que se puede privar de su libertad a una persona determinadas horas sin ningún tipo de recurso, con otros cuerpos legales que tienen otras direcciones, y sabemos que esto es un resabio de arbitrariedad.

Por eso, señor presidente, para concretar, en lo que se refiere a las pautas aprobadas por la Cámara de Diputados de la Nación —derogación de las jubilaciones especiales, constitución de una comisión especial para su modificación y el perfeccionamiento total del sistema jubilatorio argentino—, la Unión Cívica Radical está totalmente de acuerdo, va a poner el hombro y va a trabajar afanosamente desde el momento en que se sancione este proyecto de ley, colaborando con quienes sean designados como representantes de nuestro bloque en esa comisión para darle al país la ley que merece.

Pero el bloque de la Unión Cívica Radical también quiere expresar que se opondrá, si es que se plantea parlamentariamente lo anunciado por el señor ministro de Economía, a la metodología procesal consistente en la clausura inmediata por acta de inspector, por considerarla inconstitucional. Consideramos, sí, necesario un exhaustivo informe previo de la justicia y de la Dirección General Impositiva, para lo cual habrá que analizar qué modificaciones conviene intro-

ducirle al Código Penal Tributario para que sea más ágil, dinámico y efectivo.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: los oradores que aún tenemos que intervenir en este extenso debate asumimos el compromiso de ser lo más expeditivos que sea posible debido a lo avanzado de la hora y a la agotadora jornada que venimos protagonizando.

Yo creo que la opinión pública está convencida de que hoy el Congreso —en este caso, el Senado de la Nación— está tratando el aumento de trescientos mil australes a los jubilados. Obviamente, esto constituye un error, que se originó en una afirmación poco feliz del ministro de Economía cuando dijo que no daba el aumento porque el Parlamento le tenía frenado el proyecto por el cual se generaban los recursos para que el Poder Ejecutivo pudiera cumplir con ese objetivo. Frente a esa expectativa del sector pasivo, y en general de la opinión pública, estamos, como a menudo ocurre, sesionando presionados por la hora y por la ansiedad pública.

Quizá pocos sepan que estamos trabajando sobre la base de un proyecto que ha sufrido importantes modificaciones hasta las 20 de ayer. Todavía nos están repartiendo el texto de muchos artículos que han sido cambiados en las últimas horas o en los últimos minutos.

Sr. Rodríguez Saá. — Es una gentileza, señor senador.

Sr. Genoud. — Vamos a darle sanción a un proyecto que no será una ley omnibus sino un verdadero ferrocarril, por la cantidad de innovaciones que introduce en cuestiones tributarias o de política fiscal, que es alterada sustancialmente. Se aumenta el IVA, se desplazan los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda al sistema nacional de previsión social; se destina el 40 por ciento del impuesto a los combustibles al FONAVI, se transforma sustancialmente el impuesto a los combustibles, se derogan las jubilaciones de privilegio, se restablece el impuesto a los activos. Además, el ministro de Economía ha traído nuevamente una iniciativa contenida en el proyecto originario del Poder Ejecutivo por la cual se modifican normas de procedimiento en materia fiscal para la recaudación del impuesto al valor agregado.

No voy a exponer sobre todos y cada uno de los capítulos y títulos del proyecto, porque me remito a lo expresado por el miembro informante de la bancada de la Unión Cívica Radical, señor senador Trilla.

Estoy hablando con un extraordinario coro de fondo, señor presidente.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Se ruega a los señores senadores que respeten al orador en el uso de la palabra.

Sr. Britos. — Así se hará.

Sr. Genoud. — Decía que no voy a hacer referencia a todos los títulos y capítulos del proyecto porque me remito a lo expresado por el miembro informante de mi bancada y a lo manifestado por el señor senador por Entre Ríos. Solamente voy a hacer especial hincapié en el Título III, con relación al impuesto a los combustibles, y lo haré muy brevemente.

Por último, me referiré a la iniciativa comentada por el ministro de Economía cuando se refirió al tema de las normas de procedimiento para la recaudación del IVA.

En cuanto al impuesto a los combustibles, recuerdo que es el segundo impuesto con relación al caudal recaudatorio, después del IVA. Se trata de un gravamen por el que el año pasado se recaudaron alrededor de 3.500 millones de dólares, y después de la desregulación petrolera —y esto lo admitió el ministro de Economía— cayó a 2.500 millones de dólares, aproximadamente.

Estamos legislando con referencia a uno de los impuestos más importantes de nuestro sistema tributario. No sólo se modifica totalmente el hecho imponible sino además todo el sistema de distribución del impuesto referido.

Por otra parte, contiene algunas cláusulas muy delicadas que abordaré rápidamente. Una de ellas es la limitación a la capacidad de establecer su propia política tributaria por parte de las provincias argentinas. Concretamente, para las provincias productoras de petróleo que aplican el impuesto a los ingresos brutos a la actividad petrolera, ya sea en su fase extractiva, de industrialización o de comercialización, vamos a proponer un par de modificaciones al título respectivo. Principalmente vamos a plantear en el artículo 19 un esquema distinto de la distribución del impuesto referido.

El impuesto a los combustibles modifica la ley convenio 17.597 y altera el decreto 2.733/90. Las provincias nunca aceptaron aquel criterio de distribución del impuesto a los combustibles y fue motivo de largos pleitos entre las provincias y la Nación.

El proyecto que estamos considerando establece una distribución del orden del 40 por ciento para el FONAVI —que sabemos queda vaciado de sus recursos porque se desplazan

hacia el sistema nacional de previsión —, del 13 por ciento para las provincias, y del 47 por ciento para el Tesoro nacional.

Además se establece en otro artículo que el 13 por ciento que les corresponde a las provincias tiene el siguiente sistema de distribución: un 60 por ciento para Vialidad, un 30 por ciento en función del sistema de coparticipación y un 10 por ciento para el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior, el célebre FEDEI.

Hemos hablado de la política petrolera desde que se instaló este gobierno, en varias oportunidades. En su momento interpelemos al entonces ministro Dromi, concretamente con motivo de la licitación de las áreas primarias y secundarias. También lo hicimos con el ministro Cavallo, quien gentilmente se prestó a una interpelación durante tres sesiones con respecto al tema petrolero. Lamentablemente, no hemos podido modificar un milímetro la política adoptada por el gobierno en el sentido de vender prácticamente todas las áreas petroleras. No solamente lo intentamos en el ámbito parlamentario sino que en lo personal quien habla junto a otros legisladores planteamos un recurso de amparo ante la justicia federal; en otras provincias, otros legisladores han hecho otro tanto. Incluso, muchas legislaturas de provincias productoras se han opuesto en distintos términos al avance inexorable del gobierno en torno a este delicado tema.

No voy a efectuar una larga exposición sobre el asunto porque ya lo he hecho en otras oportunidades y ayer tuve ocasión de reseñarle muy brevemente al ministro, en la reunión de presidentes de bloque, una preocupación que él por supuesto conoce, porque la destaca en su libro llamado *El Desafío Federal*, donde incluso adhiere a la postura que ratificamos ayer.

Sabemos de las necesidades fiscales del gobierno; somos conscientes de que la única condición para que sobreviva el plan de convertibilidad es que existan recursos y no se quiebre la paridad entre el dólar y los diez mil australes. Eso obliga a cuidar el equilibrio de las cuentas del Tesoro. Ayer el ministro reconoció que lo que había realizado el gobierno desde un comienzo era echar mano a aquello de lo que podía disponer con mayor facilidad. Eran las áreas petroleras. Así se dispuso la venta de nuestras reservas petroleras a través de las respectivas licitaciones.

Voy a hacer una breve reseña de cómo fueron vendiéndose las áreas petroleras. En julio de 1990 se licitaron 38 áreas, de las que se adjudicaron 31; el Tesoro nacional recibió "cash" —al

contado— 250 millones de dólares. Veinte días después se adjudican diez áreas secundarias más que geográficamente se ubican en distintos sitios del norte al sur del país, es decir, incluye todas las cuencas petrolíferas argentinas. Luego vinieron las muy controvertidas áreas primarias Huemul, Vizcacheras, Tordillo y Puesto Hernández, que le redujeron a YPF el 50 por ciento del derecho de explotación de las mismas. La adjudicada pagaba un canon inicial para comenzar la explotación del área.

Así ingresaron al Tesoro nacional 568 millones de dólares. Luego se llamó a licitación para veintiocho áreas petroleras más; ya se encuentran abiertos los sobres y las ofertas formalizadas, lo que daría un total de 172 millones de dólares más.

Ayer, miércoles, el presidente de YPF, José Estenssoro, anunció algo que luego ratificó el ministro de Economía, y es que aquellas áreas primarias que se habían vendido en el orden del 50 por ciento y por las cuales se habían recibido esos casi 600 millones de dólares, serán ofrecidas a los actuales adjudicatarios en un 30 por ciento más.

Asimismo, el viernes de la semana pasada anunció la licitación de áreas primarias y secundarias de la cuenca fueguina y patagónica; el gobierno es optimista, ya que piensa obtener 800 millones de dólares más.

Los señores senadores se preguntarán: ¿Qué tiene que ver esto con el impuesto a los combustibles? Pese a todos los reclamos de las provincias productoras de petróleo no ha sido posible obtener del Estado nacional ningún reconocimiento respecto a esas suculentas cifras que el Tesoro ha ingresado. O sea que las provincias siguen cobrando el 12 por ciento de las regalías petrolíferas con un sistema de liquidación que no compartimos, que ha dado origen a numerosos pleitos y ha generado grandes créditos a favor de las provincias productoras de petróleo.

Ahora los reclamos se centran en que las provincias no pueden quedar marginadas del derecho a percibir un porcentaje equivalente a la regalía.

Hasta el momento han ingresado 930 millones de dólares al Tesoro. Y en el cálculo oficial lo que se va a incorporar en los próximos noventa días, llevará esa cifra a los 2.200 millones de dólares.

Entendemos, señor presidente, que las provincias tienen derecho a un porcentaje de ese monto que, por extensión del principio de la regalía, tiene que ser de aproximadamente el 12 por ciento.

Hemos conversado con las provincias productoras de petróleo para establecer en el proyecto un 10 por ciento de lo recaudado por el Tesoro de la Nación para ser girado a las provincias cuyas áreas hayan sido vendidas. Esto fue planteado en la reunión de gobernadores de provincias petroleras, en donde estuvieron presentes también sus senadores. La situación también le fue expuesta ayer al ministro. Del impuesto a los combustibles la Nación recibe un 47 por ciento, o sea aproximadamente 1.250 millones de dólares anuales, aún con un bajo nivel recaudatorio. De esos 1.250 millones de dólares proponemos se destine un 6 por ciento a pagar en cuotas mensuales —y hasta su cancelación— el 10 por ciento de los montos que ha cobrado la Nación por las licitaciones mencionadas.

No voy a hacer referencia al Pacto Federal de Luján, en donde se proclama la propiedad provincial de los hidrocarburos. En realidad, no se toma conciencia de que lo que se vende no es una empresa de servicios como Aerolíneas, Ferrocarriles o ENTEL, sino que en el caso que nos ocupa lo que se vende es un recurso no renovable. Desaparece para siempre.

No me quiero referir exclusivamente a la provincia de Mendoza; voy a hablar de provincias cuya geografía es un desierto y a las que lo único que les dio naturaleza es el gas y el petróleo de su subsuelo, que hoy viven merced a las regalías y que con este proceso de licitación de áreas petroleras, se acelera el proceso extractivo y se acorta el horizonte de su subsistencia por tratarse precisamente de un recurso no renovable. Ello se torna dramático si se considera que en veinticinco o treinta años —no hay técnicos que digan que nuestros recursos van a durar más— quedarán sin su gas y petróleo y además sin la percepción de las regalías hidrocarburíferas.

Cuando se pide mayor participación en la renta petrolera para las provincias productoras, lo que se reclama es que tengan ahora la posibilidad de crear una infraestructura económica que en su momento reemplace lo que hoy es su principal fuente de ingreso, que son las regalías.

En el artículo 19, cuando se establece en el impuesto a los combustibles la distribución de lo recaudado, vamos a solicitar la inclusión de un párrafo, que establece que de los fondos que percibe el Tesoro nacional deberá destinarse un 6 por ciento —del 47 que recibe— a las provincias en cuyos territorios se encontraren los yacimientos hidrocarburíferos que han sido o serán objeto de privatizaciones.

Es decir, de los 900 millones de dólares que ya han ingresado y de los fondos que surjan por

aquellas áreas que inminentemente van a ser licitadas o adjudicadas. Dicho pago será del 10 por ciento de lo que el Estado nacional perciba o percibiére en concepto de derechos de explotación en las áreas secundarias o de los derechos de asociación en las áreas centrales.

No quiero extenderme demasiado en este tema. Quizás uno de los aspectos más duros con respecto al impuesto a los combustibles es cuando se establece que las provincias tienen un límite para cobrar el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto provincial que está dentro de sus facultades fiscales.

El proyecto de ley dispone que las provincias que adhieran a este sistema —esto lo aprobó la Cámara de Diputados— deberán establecer hasta el uno por ciento para las fases de extracción e industrialización, y el 2,5 por ciento de los ingresos brutos para la comercialización, o sea para los expendedores de nafta y subproductos. Esto quiere decir que toda la presión tributaria recae sobre los expendedores, no sobre “el jamón del sandwich” que es el proceso extractivo. Y ahora el señor ministro, con la modificación que nos trae, ha eliminado la palabra “producción”.

Esto quiere decir que las provincias, de votarse este proyecto de ley, no podrán gravar con ingresos brutos la extracción de petróleo, con lo que se les ata las manos para poder cobrar aunque sea el 1 por ciento de los ingresos brutos a las empresas adjudicatarias dedicadas hoy al proceso de extracción y de producción del petróleo ubicado en nuestros territorios. ¿Por qué esta polémica? Porque cuando las provincias advirtieron que no aumentó el nivel de recaudación en materia de regalías petroleras y que la Nación no les reconoce ni un centavo de lo que cobra “cash” por derecho de explotación, las provincias productoras inmediatamente pusieron en marcha proyectos de ley tendientes a aumentar los ingresos brutos de la actividad petrolera. La historia continúa cuando, enterado el gobierno nacional de la pretensión de los estados provinciales de cobrar más ingresos brutos, viene el Poder Ejecutivo y dice: “Hasta acá llegan”.

Una verdadera injusticia, señor presidente. Por eso vamos a solicitar la modificación de este artículo. Lo expuesto es con respecto al título “Combustibles”.

Procurando ser lo más breve posible en mi exposición, voy a referirme a los tres artículos propuestos en lo referente al procedimiento recaudatorio del IVA, fundamentalmente al último, en el que se establece la sanción de clausura del comercio cuando el comerciante no extienda la

factura o comprobante de pago con la aclaración referida al impuesto al valor agregado, por la simple determinación de un inspector de la Dirección General Impositiva y la suscripción del acta por parte del denunciante, en este caso, el cliente o consumidor a quien no se le otorgó la factura.

Si bien es cierto lo señalado por el señor senador Trilla, de que no habíamos abordado el tema porque no tiene estado parlamentario, para evitar formalismos me referiré brevemente a ese asunto porque vino en el proyecto originario que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso, la Cámara de Diputados lo eliminó y ahora el ministro Cavallo, haciendo las veces de legislador, manifestó que el bloque justicialista iba a proponer su incorporación y nos anuncia la inclusión de estos artículos.

Tal como lo expusiera el señor senador por Entre Ríos, somos conscientes...

Sr. Cass. — Otra vez el Poder Ejecutivo quiere reemplazar al Poder Legislativo.

Sr. Genoud. — ...de las necesidades fiscales por las que atraviesa el gobierno. Esto no es retórica. No se trata de aceptar algo para luego criticarlo. Hay que luchar con todos los medios disponibles contra la evasión fiscal.

Compartimos, en general, algunos de los términos manifestados por el señor ministro y por el señor subsecretario Tacchi, pero objetamos el mecanismo establecido por el proyecto de ley que estamos tratando hoy.

Yo sé, señor presidente, que muchas veces la ley obstruye o limita, y casualmente esa es la naturaleza de las leyes procesales. Vale decir que esas normas son las que establecen un camino, por ende establecen un límite a las partes en lo que se refiere a sus conductas o modos de actuar. Por eso en este caso se trata de una ley de procedimiento que establece una frontera ante un posible abuso del Estado.

Por ejemplo, ante cualquier procedimiento de carácter penal, no se necesita ser abogado para saber que desde el momento en que interviene un juez, un policía o cualquier autoridad, tienen que respetarse ciertas y determinadas normas. A una persona a la que se la ha atrapado "in fraganti" no se la puede abofetear para que confiese. Alguien quizás se vería tentado de obtener por procedimientos más efectivos el esclarecimiento de muchos delitos.

Sería muy fácil hacerlo de esta forma. Sin embargo, hay normas procesales que deben observarse rigurosamente, por ejemplo, la que establece que nadie puede ser obligado a declarar

contra sí mismo o la que indica que el acusado tiene derecho a nombrar a su abogado.

A menudo estas normas procesales son molestas para el Estado, el cual tiene que avanzar en el rol de esclarecimiento de la verdad y aplicar sanciones que pueden ser para beneficio y protección de todos.

Reitero que las reglas de procedimientos tienen carácter limitativo. Por más que todos queramos combatir la evasión; por más euforia, ganas y vehemencia que pongamos para lograr este objetivo, debemos respetar la ley, porque el día que la violemos se derrumbará el estado de derecho. Y por más buena voluntad que pongamos, por más que pretendamos facilitar al gobierno su loable tarea de combatir la evasión, el procedimiento propuesto en este proyecto no condice ni con la Constitución ni con nuestro sistema legal.

No voy a abundar en argumentos: en primer lugar se viola el principio constitucional del derecho de defensa en juicio, el debido proceso y el derecho a la defensa en juicio. Esto es así porque el comerciante al que se le efectúa la clausura no tiene derecho a defenderse. El negocio ya le fue clausurado; si se defiende después, lo hará con el negocio clausurado.

Además se viola otro principio contenido en nuestra ley y en el Pacto de San José de Costa Rica. Me refiero a la doble instancia judicial. Se trata de un axioma de nuestro derecho ratificado por pactos internacionales, y significa que todos tenemos derecho a dos oportunidades judiciales. En este caso se admite una sola "ex post facto", con el negocio clausurado y con efecto devolutivo en la apelación. El hecho de recurrir ante la Justicia no suspende la sanción sino, por el contrario, ésta permanece hasta tanto exista un pronunciamiento.

Sr. Rodríguez Saá. — Esas son las dos instancias.

Sr. Genoud. — He puesto buena voluntad para flexibilizar mi criterio y ver si esto era posible, pero no encuentro modo racional para entenderlo así.

Voy a traer un caso que puede ejemplificar el error serio que cometió el Congreso cuando sancionó la ley 14.878, de vitivinicultura. Se estableció que en ciertos y determinados casos, cuando había adulteraciones de vinos en las bodegas, el inspector del Instituto Nacional de Vitivinicultura podía clausurar inmediatamente la bodega frente al peligro de que se expendiera vino falsificado. Entonces, se podía recurrir a la Justicia, pero esa práctica tenía efecto devolu-

tivo: no se suspendía la medida pues la bodega seguía cerrada. ¿Sabían cuánto duró la ley? Un año; luego de ese lapso la Corte la declaró inconstitucional.

Entonces mi pregunta apunta a saber si esta Corte mañana o pasado va a resistir el menor alegato de un abogado cuando plantee la inconstitucionalidad de la ley, frente a normas tan claras de la Constitución Nacional.

De tal modo presumo, señor presidente —y es materia opinable— que nosotros estaríamos haciendo surgir con esto una suerte de catarata de pleitos contra el Estado —evidentemente el Estado no es muy ganador de pleitos—, lo cual puede ser gravemente perjudicial para sus intereses económicos. Creo que la esencia del sistema previsto en el proyecto que estamos tratando parte de la premisa de dar funciones judiciales a un inspector, lo que a mi juicio es un exceso.

El inspector se convierte en un juez y esta situación creo que favorece el cohecho. Para ser juez se requiere una serie de condiciones; en cambio, para ser inspector los requerimientos son menores. Sin embargo con este proyecto, al inspector se le da la facultad de ser juez y de ejecutar la sentencia.

En el orden práctico he tratado de imaginar un sinnúmero de supuestos acerca de cómo puede darse una denuncia. Me imagino un señor que va a un supermercado y compra cuatro o cinco productos. Cuando se retira de la caja no le dan el *ticket* de su compra; entonces, este señor puede decirse: "Voy a combatir a este evasor. Iré a hablar con el inspector y formularé la denuncia". Supongamos que así lo hace; entonces, el inspector va con el cliente a ese comercio. Es válido interrogarse: ¿Dónde está la prueba de la infracción? ¿Qué elementos concretos existen para formular la denuncia?

Supongamos que mañana yo soy comerciante y tengo un boliche en la esquina de mi casa. Quiero hacer cerrar a los otros negocios que me hacen competencia en la zona y le pido a tres o cuatro amigos que hagan denuncias diciendo que esos comercios están vendiendo sin factura. Se inicia así una verdadera batalla comercial para evitar la competencia. Incluso, se puede hacer creer a un inspector de buena fe que en un determinado negocio no entregan facturas y fácilmente lograr su clausura. En fin, esto puede originar muchísimos conflictos.

Creo que quienes propician esta medida no se han planteado fácticamente cómo pueden darse los hechos; es decir, cómo se va a labrar el acta,

qué elementos debe tener en cuenta el inspector. Hemos visto que con el mero hecho de la denuncia puede producirse una clausura; entonces, de esa manera estaremos convirtiendo a cualquier individuo en un arma altamente peligrosa con el objeto de clausurar un comercio.

Por favor: nadie crea que con estos argumentos procuramos proteger la evasión; todo lo contrario. Estamos analizando los inconvenientes que traerá una medida de esta naturaleza.

Evidentemente, no debe ser éste el primer gobierno al que se le ocurrió combatir la evasión con un mecanismo tan sencillo. Ahora bien, por demasiado sencillo ha caído en un facilismo peligroso que le puede traer como consecuencia al Estado numerosos pleitos, conflictos de carácter administrativo, proliferación del cohecho, injusticias de distinta índole.

Sr. Gass. — Además, hay que tener en cuenta que al hombre de barrio no le gusta ser "botón". El ciudadano común no es "soplón".

Sr. Rodríguez Saá. — Que se dirija a la Presidencia.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Si usted está apurado en el debate, le ruego que cuando quiera hablar pida permiso a la Presidencia. Si no, respete al orador.

Sr. Gass. — Yo pedí permiso. Como el micrófono no estaba habilitado, usted no me escuchó.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Entonces, tenga la gentileza de utilizar correctamente los medios mecánicos para que se lo pueda escuchar.

Sr. Gass. — Bien, señor presidente...

Sr. Genoud. — He concluido, señor presidente.

Simplemente, agrego que estas últimas reflexiones que he hecho son de orden práctico y me permiten pensar que en la realidad este procedimiento no va a redundar en algo eficaz ni provocará beneficios respecto al control tributario.

Quiero destacar que nuestra oposición se funda en los argumentos de carácter legal y, principalmente, de orden constitucional a que hice referencia anteriormente. Además, algunas de las ideas que aportara el señor senador por Entre Ríos doctor Brasesco pueden ser tenidas en cuenta para introducir las modificaciones correspondientes.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Gass. — Si no se oponen los señores senadores, propongo que, para no extendernos de-

masiado en el tiempo, votemos en general el proyecto de ley en consideración y luego, en el tratamiento en particular, nuevamente los miembros informantes de la mayoría y de la minoría y los señores senadores que quieran hacer uso de la palabra formulen las observaciones que estimen convenientes a los distintos artículos. De esta manera ahorraremos bastante tiempo.

Sr. Rodríguez Saá. — Mi bloque apoya la moción.

Sr. Presidente (Aguirre Lanari). — Advierto que no está cerrada la lista de oradores.

Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Storani. — Pedí al presidente de nuestro bloque que hiciese esta proposición por cuanto yo, que estoy anotado en la lista de oradores, después de escuchar las exposiciones de los señores senadores Trilla y Genoud, que se refirieron al impuesto a los combustibles, que era el tema que iba a abordar específicamente durante la consideración en general, no quiero robar más tiempo a la Cámara.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador Luis A. J. Brasesco.

Sr. Storani. — Y lo avanzado de la hora indica que debemos ser prudentes en este aspecto.

Por esa razón adhiero a la moción de que se pase a votar.

Sr. Presidente (Brasesco). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Cass. — Con un nuevo presidente, insisto en la moción, que ha sido suficientemente apoyada.

Sr. Presidente (Brasesco). — Hago saber a los señores senadores que el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara ha vuelto a su banca a los efectos de hacer uso de la palabra, sin perjuicio de lo cual podremos pasar después a votar la moción que se acaba de formular, atento a que en este momento no hay quórum.

Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente, señores senadores: reclamo el mismo derecho que han tenido los otros bloques para hablar con toda amplitud y sin ser molestados en absoluto.

Comprendo que resulta fatigoso escuchar a esta altura de la madrugada una nueva exposición que seguramente no va a agregar nada nuevo a lo mucho que se ha dicho. Pero me parece que es conveniente que reflexionemos que

todos los bloques tienen derecho a hablar sobre el tema a través de sus respectivos miembros informantes.

Sr. Cass. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Aguirre Lanari. — Sí, señor senador.

Sr. Cass. — No ha sido mi ánimo, señor presidente, molestar al señor senador por Corrientes.

Pensé que lo mismo que puede decir como miembro de su bloque ahora puede expresarlo después con toda amplitud, y en ese caso nosotros lo vamos a escuchar con el debido respeto.

— Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Aguirre Lanari. — Ese no fue el criterio aplicado previamente por los bloques que ya hicieron uso de la palabra. Esto significa introducir un nuevo criterio cuando ya se han expresado los bloques mayoritarios y todavía no lo han hecho algunos de los otros bloques.

Sr. Presidente (Brasesco). — La Presidencia quiere hacer conocer a los señores senadores que todavía no está cerrada la lista de oradores y que, existiendo una moción de orden, ha sido uso y costumbre de esta Cámara clausurar la lista de oradores y pasar a votar inmediatamente después de agotada la misma.

Entonces, como en la lista se encuentra anotado el señor senador por San Juan, le concedo el uso de la palabra.

Sr. Rodríguez Saá. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Brasesco). — Le voy a conceder la palabra siempre y cuando el señor senador por San Juan le conceda la interrupción.

Sr. Posleman. — Sí, señor presidente.

Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: la moción que formuló el señor senador Cass, que nosotros apoyamos, implicaba una renuncia de los miembros del bloque radical a hacer uso de la palabra en general, temperamento al cual adherimos los senadores peronistas. Pero si los señores senadores de los bloques provinciales quieren hacer uso de la palabra durante la consideración en general, no nos vamos a oponer.

Seguramente el señor senador Cass estará dispuesto a retirar su moción para continuar el debate en los términos cordiales en que venía desarrollándose, para volver a plantearla luego.

Finalmente, si el señor senador por Corrientes se ha sentido molestado, le pedimos disculpas.

Sr. Presidente (Brasesco). — La Presidencia quiere hacer notar a los señores senadores que

aun cuando hubiese prosperado la moción del señor senador por Buenos Aires, iban a hacer uso de la palabra todos los oradores anotados en lista hasta que ésta quedara agotada, y luego se iba a poner a votación dicha moción.

Sr. Cass. — Discúlpeme, señor presidente, pero no coincido con su interpretación. Las mociones de orden no se discuten sino que se votan directamente.

Yo retiro la moción de orden por el respeto que tengo por el señor senador por Corrientes.

Sr. Presidente (Brascesco). — La Presidencia no va a dialogar. Acá no se ha dicho si las mociones de orden no se discuten o se votan sino que se ha expresado que la moción de orden formulada por el señor senador por Buenos Aires se iba a votar inmediatamente después de que terminara de hablar el último orador anotado en esta lista, que estaba cerrada. Esa ha sido la metodología de este cuerpo y también de la Cámara de Diputados.

— Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Brascesco). — De manera, entonces, que tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Posleman. — Señor presidente: creo que la moción que se ha formulado y lo avanzado de la hora nos van a hacer reflexionar respecto a la necesidad de modificar el Reglamento de este honorable cuerpo a efectos de que antes de que hagan uso de la palabra los señores senadores en forma individual, quienes representan a los bloques de la Cámara tengan la posibilidad de manifestar su posición. De esta manera, los distintos sectores podrán expresarse en el momento debido y no quedar relegados, como en este caso, para el final del debate.

Sr. Presidente (Brascesco). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Britos. — No hemos querido quitarle la palabra a nadie. Si pensamos cómo vamos a actuar en lo sucesivo, debemos determinar cuánto tiempo podemos hablar. De acuerdo con el Reglamento de la Cámara, los miembros informantes tienen un tiempo determinado y pueden intervenir en otra ocasión en el debate. Estamos rompiendo con este orden de cosas. Cada uno expresa todo lo que desea pero posteriormente se reiteran los mismos conceptos. Pareciera que pretendemos cambiar porque quien informó o manifestó su posición previamente no fue capaz de persuadir al otro bloque.

Considero que en el futuro tendríamos que guiarnos por el Reglamento y actuar de acuerdo

con él. De lo contrario ocurrirán estos hechos y vamos a dejar de lado, como bien lo planteó el señor senador por Corrientes, otras voces que tienen el mismo derecho que la nuestra. En lo sucesivo debemos tener cuidado de no ejercer un uso abusivo del derecho que tenemos de hablar respecto de determinado tema.

Sr. Presidente (Brascesco). — Señores legisladores: el tema se encuentra totalmente agotado.

Quisiera saber si el señor senador por San Juan va a hacer uso de la palabra para referirse al tema en cuestión.

Sr. Posleman. — Sí, señor presidente, voy a hacer uso de la palabra. Concedí una interrupción solicitada por el señor senador por San Luis.

Seré muy breve y concreto, como acostumbro serlo en este cuerpo.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Eduardo Menem.

Sr. Posleman. — Este complejo proyecto de ley que estamos considerando abarca distintos temas y lo que podríamos llamar un enroque de los destinos en el caso de los fondos de combustibles y de la vivienda. Esta disposición incluye también la derogación de las jubilaciones especiales, otro tipo de impuestos y el destino de los fondos de las privatizaciones.

Significa un tremendo esfuerzo para tratar de solucionar un problema al que hoy damos un paliativo pero que con seguridad será motivo de preocupación de este cuerpo en un futuro bastante cercano.

Con este proyecto damos al sector de los jubilados una pequeña suma de retribución. Por otra parte, se está por sancionar un bono que va a cancelar o refinanciar las deudas que existen con dicho sector. Pero al mismo tiempo, y luego de que este proyecto se sancione y tenga vigencia como ley, el problema del incumplimiento de la legislación en cuanto al monto de las retribuciones de las jubilaciones seguirá existiendo, generándose una deuda que sin duda alguna deberemos considerar con posterioridad.

A través de este proyecto también se resuelve en parte un conflicto que generó el dictado del decreto 2.733/90, abiertamente inconstitucional que derogó la ley 17.597, que estableció el impuesto a los combustibles. Este decreto ha sido rechazado por todas las provincias y por la Comisión Federal de Impuestos. Digga esto porque en el momento que corresponda voy a pedir la eliminación de una mención que se hace de este

decreto, ya que de ninguna manera las provincias pueden convalidar esta norma inconstitucional.

Este proyecto implica un grave esfuerzo para las provincias, con fondos que les pertenecen y que a partir de hoy pasan al sistema previsional o al Tesoro de la Nación. Nosotros entendemos la gravedad de la situación económica y las necesidades fiscales, pero tenemos la responsabilidad y la obligación de cuidar los fondos de coparticipación de las provincias.

El ministro ha expresado en este recinto que la recaudación general de la Nación ha mejorado notablemente. Esto es cierto, y lo valoramos como un esfuerzo que ha realizado el Poder Ejecutivo en la aplicación de medidas para recaudar mejor. Pero esta recuperación es principalmente consecuencia de esta estabilidad que estamos viviendo y de la inexistencia del deterioro que produce la inflación.

Entre las disposiciones del proyecto puedo mencionar el cambio del régimen de financiamiento del Fondo Nacional de la Vivienda. Este cambio, que parece un enroque o una sustitución de fondos de efectos neutros, no tiene en realidad esta característica. El fondo que pasa a la seguridad social puede rendir aproximadamente 120 millones de dólares mensuales para la vivienda. Aquí se ha hablado de promedios de 80 o 90 millones. Pero debemos entender que esta cifra guarda relación con los salarios actuales, que están muy deprimidos, y que va a mejorar en la medida en que haya una recuperación de los salarios y una disminución de la evasión de los aportes previsionales que tiene lugar en la actualidad. Es decir que este cambio no es neutro sino que implica un deterioro de las posibilidades de inversión de las provincias para solucionar los problemas de vivienda.

Pero también se desvirtúa un principio de solidaridad que está incorporado en la misma ley del FONAVI y que se manifiesta en el ahorro que hacen los trabajadores de parte de sus salarios, ahorro que es aportado por la patronal al fondo para brindar una solución a los sectores que carecen de vivienda, que son los de menores recursos.

Para compensar esta pérdida del FONAVI se asigna parte de lo ingresado por el impuesto a los combustibles al financiamiento de viviendas, de acuerdo con cifras que son insuficientes, por lo cual oportunamente vamos a plantear su reformulación.

También se modifica la estructura de conducción del FONAVI, punto que compartimos.

Otro de los aspectos que toca el proyecto es el aumento de dos puntos en el impuesto al valor agregado, con destino específico al Sistema Nacional de Previsión Social, cosa que aceptamos.

Creemos que es inconveniente y significa un perjuicio para las provincias que en el mismo artículo se faculta al Poder Ejecutivo para disminuir esos dos puntos o más del impuesto al valor agregado. Como consecuencia de la nueva distribución del impuesto, en el caso de que las provincias vuelvan a disminuir los dos puntos que se aumentan estarían cediendo el 5 por ciento de su coparticipación en favor del Tesoro. Este es un aspecto que debemos tener en cuenta.

El 11 por ciento que se destina al Sistema Nacional de Previsión Social tiene una metodología de distribución absolutamente arbitraria. Hemos criticado esta metodología al establecerse en la ley 23.549 un aporte específico para la previsión social. Allí surgió esto del 90 por ciento para la Nación y el 10 por ciento para el conjunto de las provincias más la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Decimos que esto es absolutamente arbitrario porque cuando se habla de que las provincias deben asignar fondos de los que les corresponden para los municipios se afirma que se debe tomar como parámetro la cantidad o el número de afiliados que el Sistema de Previsión tenga. Este será el parámetro repartidor o la cifra que dará el monto a asignar a cada uno de los municipios.

Nosotros propondremos que este 11 por ciento sea distribuido entre la Nación y las provincias conforme a la cantidad de afiliados que tengan los sistemas existentes, sean nacionales o provinciales, y en este último caso involucrando a los municipios. Esta es la forma de distribuir con justicia, porque los regímenes provinciales están tanto o más deteriorados que el de la Nación.

No entendemos por qué se ha establecido que por un tiempo determinado —hasta el 1º de julio de 1992— el 50 por ciento de este aporte que corresponde a las provincias pase al Tesoro.

No solamente de esta forma pierden las provincias. Si observamos la fecha de vigencia que tendrá este impuesto al valor agregado vemos que según el artículo 6º corresponde al momento de la sanción de la ley. Es decir que a partir de ese momento el Poder Ejecutivo tomará el 11 por ciento de la coparticipación para girarla al Sistema Nacional de Previsión Social. Pero los efectos de esa ley en cuanto al impuesto al valor agregado regirán a partir de los treinta o

sesenta días siguientes. En este caso las provincias están resignando otro 5 por ciento de la coparticipación.

Quiero hacer una reflexión final en cuanto al impuesto a los combustibles que se restablece. Creemos positivo que se pongan en claro estas situaciones conflictivas entre la Nación y las provincias con motivo de la derogación por decreto de la ley convenio 17.597.

Históricamente el 50 por ciento del producido del impuesto a los combustibles ha sido distribuido en las provincias para Vialidad y otros destinos.

Con posterioridad, y por una situación de emergencia, se sobrecargó el impuesto a los combustibles con destino a la previsión social. Es decir que esto ya es motivo de la emergencia y se incrementó el impuesto con ese sentido. Hoy la distribución es evidentemente deficitaria y perjudicial para las provincias. Se comenzó con un 13 por ciento para las mismas y luego de cinco años, en una escala progresiva, se llegará hasta el 29 por ciento, que en definitiva está muy lejos de los requerimientos y necesidades de las provincias.

Señor presidente: si bien el ministro contestó en parte un planteo que le formulé, no voy a volver sobre el tema, aunque sí lo haré en el tratamiento en particular.

Insisto en que por más que por otras vías puedan llegar esos recursos al Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior, el hecho de asignar los montos provenientes del impuesto a la energía al Tesoro nacional es violatorio de la ley 23.548, que define cuáles son los impuestos coparticipables. Este impuesto referido a la energía eléctrica necesariamente es coparticipable y en este caso no va un solo peso a las provincias.

Hice mención a nuestra oposición al decreto 2.733, y en su momento lo vamos a mencionar. Para concluir, señor presidente, entendemos que debemos apoyar en general este proyecto y así lo va a votar el bloque que representamos, haciendo las observaciones particulares en cada uno de sus artículos en el momento oportuno.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes, bloque liberal.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: en atención a la discusión sostenida previamente, y teniendo en cuenta el cansancio de los colegas, dado que son más de las cinco de la mañana, voy a intentar comprimir de la manera más drástica posible la exposición que tenía pensado realizar.

Dejando a un lado el análisis de cómo llegamos a un proyecto que modestamente buscaba la obtención de un aumento de 300 mil australes para los jubilados, este proyecto de ley, como bien lo ha calificado hace un rato el señor senador Genoud, ya casi es algo más que ómnibus; es un tren entero.

En realidad no son fáciles las circunstancias por las que debemos afrontar el debate, particularmente los bloques minoritarios, que no tenemos a nuestra disposición un conjunto eficiente y numeroso de asesores, como pueden poseer algunos otros bloques. No obstante ello, no hemos querido ni debemos rehuir la responsabilidad de llegar a este debate con la mejor información que podemos tener y con la mayor reflexión que podemos allegar en las escasas horas en las cuales hemos tenido que afrontar el examen definitivo de este proyecto, ya que la versión oficial recién la tuvimos el lunes. Antes de eso hubo una suerte de proyecto llamado borrador y luego, en la reunión que mantuvimos anoche con el ministro de Economía los presidentes de bloque, tuvimos un anticipo de algunas reformas que el mismo proyectaba, sin perjuicio de otras que hemos conocido prácticamente anoche e, inclusive, quizás hoy mismo en nuestras propias bancas. Pero repito que no vamos a rehuir —ni hemos querido hacerlo— nuestra contribución a este debate, teniendo en cuenta la expectativa pública y las legítimas expectativas de los jubilados, que no pueden entender cualquier razón de dilación como las que acabo de exponer.

Por eso me limitaré básicamente a señalar algunas disidencias, ya que las coincidencias son muchas, sobre todo en cuanto al objetivo que perseguimos. Se trata de disidencias referidas al llamado enroque que se ha hecho entre los impuestos que ahora se dedican a la parte previsional y aquel de los combustibles, dirigido a la atención del FONAVI.

En las provincias, como ya ha sido puesto de manifiesto por parte de los señores senadores Romero Feris y Posleman, es motivo de justificada preocupación cualquier atisbo que pudiéramos advertir acerca de una disminución de los fondos dirigidos a este rubro, ya que nadie ignora el papel dinamizador que tiene la construcción en la vida económica de las comunidades del interior e, incluso, lo que desde el punto de vista social significa la provisión de techo propio para los hogares formados o a formarse.

La preocupación inicial, pues, que mantenemos es que las disposiciones tal cual vienen proyectadas inciden negativamente en los

fondos que tradicionalmente han sido destinados al FONAVI.

Por eso, en la discusión en la Cámara de Diputados le tocó al diputado Tomasella de mi partido, introducir una reforma que fue aceptada, no en la magnitud por él sugerida pero que asegurará por lo menos una cifra mínima que será aportada por el Tesoro nacional a efectos de que si la recaudación por vía del impuesto a los combustibles no alcanza a las cifras que el FONAVI exige pueda llegarse a una cantidad mínima. Al respecto, el diputado solicitó que dicha cifra fuera de 90 millones y finalmente, por consenso, se fijó en 70 millones, que es la que mantiene el proyecto que consideramos.

En la reunión que mantuvimos anteanoche los presidentes de bloque y el ministro de Economía, le planteé nuevamente esta inquietud y el ministro reconoció que la cifra que podía establecerse como requerida por el FONAVI era la de 87 millones 500 mil dólares, sosteniendo que con la recaudación anual que se mantiene en materia de combustibles se podía llegar a la cifra de 90 millones de dólares.

Sin embargo, los números no dan así. Porque si consideramos el dato de que la recaudación anual es de 2.400 millones de dólares en el caso más optimista o de 2.200 millones, la cifra mensual sería de 200 millones de dólares, y el 40 por ciento correspondiente, destinado al FONAVI, serían 80 millones.

De todas maneras, sería una cifra insuficiente. Por eso, coincido con la postura del senador Romero Feris y yo también pienso que deberíamos destinar 90 millones de dólares con el objeto de asegurar el flujo adecuado para esta actividad fundamental para la vida económica del interior.

Precisamente ayer, debo reconocer, concurrió al Senado una delegación del Consejo Federal de la Vivienda para traer la preocupación de las provincias con respecto a este tema. Debo ser sincero, porque algunos de los miembros admitió que podrían arreglarse con setenta; otros no estuvieron de acuerdo. Pero esto demuestra cómo las provincias están atentas e inquietas con respecto a cualquier baja que pueda existir en esta materia. Incluso, pidieron algunas otras modificaciones al proyecto de ley en consideración, como la de que el Consejo Federal de la Vivienda no fuera introducido, como lo dispone la norma en tratamiento de la Cámara; sólo como entidad consultiva —y en consecuencia actuará de asesora—, sino que tuviera funciones ejecutivas juntamente con la Subsecretaría de la Vivienda.

Un tema que no puedo eludir es el referido a la derogación de regímenes de jubilaciones especiales, como viene proyectado en la sanción de la Cámara de Diputados. Desde luego estoy de acuerdo con que se haga borrón y cuenta nueva; pero considero que la derogación lisa y llana de casi todas las llamadas jubilaciones especiales quizá no deba ser mantenida íntegramente en la decisión que se adopte en el futuro porque existen, como bien han puesto de resalto algunos señores senadores, ciertas actividades que por su riesgo o por cuestiones de salubridad justifican una diferenciación. Coincido también con que el principio de igualdad tal cual lo considera o establece la Constitución Nacional no significa una igualdad absoluta, sino que hay que entenderla conforme a la caracterización que de la misma ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Con respecto a las jubilaciones que rigen para legisladores y para quienes pertenecieron al Poder Ejecutivo y a la administración pública en general, debemos admitir que la permisividad de las normas vigentes ha facilitado la obtención de jubilaciones en edades insólitas y con una duración exigua en el ejercicio de las funciones.

Creo que la tarea de la comisión bicameral a integrarse exigirá una cuota de firmeza y de equidad que evite la readopción de ciertos beneficios que provoquen agravio a otros sectores. Yo confío en que eso así ocurrirá y también en que dicha labor no se extienda hasta el límite de tiempo proyectado.

Coincido con lo que con toda firmeza y claridad ha expresado el señor senador Brasesco anticipando el concurso de su sector y, estoy seguro, el de todos los bloques de esta Cámara, para que se actúe con la prontitud del caso y con el espíritu de equidad que debemos poner de manifiesto quienes estamos necesitados de rendir cuentas muy claras ante la opinión pública, que recepta inquietudes legítimas, por un lado, pero que también está atacada por otras que sólo buscan el desprestigio institucional con fines inconfesables.

Dejo a un lado algunas consideraciones que deseaba formular con respecto al Título VI, referido al impuesto a los bienes no afectados a la actividad productiva, que merece algunas observaciones. Creo que podríamos ampliar el límite no imponible, y en lugar de establecer un canon o tasa único, implementar un impuesto progresivo en atención a la mayor riqueza que se grave.

Para terminar, señor presidente, quiero referirme a las objeciones que aquí se han escuchado

con respecto al título que establece un nuevo procedimiento tributario. Coincido con el propósito expresado por el señor ministro y que indiscutiblemente es el que fundamenta los objetivos de este procedimiento que tiende, desde luego, a buscar con la ejemplaridad de las normas un espíritu más propicio para el cumplimiento, que evite evasiones, que todos sabemos que existen y que naturalmente nadie puede compartir. Nadie puede estar en desacuerdo, pues, con este objetivo e incluso hay algunos aspectos de las disposiciones proyectadas que dijimos que son benéficos e indiscutibles. Es plausible, por ejemplo, que todos aquellos contribuyentes que registren sus operaciones mediante sistemas computadorizados deban conservarlos por un término de dos años a disposición de la Dirección General Impositiva.

Pero hay algunas normas proyectadas que yo no puedo compartir porque quiero ser coherente con la posición que tuve en esta materia cuando discutimos leyes anteriores, como por ejemplo la ley de emergencia económica y la ley penal tributaria.

Con permiso de la Cámara, me voy a permitir leer textualmente lo que dije cuando tratamos la ley de emergencia económica: "Coincidimos, por lo tanto, en que debemos intentar un mejoramiento de las normas vigentes, pero siempre resguardando los derechos y garantías que establece la Constitución y que aconsejan también las normas penales de un Estado democrático. En las discusiones en comisión, abogamos para que se estableciera un procedimiento administrativo rápido y eficaz, con las garantías del derecho de defensa en reemplazo de lo establecido actualmente en la ley 11.683 —Capítulo X, artículo 72—, que asegurara la intervención del presunto infractor y su defensa, posibilitándole esa instancia previa".

También me voy a permitir leer lo que manifesté cuando se trató la ley penal tributaria y previsional. Dije entonces: "No tengo duda de que el poder tributario y los principios que lo informan emanan de la Constitución Nacional. Pero también estoy convencido de que en ella se establecen los límites del poder tributario y de que en la Carta Magna están contenidas todas las garantías y derechos fundamentales del ciudadano, del contribuyente, que ninguna legislación puede tirar por la borda. En tal sentido, interpreto que el artículo 4° del Código Penal es aplicable a la presente". Y agregué más adelante que "es incuestionable que en la función recaudadora y en la adopción de todas las precauciones necesarias para evitar que alguien evada

el cumplimiento de las obligaciones no deben dejarse de lado las garantías que eviten las transgresiones al respecto que el Estado debe guardar para los derechos de sus habitantes".

Por eso manifiesto mi disidencia, no obstante el propósito que esta noche ha sido explicado por el señor subsecretario Tacchi, con respecto a la facultad que se establece en virtud de la cual un funcionario asistido por el presunto adquirente de los bienes, derechos o servicios, puede actuar ejerciendo prácticamente una función judicial de aquellas que le están vedadas al presidente de la República por el artículo 95 de la Constitución Nacional y, por ende, también a cualquier funcionario que de él dependa.

Sr. Rodríguez Saá. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Aguirre Lanari. — Sí, señor senador.

Sr. Rodríguez Saá. — Como ya he escuchado críticas reiteradas sobre este tema, debo decir que según mi interpretación de lo que se trata es de una sanción de naturaleza administrativa donde se respeta absolutamente la doble instancia, ya que la primera sanción, o sea el cierre, correspondería a la primera instancia, mientras que la segunda sería la apelación. Las sanciones de tipo administrativo, como ésta, también son facultades del presidente de la Nación.

Sr. Aguirre Lanari. — A mi juicio, son prácticamente sanciones de tipo judicial.

El señor senador Genoud habló del Pacto de San José de Costa Rica y de la doble instancia, pero yo interpreto que es conveniente la intervención judicial. Le voy a decir más, señor presidente. Si nosotros hacemos un análisis de los casos en que han prosperado las acciones contra los presuntos infractores, veremos que prácticamente hay un 50 por ciento de casos en los cuales eso procede, eso tiene éxito, lo cual significa que por intervención de la justicia en el otro cincuenta por ciento de los casos se concede el derecho de defensa a los presuntos infractores.

He escuchado con mucha atención lo que previamente ha fundamentado en forma muy extensa el señor senador Brasesco. Sus comentarios ha confirmado mi convencimiento de que esta medida, aunque esté inspirada en un buen propósito fiscalista, es una disposición impugnabile que fatalmente, llevada a los estrados de la justicia, va a naufragar como lo hicieron en su momento los casos que el senador Brasesco recordaba al referirse a la ley de abastecimiento, que yo también voté favorablemente en su oportunidad.

No quiero extenderme más en mi exposición.

He cumplido con mi promesa de constreñirme en el uso de la palabra. Debo decir, de cualquier modo, que también he querido cumplir con la obligación de contribuir con presencia y mi voz en la consideración de este asunto, que es tan importante para el gobierno, para las instituciones y para los sectores involucrados que están esperando con atención nuestra sanción.

Asimismo, he mantenido mi independencia de criterio en aquellos aspectos que a mi juicio no son convenientes.

Finalmente expreso mi apoyo en general a esta iniciativa, sin perjuicio de las reservas que he dejado consignadas.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Simplemente quiero aclarar que cuando se habla de doble instancia judicial se hace referencia a la siguiente situación —los que ejercen el derecho saben que es así—: frente a una sanción administrativa, hay una primera instancia judicial. Luego hay otra instancia del mismo carácter.

De tal modo que no es aceptable el criterio que pretende indicar que la doble instancia judicial se da de la siguiente forma: la primera instancia es la sanción administrativa y luego queda una única instancia judicial.

Sr. Rodríguez Saá. — No es así.

Sr. Presidente (Menem). — Como se ha agotado la lista de oradores, vamos a proceder a la votación del proyecto que estamos tratando.

En primer lugar, se va a votar en general . . .

Sr. Posleman. — Pido la palabra para formular una cuestión metodológica.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Posleman. — Como el único proyecto que tiene estado parlamentario es la sanción de la Cámara de Diputados, entiendo que eso es lo que vamos a votar.

Sr. Rodríguez Saá. — En general sí. En particular, voy a proponer que se voté otra cosa.

Sr. Presidente (Menem). — No puedo poner a votación otra cosa que no sea la sanción de la Cámara de Diputados.

Se va a votar en general.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Rodríguez Saá. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — A los fines de facilitar la votación en particular, propongo que se tenga como anteproyecto de dictamen el texto presentado por el bloque justicialista, que se hiciera llegar a los señores senadores. Espero que así haya sido; de lo contrario, pido disculpas.

Entonces, si en la votación del artículo 1º de nuestro proyecto triunfa nuestra posición, propongo que sea adoptado como si se tratara de un dictamen de comisión y se tenga a quien habla como miembro informante de dicho dictamen.

Hago esta proposición porque de lo contrario resultaría muy complejo a la Presidencia armar el texto definitivo que debería ser sometido a nuestra votación. Esto sería así dado que la sanción de diputados ha sufrido muchas modificaciones en el proyecto del bloque justicialista, que es el que propongo votar en particular.

Por otra parte, en lo referido al financiamiento del régimen nacional de previsión social, nuestro bloque ha aceptado la propuesta de diputados y le ha sumado las modificaciones que nos mencionara ayer el señor ministro de Economía en la reunión de presidentes de bloque, modificaciones que también fueron expresadas hoy en nuestro bloque y aquí en el recinto.

En cuanto al régimen de jubilaciones de privilegio, nuestro bloque tiene una posición distinta a la del Poder Ejecutivo. En tal sentido, nosotros apoyamos la sanción de la Cámara de Diputados, a la que simplemente le introducimos unas pocas modificaciones.

También tenemos una posición distinta con respecto al destino de los fondos provenientes de las privatizaciones, que también ha sido plasmada por escrito y redactada por nuestro bloque en forma independiente o no concordante con el proyecto del Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Menem). — Si no hay oposición, la votación en particular se va a realizar en la forma propuesta por el señor senador por San Luis.

Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Posleman. — Señor presidente: no quiero entorpecer el procedimiento propuesto por el señor presidente de la bancada oficialista, pero nosotros prácticamente no hemos tenido tiempo de leer y analizar las modificaciones que se proponen.

Tengo algunas observaciones que plantear, que las he señalado en el proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados, y que no he podido comparar con el escrito elaborado por la

bancada oficialista, porque se cambia el número de algunos artículos y se suprimen otros.

Entonces, si esto se aprueba muy rápidamente yo no voy a poder seguir con el mismo ritmo las modificaciones que se han propuesto. En tal sentido solicito que si se me pasa alguna, cuando la descubra me otorguen la reconsideración para poder plantear mis observaciones.

Sr. Brasesco. — Creo que debe seguirse el proyecto original.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Señor presidente: me parecen oportunas algunas reflexiones tendientes a acelerar la votación a través de otro ordenamiento. Pero la realidad es que si bien es cierto hemos recibido al principio de la sesión un proyecto no presentado oficialmente, porque recién ahora tiene estado parlamentario, luego de formular la propuesta el señor senador Rodríguez Saá, también es verdad que hemos trabajado hasta ahora con el proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados.

En consecuencia, creo que debemos seguir con este ordenamiento. Tal vez significará un mayor esfuerzo, pero la bancada justicialista tendrá que formular las propuestas de modificaciones en cada caso. Creo que es algo razonable lo que estoy pidiendo.

Hice estas observaciones cuando me tocó hablar después del primer miembro informante. En ese momento no se había planteado ninguna modificación y no tenía estado parlamentario ningún proyecto modificatorio de la sanción de la Cámara de Diputados.

Incluso cuando el señor ministro y el señor subsecretario hicieron una ampliación de conceptos, tampoco tenía estado parlamentario y solamente se estaba dando una explicación académica sobre el tema.

No es posible que ahora, después de diez horas de debate, tengamos que votar en particular siguiendo otro proyecto.

Sostengo —y la bancada de la Unión Cívica Radical me apoya— que debemos seguir el procedimiento que hemos adoptado hasta este momento, considerando el proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados, formulando sobre cada uno de sus artículos las propuestas de modificaciones que se consideren pertinentes.

Por otra parte, en la consideración en general nosotros hemos dicho cuáles eran los artículos que no íbamos a votar favorablemente por razones de tipo global y no por una disidencia par-

cial. De manera entonces que los cambios son para nosotros un poco relativos en algunos artículos.

Ahora nos encontramos con un nuevo proyecto sobre el cual tenemos que votar en particular, luego de haber hablado durante diez horas de la sanción de la Cámara de Diputados. Sigamos con el proyecto que vino de la Cámara de Diputados y que la bancada justicialista formule las propuestas de modificaciones a dicho proyecto.

Sr. Gass. — A medida que se van leyendo los artículos.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: comprendo lo que dicen los señores senadores, pero les pido que pongan en esto un poco de buena voluntad.

Nuestro bloque comunicó oficialmente la necesidad de presentar un proyecto que fuera votado en forma ordenada y que ustedes tendrían en sus bancas. Lo hicimos pensando en que el número de senadores que tenemos como bloque oficialista podía hacernos triunfar en la votación, lo cual podremos saberlo recién después de votar.

Por esa razón les pedimos que tuvieran la paciencia de esperar un poco para que recibieran el proyecto y luego aguardar una hora más antes de bajar al recinto.

Resalto esto porque no existió la misma actitud de los bloques en forma orgánica para hacernos llegar sus propuestas.

Sr. Trilla. — ¿Cómo?

Sr. Rodríguez Saá. — En el caso suyo sí, señor senador, pero no se trató de una propuesta orgánica de los bloques. No nos llegaron otras propuestas del bloque radical; sólo nos llegó la suya.

Entonces, no existe una propuesta orgánica de los otros bloques como la que hemos hecho nosotros y que sostiene el bloque en su totalidad en este recinto.

Compatibilizar este proyecto de ley con tantos artículos es bastante complicado y difícil.

Por lo expuesto solicito que se vote el procedimiento que propongo, que es más fácil y sencillo. Puedo anunciar en cada caso si existió modificación y que la misma se lea por Secretaría. Así vamos a demorar mucho más tiempo, pero si esto le da garantías a los señores senadores, no tengo inconveniente alguno en hacerlo; es decir que en cada caso diría si existieron modificaciones o no.

Sr. Presidente (Menem). — La Presidencia se permite advertir a los señores senadores que la única diferencia entre una propuesta y otra es que en un caso se tendrá por conocido el texto y en el otro se le dará lectura por Secretaría. Esto último duplicará o triplicará el tiempo de la votación en particular.

En el caso de adoptarse el procedimiento propuesto por el señor senador por San Luis, se daría el tiempo suficiente en cada oportunidad para que si algún señor senador tiene observaciones que formular, pueda hacerlo, a efectos de no correr el riesgo señalado por el señor senador por San Juan. De esta forma el trámite sería mucho más ágil.

Sr. Gass. — ¿Por qué no usamos la metodología de costumbre, es decir, que se dé lectura a los artículos y cuando exista una modificación, el miembro informante la formule?

Sr. Rodríguez Saá. — Lo que acostumbramos hacer es trabajar con un dictamen, como el que en este caso elaboró el bloque justicialista, que todos los señores senadores tienen.

Sr. Brasesco. — Acá se está hablando de coordinar un procedimiento ágil, pero existe un problema de confusión.

Comprendo lo que señala el señor presidente de la bancada justicialista. Necesitamos que se adopte el sistema más práctico, aunque sea el más difícil. No es imprescindible que por Secretaría se dé lectura a cada uno de los artículos pero sí que el señor presidente del bloque justicialista nos diga, por ejemplo, que el artículo 1º está de acuerdo con la sanción de la Cámara de Diputados y en el artículo 2º debe estarse al texto del dictamen por ellos elaborados. De esta manera, siguiendo al presidente del bloque justicialista, tenemos una capacidad ágil de lectura.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — No tengo inconveniente alguno en seguir ese procedimiento en el entendimiento de que, no siendo ducho en proyectos de este tipo, los señores senadores deben tener absoluta paciencia . . .

Sr. Trilla. — La vamos a tener.

Sr. Rodríguez Saá. — . . . y en el caso de que me equivoque, se tendrá por válido el dictamen por nosotros elaborado.

Sr. Gass. — ¿Me permite? No he leído todos los artículos porque no soy el miembro informante ni especialista en el tema, pero deseo saber si todos los artículos están modificados.

¿Cuál es el problema en adoptar nuestro sistema? Por ejemplo, por Secretaría se menciona el título I, artículo 1º. Si no tiene modificaciones, levantamos la mano o no, y luego seguimos con el resto del articulado.

Sr. Genoud. — Se modifican veinticinco artículos.

Sr. Rodríguez Saá. — Tenemos que hacer al revés. Yo solicité que trabajáramos con el dictamen, porque si lo hacemos con la sanción de la Cámara de Diputados, producidas las modificaciones sobre la misma, se tomaría como columna vertebral y luego habría que sumarle las modificaciones del dictamen. Entonces, al votar cada caso habría que reconstruir el artículo. De esta forma demoraríamos cuarenta y ocho horas para remitir la sanción a la Cámara de Diputados. Provocaríamos una demora innecesaria en su remisión a la otra Cámara, además de la propia de la votación.

En cambio, si tomamos el dictamen de comisión elaborado por el bloque justicialista, que ustedes tienen sobre su banca, no necesitaríamos reconstruirlo, sino que podríamos sancionar el proyecto esta noche, sin necesidad —reitero— de ser reconstruido. Debería ser tipiado, firmado y mañana por la tarde estaría en la Cámara de Diputados.

Así ganaríamos tiempo.

Sr. Brasesco. — Es un problema de lectura.

Sr. Presidente (Menem). — La Presidencia propone, para terminar la discusión, que se formule la moción y que se someta a votación el procedimiento a seguir.

¿Quiere el señor senador por San Luis formular su propuesta como una moción?

Sr. Rodríguez Saá. — En primera instancia la había formulado como moción. Entendí que así lo había hecho, pero puedo presentarlo más formalmente: hago moción para que se tenga como dictamen el proyecto del bloque justicialista, se vote ese dictamen y se tenga como miembro informante al senador que habla.

Sr. Gass. — Sigo con la duda. ¿Es reglamentario que al tratar una media sanción de la Cámara de Diputados no la tomemos como material para la discusión?

Sr. Sánchez. — Esa sanción puede ser modificada. Acá lo estamos haciendo.

Sr. Presidente (Menem). — La Presidencia advierte al señor senador que el proyecto que ha sancionado la Cámara de Diputados —que no es una media sanción, sino una sanción entera— ha sido aprobado en general, de modo que no

caben dudas de que se está votando el proyecto aprobado por Diputados. Ahora bien, se le han introducido modificaciones, y la moción de orden formulada por el señor senador por San Luis tiende a que se tome como dictamen para ser votado el texto que incluye esas modificaciones.

En esta Cámara siempre se ha votado en particular en primer término el dictamen de mayoría. A los efectos prácticos, puede tomarse como tal el texto que propone el señor senador por San Luis. Como este texto se encuentra sobre las bancas de cada uno de los señores senadores, este procedimiento nos permitiría ahorrar muchísimo tiempo, sin perjuicio de lo cual esta Presidencia dará lugar a que los señores senadores realicen las comparaciones y formulen las observaciones que consideren pertinentes.

Sr. Vaca. — Yo agregaría que la propuesta del señor presidente de nuestro bloque de que se tenga como dictamen el texto presentado por la bancada justicialista obviaría el mecanismo reglamentario de declarar a la Cámara en comisión y presentar formalmente este documento como dictamen de mayoría.

Sr. Brasesco. — Lo que pasa es que se votó en general lo que vino de Diputados. Indudablemente, el trabajo realizado por el bloque justicialista coincidirá en muchos artículos con el texto remitido por la otra Cámara y en otros introducirá modificaciones. En consecuencia, lo que nosotros pedimos, para ser prácticos, para entendernos, es que se siga un orden. El artículo 1º de la sanción de Diputados, por ejemplo, ¿coincide con el del bloque justicialista?

Sr. Rodríguez Saá. — Sí, es igual. Nosotros proponemos hacer exactamente lo mismo, pero tomando el dictamen nuestro para que la mesa no tenga que reconstruir el texto que se somete a votación; esta tarea de reconstrucción demandaría 48 horas para un proyecto tan complejo como éste.

En cada artículo voy a aclarar qué modificaciones hubo. Desde luego, puedo equivocarme, pero propongo que se tenga como dictamen el texto que hemos elaborado y que se encuentra a disposición de todos los señores senadores.

Sr. Brasesco. — Yo no lo tengo; leo el del señor senador Trilla.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar la moción de orden formulada por el señor senador por San Luis.

Sr. Gass. — Disculpeme, señor presidente. Yo creo que no es una moción de orden y que nos

apartamos del reglamento porque no tenemos dictamen de comisión. El texto que se propone votar no es un dictamen; no está firmado por nadie.

Sra. Gurdulich de Correa. — Señor presidente: desde el 10 de diciembre de 1983 venimos utilizando este sistema cuando tratamos sobre tablas proyectos de ley que no pudieron ser considerados en comisión por razones de tiempo, de modo que no tenían dictamen. Siempre hemos trabajado sobre la base de un texto propuesto por algunos señores senadores, que fue considerado como dictamen en mayoría.

Sr. Brasesco. — Nadie dice que no se trabaje sobre la base de lo realizado por el bloque justicialista. Lo único que queremos, para un mejor seguimiento de sus propuestas, es que nos vayan cantando las modificaciones.

Sr. Rodríguez Saá. — Estamos de acuerdo. Las vamos a ir cantando y si me equivoco les pido desde ya disculpas.

Sr. Brasesco. — Yo sé que usted canta bien. Por otra parte, no tiene por qué pedir disculpas.

Sr. Rodríguez Saá. — La otra posibilidad es declarar la Cámara en comisión y aprobar nuestra propuesta como dictamen. Pero esto sería un avasallamiento. Me parece más correcto —y voy a intentarlo— explicar cada caso. Si quieren, nos sentamos a una mesa con el señor senador Trilla...

Sr. Brasesco. — Entendemos. Somos brutos pero no lelos. Estamos hablando en serio y no en cargada.

Sr. Presidente (Menem). — La Presidencia pone a votación la moción formulada por el señor senador por San Luis y advierte que conducirá el debate de forma tal que los señores senadores tengan oportunidad de formular todas las observaciones que estimen conveniente.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

— El texto del proyecto con las modificaciones propuestas en mayoría es el siguiente:

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TITULO I

Financiamiento del régimen nacional de previsión social

Artículo 1º. — Sustitúyese el primer párrafo del artículo 9º de la ley 18.037, texto ordenado en 1976 y sus modificaciones, por el siguiente:

El aporte personal del afiliado será del diez por ciento (10%) y la contribución del empleador del

dieciséis por ciento (16%), en ambos casos tomando como base la remuneración determinada de conformidad a las normas de la presente ley.

Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a aumentar y/o disminuir los aportes establecidos en el presente artículo en hasta un (1) punto del aporte del afiliado y en hasta dos (2) puntos el aporte del empleador.

Art. 2º. — Sustitúyese el enunciado del primer párrafo del artículo 10 de la ley 18.038, texto ordenado en 1980 y sus modificaciones, por el siguiente:

El aporte de los afiliados será equivalente al veintiséis por ciento (26%) mensual de los montos asignados a las siguientes categorías, el que se incrementará con el que corresponda de acuerdo con la ley 19.032 y sus modificaciones.

Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a aumentar y/o disminuir el aporte establecido en el presente artículo, en hasta tres (3) puntos porcentuales.

Art. 3º. — A partir de la fecha de entrada en vigor de esta ley, los montos o porcentajes de las retenciones fijadas por o en virtud de convenios de corresponsabilidad gremial con destino al Fondo Nacional de la Vivienda, quedan transferidos al Régimen Nacional de Previsión Social.

Art. 4º. — Las disposiciones del presente título entrarán en vigencia a partir del primer día del mes siguiente al de su publicación. Serán recursos del Régimen Nacional de Previsión Social todos los fondos que se perciban a partir de dicha fecha por los conceptos a que se refieren los artículos anteriores con independencia de la fecha del devengamiento. Transfiérense igualmente al Régimen Nacional de Previsión Social los créditos derivados de las contribuciones del sector privado al régimen de la ley 21.581 (FONAVI), que se perciban con posterioridad a la fecha indicada.

TÍTULO II

Afectación del IVA al Régimen Nacional de Previsión Social

Art. 5º. — Modifícase la ley de impuesto al valor agregado, texto sustituido por la ley 23.349 y sus modificaciones de la siguiente forma:

1. Sustitúyese el artículo 24, por el siguiente:

Artículo 24: La alícuota del impuesto será del dieciocho por ciento (18%).

Esta alícuota se incrementará al veintisiete por ciento (27%) para las ventas de gas, energía eléctrica y aguas reguladas por medidor y demás prestaciones comprendidas en los puntos 4, 5 y 5 bis del inciso c) del artículo 3º cuando la venta o prestación se efectúe fuera de domicilios destinados exclusivamente a vivienda o casa de recreo o veraneo o en su caso terrenos baldíos y el comprador o usuario sea un sujeto categorizado en este impuesto como responsable inscrito o como responsable no inscrito.

Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para reducir con carácter general las alícuotas establecidas

en los párrafos anteriores en hasta seis (6) puntos porcentuales conforme a las previsiones de la ley 23.548.

2. Incorpórase a continuación del artículo 49, el siguiente:

Artículo . . . : El producido del impuesto establecido en la presente ley, se destinará:

a) El once por ciento (11%) al Régimen Nacional de Previsión Social, en las siguientes condiciones:

1. El noventa por ciento (90%) para el financiamiento del Régimen Nacional de Previsión Social, que se depositará en la cuenta de la Subsecretaría de Seguridad Social.
2. El diez por ciento (10%) para ser distribuido entre las jurisdicciones provinciales y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a un prorrateador formado en función de la cantidad de beneficiarios de las cajas de previsión o de seguridad social de cada una de esas jurisdicciones al 31 de mayo de 1991. Los importes que surjan de dicho prorrateo serán girados directamente y en forma diaria a las respectivas cajas con afectación específica a los regímenes previsionales existentes. El prorrateo será efectuado por la mencionada subsecretaría sobre la base de la información que le suministre la Comisión Federal de Impuestos. Hasta el 1º de julio de 1992, el cincuenta por ciento (50%) del producido por este punto se destinará al Tesoro nacional.

Cuando existan cajas de previsión o de seguridad social en jurisdicciones municipales de las provincias, el importe a distribuir a las mismas se determinará en función a su número total de beneficiarios existentes al 31 de mayo de 1991, en relación con el total de beneficiarios de los regímenes previsionales, nacionales, provinciales y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

El noventa por ciento (90%) de dicho importe se deducirá del monto a distribuir de conformidad al punto 1., y el diez por ciento (10%) del determinado de acuerdo con el punto 2. Los importes que surjan de esta distribución serán girados a las jurisdicciones provinciales, las que deberán distribuirlos en forma automática y quincenal a las respectivas cajas municipales.

b) El ochenta y nueve por ciento (89%) se distribuirá de conformidad al régimen establecido por la ley 23.548.

Art. 6º — Las disposiciones del presente título entrarán en vigencia a partir del primer día del mes siguiente al de su publicación.

TITULO III

Impuesto sobre combustibles líquidos y gas natural

Art. 7º — Apruébase como impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural el siguiente texto:

CAPÍTULO I

Combustibles líquidos

Artículo 1º: Establécese en todo el territorio de la Nación, de manera que incida en una sola de las etapas de su circulación, un impuesto sobre la transferencia a título oneroso o gratuito de los productos de origen nacional o importado, que se detallan en el artículo 4º del presente capítulo.

Quedan también sujetos al impuesto los productos consumidos por el responsable, excepto los utilizados exclusivamente como combustibles en los procesos de producción y/o elaboración de hidrocarburos y sus derivados.

Artículo 2º: El hecho imponible se perfecciona:

- Para los productos importados con el despacho a plaza, debiendo el impuesto ser liquidado y abonado juntamente con los derechos de importación y el impuesto al valor agregado, mediante retención en la fuente a practicar por la Administración Nacional de Aduanas;
- Para los productos de origen nacional con la entrega del bien, emisión de la factura o acto equivalente, el que fuera anterior;
- Para los productos consumidos dentro de las refinerías o de las plantas de producción o elaboración, no comprendidos en la excepción del artículo 1º, con el retiro de los productos para el consumo;
- En el momento de la verificación de la tenencia de los productos cuando se trate de los responsables a que se refiere el último párrafo del artículo 3º de este capítulo.

También constituye un hecho imponible autónomo cualquier diferencia de inventario que determine la Dirección General Impositiva y no se encuentre justificada por tolerancias.

Artículo 3º: Son sujetos pasivos del impuesto:

- En el caso de las importaciones, quienes las realicen;
- Las empresas que refinan, elaboren o importen los productos que se detallan en el artículo 4º.

Los transportistas, depositarios, poseedores o tenedores de productos gravados que no cuenten con la documentación que acredite que tales productos han tributado el impuesto de esta ley o están comprendidos en las exenciones del artículo 7º, serán responsables por el impuesto sobre tales productos sin perjuicio de las sanciones que legalmente les correspondan ni de la responsabilidad de los demás sujetos intervinientes en la transgresión.

Artículo 4º: Los productos gravados a que se refiere el artículo 1º y el monto del impuesto a liquidar por unidad de medida son los siguientes:

	Por litro ★	Por kilo ★
a) Nafta sin plomo, hasta 92 RON	2.618	
b) Nafta sin plomo, de más de 92 RON	3.496	
c) Nafta con plomo, hasta 92 RON . . .	2.909	
d) Nafta con plomo, de más de 92 RON	3.885	
e) Querosén	134	
f) Gas oil	614	
g) Diesel oil	904	
h) Fuel oil		268
i) Aeronafta	67	
j) Solvente	2.668	
k) Aguarrás	2.668	

El Poder Ejecutivo determinará, a los fines de la presente ley, las características técnicas de los productos gravados, no pudiendo dar efecto retroactivo a dicha caracterización.

El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para incorporar al gravamen productos que sean susceptibles de utilizarse como combustibles líquidos, fijando un monto de gravamen similar al del producto gravado que puede ser sustituido. En las alconafas el impuesto estará totalmente satisfecho con el pago del gravamen sobre el componente nafta.

Artículo 5º: Facúltase al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos a aumentar hasta en un veinticinco por ciento (25%) y a disminuir hasta en un diez por ciento (10%) los montos indicados en el artículo anterior cuando así lo aconseje el desarrollo de la política económica. Esta facultad podrá ser ejercida con carácter general o regional para todos o algunos de los productos gravados.

Artículo 6º: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5º, facúltase al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos a modificar los montos de impuesto a liquidar por unidad de medida que se establecen en el artículo 4º, cuando la relación porcentual entre tales montos y los precios al público experimente un deterioro superior al diez por ciento (10%) comparado con idéntica relación porcentual durante la primera semana de vigencia de la presente ley, en la medida necesaria para recuperar esta misma relación porcentual.

Artículo 7º: Quedan exentas de impuesto las transferencias de productos gravados cuando:

- Se destinen a sujetos pasivos definidos en el artículo 3º, inciso b) del presente capítulo;
- Tengan como destino la exportación;
- Conforme las previsiones del Código Aduanero, sección VI, capítulo V, estén destinadas a rancho de embarcaciones de ultramar o a aeronaves de vuelos internacionales.

Tratándose de los solventes alifáticos y aromáticos y el aguarrás que tengan como destino el uso como insumo en la elaboración de productos no gravados por este impuesto, con incidencia significativa en el

precio final de estos últimos, se procederá a la devolución del impuesto creado por esta ley. Dicha devolución la efectuará la Dirección General Impositiva a los sujetos adquirentes que sean directamente responsables del uso de dichos insumos contra la presentación de la documentación que exija dicha repartición. El Poder Ejecutivo nacional, en base a la significatividad del consumo en el precio final, determinará las actividades que quedarán comprendidas en este régimen.

En el caso de transferencias para rancho de embarcaciones de pesca se procederá del mismo modo previsto en el párrafo anterior, previa acreditación ante la Dirección General Impositiva del destino del combustible empleado en el rancho.

Artículo 8º: El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para exceptuar total o parcialmente y en forma temporaria del impuesto establecido en el presente capítulo a los productos empleados como combustibles líquidos en la generación de energía eléctrica para servicios públicos.

CAPÍTULO II

Gas natural

Artículo 9º: Establécese en todo el territorio de la Nación un impuesto sobre el gas natural distribuido por redes, para uso residencial y del comercio y los servicios, excepto el destinado a gas natural comprimido y usinas eléctricas de servicio público.

El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para gravar con el impuesto creado por el presente título el gas natural comprimido cuando por razones de política energética resulte conveniente.

Artículo 10: El impuesto a liquidar será de doscientos cuarenta y un australes (₡ 241) por metro cúbico de gas natural. Los consumos gravados que se realicen en las provincias comprendidas en el artículo 1º de la ley 23.272 pagarán un impuesto menor, que fijará el Poder Ejecutivo nacional, cuyo monto por metro cúbico no podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) de la suma indicada. En tanto el Poder Ejecutivo nacional no ejerza dicha facultad, el impuesto para tales consumos será de sesenta y ocho australes (₡ 68) por metro cúbico.

Artículo 11: El hecho imponible se perfecciona al vencimiento de las respectivas facturas.

Artículo 12: Serán sujetos pasivos del impuesto quienes lo distribuyan al consumidor final.

Artículo 13: Son de aplicación para este impuesto las facultades otorgadas al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos en el artículo 5º y lo dispuesto en el artículo 6º.

CAPÍTULO III

Disposiciones complementarias

Artículo 14: Los impuestos establecidos por los capítulos I y II se regirán por las disposiciones de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones y su aplicación, percepción y fiscalización estarán a cargo de la Dirección General Impositiva, quien dictará las normas reglamentarias relativas al

plazo, forma y demás requisitos para el ingreso y exenciones de los tributos, pudiendo asimismo establecer anticipos a cuenta del gravamen. En materia de plazos de pago, y habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 3º, la Dirección General Impositiva fijará los mismos de modo de no afectar la etapa de comercialización mayorista.

El período fiscal de liquidación de los gravámenes será mensual y sobre la base de declaraciones juradas presentadas por los responsables, excepto lo previsto para las importaciones.

Los sujetos pasivos de los impuestos establecidos en esta ley quedan obligados a cumplir los requisitos de documentación y registración que establezca la Dirección General Impositiva.

Artículo 15: El Poder Ejecutivo dará cuenta al Honorable Congreso de la Nación del ejercicio de las facultades a que se refiere el artículo 5º del Capítulo I.

Artículo 16: Los sujetos del impuesto establecido en el Capítulo I del presente título están obligados a presentar a la Dirección General Impositiva una declaración jurada especial, en la forma y con los datos que ella establezca, a los fines de que ningún producto gravado deje de tributar el impuesto o quede doblemente incidido con motivo de la transición del régimen anterior al régimen ahora instituido.

Artículo 17: Deróganse la ley 17.597 y sus modificaciones; la ley 20.073 y sus modificaciones; los artículos 50, 51 y los sin número incorporados a continuación del artículo 51 y del artículo 70 de la Ley de Impuestos Internos, texto ordenado en 1979 y sus modificaciones, por la ley 23.549; el decreto 3.616 del 30 de diciembre de 1976; el artículo 21 de la ley 16.656, el inciso c) del artículo 2º de la ley 17.574 y los incisos a) y b) del artículo 2º de la ley 19.287.

CAPÍTULO IV

De la distribución

Artículo 18: El producido de los impuestos establecidos en los capítulos I y II del presente título se distribuirá entre el Tesoro nacional. Las provincias y el Fondo Nacional de la Vivienda (ley 21.581) de conformidad con los siguientes períodos y porcentajes:

	Tesoro Nacional %	Provin- cias %	FONAVI %
Hasta el 30/6/92	47	13	40
Del 1º/7/92 al 31/12/92	42	17	41
Del 1º/1/93 al 30/6/93	38	20	42
Del 1º/7/93 al 31/12/95	34	24	42
Desde el 1º/1/96	29	29	42

Artículo 19: Los fondos que corresponden a las provincias según lo previsto en el artículo anterior se distribuirán entre ellas en la forma que se establece a continuación:

- a) El sesenta por ciento (60%) por acreditación a las cuentas de cada uno de los organismos de vitalidad de las provincias en función de

los porcentuales de distribución vigente para la coparticipación vial que fije el Consejo Vial Federal de acuerdo a la distribución prevista en el artículo 23 del decreto ley 505/58;

- b) El treinta por ciento (30%) se destinará a cada una de las provincias en función de los porcentuales de distribución vigentes al artículo 3º, inciso c) y 4º de la ley 23.548, con afectación a obras de infraestructura de energía eléctrica y/o obras públicas;
- c) El diez por ciento (10%) restante será destinado al Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI), que será administrado por el Consejo Federal de la Energía Eléctrica y se aplicará para lo establecido en el artículo 33 de la ley 15.336.

Artículo 20: A los fines de la distribución a que se refieren los artículos anteriores será de aplicación lo previsto en el artículo 6º de la ley 23.548.

El régimen de distribución que se establece constituye un régimen especial frente a lo dispuesto en el artículo 2º, inciso b) de la mencionada ley.

En relación a los combustibles líquidos y el gas natural no es de aplicación lo previsto en el último párrafo del artículo 2º, ni subsisten las limitaciones contenidas en el artículo 9º, inciso b), tercer párrafo y apartado 1 acápites segundo y octavo, todos de la ley 23.548.

Artículo 21: Las provincias podrán dentro de los doscientos setenta (270) días corridos contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, adherir por ley provincial a sus disposiciones y derogar, en igual término, la legislación local que pueda oponérsele.

Las provincias que adhieran al régimen de esta ley y decidan gravar con el impuesto a los ingresos brutos las etapas de industrialización y expendio al público de combustibles líquidos y gas natural, deberán comprometerse a:

- a) Aplicar una tasa global que, comprendidas ambas etapas, no exceda el tres y medio por ciento (3,5%), pudiendo alcanzar a la de industrialización con una tasa máxima del uno por ciento (1%). La tasa global explicitada no superará el dos y medio por ciento (2,5%) hasta el 31 de diciembre de 1991, y el tres por ciento a partir del 1º de enero de 1992 hasta el 31 de julio de 1992. Hasta esta última fecha las jurisdicciones que al 1º de enero de 1991 tuvieran vigente una tasa sobre la etapa de expendio superior al dos y medio por ciento (2,5%) podrán continuar con la aplicación de la misma sobre la etapa señalada, respetando la tasa global del tres y medio por ciento (3,5%);
- b) Aplicar las tasas referidas en el punto anterior sobre las siguientes bases impositivas: en la etapa de industrialización, sobre el precio de venta excluidos el impuesto al valor agregado y el creado por el presente título; en la etapa de expendio al público,

sobre el precio de venta excluido el impuesto al valor agregado.

En el supuesto de no producirse la adhesión en el término señalado en el primer párrafo las provincias deberán reintegrar al gobierno nacional las sumas que hubieran percibido, a cuyo efecto el Poder Ejecutivo podrá efectuar las compensaciones con otros libramientos extendidos a favor de las respectivas provincias. Sobre dichos montos se aplicarán los párrafos 2º y 3º del artículo 16 de la ley 23.548.

Las provincias acordarán con la Subsecretaría de Hacienda mecanismos tendientes a regularizar los reclamos derivados de la aplicación de las disposiciones del último párrafo del artículo 2º de la ley 23.548 con relación a los excedentes que, desde el 1º de enero de 1988 y hasta el 31 de diciembre de 1990, se hubieran producido en la recaudación del impuesto establecido por la ley 17.597 y sus modificaciones, respecto de lo acreditado al Fondo de Combustible creado por dicha ley.

Artículo 22: Hasta el momento en que se produzca la adhesión por parte de las jurisdicciones comprendidas, los sujetos a que se refiere el artículo 3º del capítulo I podrán computar como pago a cuenta del impuesto sobre los combustibles líquidos, en las condiciones previstas en el presente artículo y con cumplimiento de los requisitos que establecerá la Dirección General Impositiva:

- a) Los importes que —como sujetos de derecho del impuesto a los ingresos brutos— acrediten haber abonado a los fiscos de cada una de las provincias y de la Capital Federal en exceso de las tasas referidas en el segundo párrafo del artículo 21 y que se hubieran devengado a partir de la vigencia del presente título;
- b) Los importes que los expendedores de sus respectivas marcas acrediten haber abonado a los fiscos de cada una de las provincias y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por impuestos devengados con posterioridad a la fecha de vigencia del presente título en exceso de las tasas referidas en el segundo párrafo del artículo 21 y siempre que los mencionados expendedores no hubieran trasladado su incidencia a los precios al público.

Los derechos a que se refiere el párrafo anterior podrán ser ejercidos dentro de los noventa (90) días contados desde el momento del pago.

Los montos que deban reconocerse como computables como pago a cuenta del impuesto serán deducidos de la participación que le corresponda a la provincia respectiva según lo previsto en el artículo 19.

Las direcciones generales de rentas de cada jurisdicción recibirán documentación detallada de los montos que les fueron deducidos y se reservarán el derecho de fiscalizar si en cada caso se reunieron los requisitos establecidos en el presente artículo.

CAPÍTULO V.

Otras disposiciones

Artículo 23: El producido de los recargos sobre el precio de venta de la electricidad establecidos por el inciso e) del artículo 30 de la ley 15.336 y el inciso b) del artículo 2º de la ley 17.574 se destinará al Tesoro nacional.

Todos los gastos que demande el funcionamiento del Consejo Federal de la Energía Eléctrica y la Administración del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) se atenderán con los recursos que fije a tales fines el Consejo Federal de la Energía Eléctrica destinándose para ello el uno por ciento (1 %) como máximo de los recursos totales anuales del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI).

Artículo 24: Excepto en relación a las normas que tengan previstas vigencias distintas lo dispuesto en el presente título regirá a partir del primer día del mes siguiente al de la publicación.

Artículo 25: Con relación a los fiscos contratantes y los contribuyentes, la Comisión Federal de Impuestos tendrá las funciones establecidas en el capítulo III de la ley 23.548.

Los fondos recaudados por aplicación del decreto 2.733/91, hasta la entrada en vigencia de la presente ley serán distribuidos conforme a lo establecido en el mismo.

TÍTULO IV

Modificaciones a la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda

Art. 8º — Modifícase la ley 21.581 y sus modificaciones en la forma que a continuación se indica:

1. Sustitúyese el artículo 2º por el siguiente:

Artículo 2º: El organismo de aplicación de la presente ley será la Subsecretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental asistida por el Consejo Federal creado para dicha finalidad.

Dicho Consejo será presidido por el titular de la Subsecretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental e integrado por:

- Un representante por cada uno de los organismos ejecutores provinciales y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
- Un representante del gremio de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina.
- Un representante de las Cámaras Empresarias de la Construcción de Viviendas e Infraestructura.

Este Consejo dictará su propio reglamento de funcionamiento y estará facultado para establecer las normas reglamentarias y aclaratorias que considere necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Fondo Nacional de la Vivienda.

2. Sustitúyese el inciso b) del artículo 3º por el siguiente:

b) El porcentual de la recaudación del impuesto sobre los combustibles líquidos y el

gas natural que se establece en la ley de creación de dicho impuesto.

3. Derógase el inciso c) del artículo 3º.

4. Sustitúyese el artículo 22 por el siguiente:

Artículo 22: El Instituto Nacional de Previsión Social tendrá a su cargo continuar con las gestiones de cobro de:

a) Los aportes que estableciera el inciso f) del artículo 2º de la ley 19.929 que se encontrasen pendientes de pago;

b) Las contribuciones que establecía, a cargo de empleadores del ámbito privado, el artículo 3º inciso b), y las que establecía el artículo 3º inciso c), en ambos casos según el texto vigente con anterioridad a la vigencia de la ley que reforma el presente artículo, y que se encontraran pendientes de pago a dicha fecha.

En relación a las contribuciones a cargo de empleadores del ámbito público, que establecía el mencionado artículo 3º inciso b) el Instituto Nacional de Previsión Social se limitará a informar al organismo de aplicación de la presente ley los antecedentes y estado de situación de las contribuciones adeudadas a la misma fecha, las que seguirán en la jurisdicción del Fondo Nacional de la Vivienda.

Para el cumplimiento de las gestiones a su cargo el Instituto Nacional de Previsión Social, podrá autorizar a entidades bancarias, públicas o privadas, para recibir sumas destinadas al pago de los aportes y contribuciones a que se refieren los incisos a) y b) del primer párrafo.

5. Sustitúyese en el segundo párrafo del artículo 24 la expresión "Dirección Nacional de Recaudación Previsional" por "Instituto Nacional de Previsión Social".

6. El régimen de financiamiento previsto en la presente para el Fondo Nacional de la Vivienda tendrá, para la parte que corresponda, una distribución automática entre los organismos ejecutores provinciales y deberá proporcionar al sistema, como mínimo, el equivalente a setenta millones de dólares estadounidenses (u\$s 70.000.000) por mes calendario. Para el caso que las percepciones fueran inferiores a esta cantidad, el Tesoro nacional deberá hacer los anticipos necesarios para mantener dicho nivel de financiamiento, los que serán compensados con excedentes posteriores si los hubiere.

7. Reemplázase en todo el texto de la ley la denominación "Secretaría de Estado de Desarrollo Urbano y Vivienda" por "Subsecretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental".

Art. 9º — Derógase el artículo 1º de la ley 23.060.

Art. 10. — Las disposiciones del presente título entrarán en vigencia a partir del mes siguiente al de su publicación.

TÍTULO V

Derogación de regímenes de jubilaciones especiales

Art. 11. — Deróganse a partir del 31 de diciembre de 1991 las siguientes disposiciones legales, con sus modifi-

catorias y complementarias: leyes 20.954, 19.083, 20.024, 18.464, 20.572, 21.124, 19.396, 21.121 (artículo 15), 19.173, 19.939, 16.989, 23.034, 22.929, 21.540, 23.794, 22.955, 22.731, 23.895 y 22.430 y los decretos 12.600/62; 667/79; 765/83; 1.044/83; 6.004/63 y 1.645/78. También se derogan a partir de la misma fecha los artículos relativos al régimen de retiro y pasividades de las leyes 19.101, 19.349, 18.398, 13.018, 20.957 y 21.965, sus modificatorios y complementarios.

También se derogan los artículos relativos al régimen de retiro y pasividades de las leyes 19.101, 19.349, 18.398, 13.018, 20.957 y 21.965, sus modificatorios y complementarios.

Queda asimismo derogada a partir del 31 de diciembre de 1991 toda otra norma legal que modifique los requisitos y/o condiciones establecidos por la ley 18.037 o el régimen previsional general vigente en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Déjase sin efecto a partir de la fecha de su promulgación el decreto 1.324/91.

Art. 12. — Créase una comisión bicameral que tendrá por objeto proponer un régimen general de jubilaciones y pensiones, la que deberá expedirse antes del 31 de diciembre de 1991.

Art. 13. — La comisión creada por el artículo precedente estará integrada por cinco miembros del Honorable Senado de la Nación y cinco de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Dichos miembros serán designados por los presidentes de cada cuerpo, con facultad para removerlos en caso de necesidad o vacancia, teniéndose especialmente en cuenta la profesionalidad o especialidad de los candidatos, así como la preservación de la representatividad de los respectivos bloques parlamentarios.

Dicha Comisión tendrá la facultad de darse su propio reglamento, elegir su presidente, establecer la periodicidad de sus reuniones y demás aspectos formales para llenar su cometido.

Art. 14. — La Comisión Bicameral deberá quedar integrada en un plazo no mayor de diez (10) días corridos, contados a partir del siguiente a la promulgación de la presente ley.

Art. 15. — Invítase a dictar normas del mismo carácter a los Estados provinciales.

TÍTULO VI

Impuesto sobre los bienes personales no incorporados al proceso económico

CAPÍTULO I

Disposiciones generales Hecho imponible - Vigencia

Art. 16. — Establécese con carácter de emergencia por el término de nueve (9) períodos fiscales a partir del 31 de diciembre de 1991, inclusive, un impuesto que se aplicará en todo el territorio de la Nación y que recaerá sobre los bienes personales no incorporados al proceso económico existentes al 31 de diciembre de cada año, situados en el país y en el exterior.

Sujetos

Art. 17. — Son sujetos pasivos del impuesto:

- Las personas físicas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo, por los bienes situados en el país y en el exterior.
- Las personas físicas domiciliadas en el exterior y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo, por los bienes situados en el país.

Las sucesiones indivisas son contribuyentes de este gravamen por los bienes que posean al 31 de diciembre de cada año, en tanto dicha fecha que de comprendida en el lapso transcurrido entre el fallecimiento del causante y la declaratoria de herederos o aquella en que se haya declarado válido el testamento que cumpla la misma finalidad.

A los fines de este artículo se considerará que están domiciliados en el país los agentes diplomáticos y consulares, el personal técnico y administrativo de las respectivas misiones y demás funcionarios públicos de la Nación y los que integran comisiones de las provincias y municipalidades que, en ejercicio de sus funciones, se encontraren en el exterior, así como sus familiares que los acompañaren.

Art. 18. — En el caso de patrimonios pertenecientes a los componentes de la sociedad conyugal, corresponderá atribuir al marido además de los bienes propios, la totalidad de los que revisten el carácter de gananciales, excepto:

- Que se trate de bienes adquiridos por la mujer con el producto del ejercicio de su profesión, oficio, empleo, comercio o industria;
- Que exista separación judicial de bienes;
- Que la administración de todos los bienes gananciales la tenga la mujer en virtud de una resolución judicial.

Bienes situados en el país

Art. 19. — Se consideran situados en el país:

- Los inmuebles ubicados en su territorio;
- Los derechos reales constituidos sobre bienes situados en él;
- Las naves y aeronaves de matrícula nacional;
- Los automotores patentados o registrados en su territorio;
- Los bienes muebles registrados en él;
- Los bienes muebles del hogar o de residencias transitorias, cuando el hogar o residencia estuvieran situados en su territorio;
- Los bienes personales del contribuyente, cuando éste tuviera su domicilio en él, o se encontrara en él;
- Los demás bienes muebles y semovientes que se encontraren en su territorio al 31 de diciembre de cada año, aunque su situación no revistiera carácter permanente, siempre que por este artículo no correspondiera otro tratamiento;
- El dinero y los depósitos en dinero que se hallaren en su territorio al 31 de diciembre de cada año;

- j) Los títulos, las acciones, cuotas o participaciones sociales y otros títulos valores representativos de capital social o equivalente, emitidos por entes públicos o privados, cuando éstos estuvieran domiciliados en él;
- k) Los patrimonios de empresas o explotaciones unipersonales ubicadas en él;
- l) Los créditos, incluidas las obligaciones negociables previstas en la ley 23.576 y los debentures —con excepción de los que cuenten con garantía real, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el inciso b)— cuando el domicilio real del deudor esté ubicado en su territorio.
- m) Los derechos de propiedad científica, literaria o artística, los de marcas de fábrica o de comercio y similares, las patentes, dibujos, modelos y diseños reservados y restantes de la propiedad industrial o inmaterial, así como los derivados de éstos y las licencias respectivas, cuando el titular del derecho o licencia, en su caso, estuviere domiciliado en el país al 31 de diciembre de cada año.

Bienes situados en el exterior

Art. 20. — Se entenderán como bienes situados en el exterior:

- a) Los bienes inmuebles situados fuera del territorio del país;
- b) Los derechos reales constituidos sobre bienes situados en el exterior;
- c) Las naves y aeronaves de matrícula extranjera;
- d) Los automotores patentados o registrados en el exterior;
- e) Los bienes muebles y los semovientes situados fuera del territorio del país.

Respecto de los retirados o transferidos del país por los sujetos mencionados en el inciso b) del artículo 17, se presumirá que no se encuentran situados en el país cuando hayan permanecido en el exterior por un lapso igual o superior a seis (6) meses en forma continuada con anterioridad al 31 de diciembre de cada año;

- f) Los títulos y acciones emitidos por entidades del exterior y las cuotas o participaciones sociales, incluidas las empresas unipersonales, y otros títulos valores representativos del capital social de entidades constituidas o ubicadas en el exterior.
- g) Los depósitos en instituciones bancarias del exterior. A estos efectos se entenderá como situados en el exterior a los depósitos que permanezcan por más de treinta (30) días en el mismo en el transcurso del año calendario. Para determinar el monto de tales depósitos deberá promediarse el saldo acreedor diario de cada una de las cuentas;
- h) Los debentures emitidos por entidades o sociedades domiciliadas en el exterior;
- i) Los créditos cuyos deudores se domicilien en el extranjero excepto que deban ser considerados como radicados en el país por aplicación del inciso b) de este artículo. Cuando los créditos respondan a saldos de precio por la transferencia a título oneroso de bienes situados en el país al

momento de la enajenación o sean consecuencia de actividades desarrolladas en el país, se entenderá que se encuentran con carácter permanente en el exterior cuando hayan permanecido allí más de seis (6) meses computados desde la fecha en que se hubieren hecho exigibles hasta el 31 de diciembre de cada año.

Exenciones

Art. 21. — Estarán exentos los siguientes bienes situados en el país:

- a) Los bienes pertenecientes a los miembros de las misiones diplomáticas y consulares extranjeras así como su personal administrativo y técnico familiares, en la medida y con las limitaciones que establezcan los convenios internacionales aplicables. En su defecto, la exención será procedente en la misma medida y limitaciones sólo en condición de reciprocidad;

Igual tratamiento será aplicable para miembros de las representaciones, agentes y en su caso, de sus familiares, que actúen en organismos internacionales de los que la Nación sea parte, en la medida y con las limitaciones que se establezcan en los convenios internacionales respectivos;

- b) Los títulos, bonos y demás títulos valores emitidos por la Nación, las provincias o municipalidades, cuando exista una ley general o especial que los declare exentos del presente o de todo gravamen;

Autorízase al Poder Ejecutivo para eximir de presente gravamen a los títulos, letras, bonos y demás títulos valores emitidos hasta la fecha que se emitan en el futuro por la Nación, las provincias y las municipalidades;

- c) Los depósitos en australes y en moneda extranjera efectuados en las instituciones comprendidas en el régimen de la ley 21.526 a plazo fijo en caja de ahorro, en cuentas especiales de ahorro o en otras formas de captación de fondos de acuerdo a lo que determine el Banco Central de la República Argentina;
- d) Las obligaciones negociables previstas en la ley N° 23.576 que sean colocadas por oferta pública;
- e) Los bienes amparados por las franquicias de la ley 19.640;
- f) Las acciones y participaciones en el capital de entidades sujetas al impuesto sobre los activos: incluidas las empresas y explotaciones unipersonales;
- g) Las cuotas partes de fondos comunes de inversión;
- h) Las acciones de cooperativas;
- i) Los inmuebles rurales a que se refiere el inciso e del artículo 2° de la ley 23.760 y sus modificaciones;
- j) Los bienes inmateriales (llaves, marcas, patentes, derechos de concesión y otros activos similares).

CAPÍTULO II

*Liquidación del gravamen
Valuación de los bienes situados en el país*

Art. 22. — Los bienes situados en país se valorarán conforme a:

a) Inmuebles:

1. Inmuebles adquiridos: al costo de adquisición o valor a la fecha de ingreso al patrimonio, se le aplicará el índice de actualización mencionado en el artículo 27 referido a la fecha de adquisición o de ingreso al patrimonio, que indique la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva para el mes de diciembre de cada año.
2. Inmuebles construidos: al valor del terreno determinado, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se le adicionará el costo de construcción, al que se le aplicará el índice de actualización al mencionado en el artículo 27 referido a la fecha de finalización de la construcción, que indique la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva para el mes de diciembre de cada año.
El costo de construcción se determinará actualizando mediante el citado índice, cada una de las sumas invertidas desde la fecha de cada inversión hasta la fecha de finalización de la construcción.
3. Obras en construcción: al valor del terreno determinado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1., se le adicionará el importe que resulte de actualizar cada una de las sumas invertidas, mediante el índice citado en los puntos anteriores, desde la fecha de cada inversión hasta el 31 de diciembre de cada año.
4. Mejoras: su valor se determinará de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 para las obras construidas o en construcción, según corresponda.

Cuando se trate de inmuebles con edificios, construcciones o mejoras, al valor atribuible a los mismos, determinado de acuerdo con los apartados 1, 2 y 4 se le detraerá el importe que resulte de aplicar a dicho valor el dos por ciento (2%) anual en concepto de amortización. A los efectos de la aplicación de lo dispuesto precedentemente, en el caso de inmuebles adquiridos, la proporción del valor actualizado atribuible al edificio, construcciones o mejoras, se establecerá teniendo en cuenta la relación existente entre el valor de dichos conceptos y el de la tierra según el avalúo fiscal vigente a la fecha de adquisición. En su defecto, el contribuyente deberá justipreciar la parte del valor de costo atribuible a cada uno de los conceptos mencionados.

El valor a computar para los inmuebles, de acuerdo con las disposiciones de este inciso, no podrá ser inferior al de la base imponible fijada al 31 de diciembre de cada año, a los efectos del pago de los impuestos inmobiliarios o tributos si-

milares. Este valor se tomará asimismo en los casos en que no resulte posible determinar el costo de adquisición o el valor a la fecha de ingreso al patrimonio.

De tratarse de los inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente o del causante en el caso de sucesiones indivisas, del valor determinado de conformidad a las disposiciones de este inciso podrá deducirse el importe adeudado al 31 de diciembre de cada año en concepto de créditos con garantía hipotecaria constituida sobre dichos inmuebles.

En los supuestos de cesión gratuita de la nuda propiedad con reserva del usufructo, el cedente deberá computar, cuando corresponda a los fines de este impuesto, el valor total del inmueble, determinado de acuerdo con las normas de este inciso. En los casos de cesión de la nuda propiedad de un inmueble por contrato oneroso con reserva de usufructo se considerarán titulares por mitades a los nudos propietarios y a los usufructuarios;

- b) Automotores, aeronaves, naves, yates y similares: al costo de adquisición o construcción o valor de ingreso al patrimonio, se le aplicará el índice de actualización mencionado en el artículo 27 referido a la fecha de la adquisición, construcción o de ingreso al patrimonio, que indique la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva. Al valor así obtenido se le restará el importe que resulte de aplicar el coeficiente anual de amortización que para cada tipo de bienes fije el reglamento o la Dirección General Impositiva, correspondiente a los años de vida útil transcurridos desde la fecha de adquisición, finalización de la construcción o de ingreso al patrimonio, hasta el año, inclusive, por el cual se liquida el gravamen.
En el caso de automotores, el valor a consignar no podrá ser inferior al que establezca la Dirección General Impositiva, al 31 de diciembre de cada año, con el asesoramiento de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro;
- c) Los depósitos y créditos en moneda extranjera y las existencias de la misma: de acuerdo con el último valor de cotización —tipo comprador— del Banco de la Nación Argentina al 31 de diciembre de cada año, incluyendo el importe de los intereses que se hubieran devengado a dicha fecha;
- d) Los depósitos y créditos en moneda argentina y las existencias de las mismas: por su valor al 31 de diciembre de cada año el que incluirá el importe de los intereses y de las actualizaciones legales, pactadas o fijadas judicialmente que se hubieran devengado a la fecha indicada;
- e) Objetos de arte, objetos para colección y antigüedades que se clasifican en el capítulo 99 de la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, objetos de adorno y uso personal y servicios de mesa en cuya confección se hubiera utilizado preponderantemente metales preciosos, perlas y/o piedras preciosas: por su valor de adquisición, construcción o ingreso al patrimonio, al que se le aplicará el índice de actualiza-

ción mencionado en el artículo 27 referido a la fecha de adquisición, construcción o de ingreso al patrimonio, que indique la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva para el mes de diciembre de cada año;

- f) Otros bienes no comprendidos en el inciso siguiente: por su costo de adquisición, construcción o valor a la fecha de ingreso al patrimonio actualizado por aplicación del índice mencionado en el artículo 27 referido a la fecha de adquisición, construcción o de ingreso al patrimonio que indique la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva para el mes de diciembre de cada año;
- g) Objetos personales y del hogar, con exclusión de los enunciados en el inciso e): por su valor de costo. El monto a consignar por los bienes comprendidos en este inciso no podrá ser inferior al que resulte de aplicar el cinco por ciento (5%) sobre la suma del valor total de los bienes gravados situados en el país y el valor de los inmuebles situados en el exterior.

Valuación de los bienes situados en el exterior

Art. 23. — Los bienes situados en el exterior se valorarán de la siguiente forma:

- a) Inmuebles, automotores, aeronaves, naves, yates y similares, bienes inmateriales y los demás bienes no incluidos en los incisos siguientes: a su valor de plaza en el exterior al 31 de diciembre de cada año;
- b) Los créditos, depósitos y existencia de moneda extranjera, incluidos los intereses de ajustes devengados al 31 de diciembre de cada año: a su valor a esa fecha;
- c) Los títulos valores que se coticen en bolsas o mercados del exterior: al último valor de cotización al 31 de diciembre de cada año.

Para la conversión a moneda nacional de los importes en moneda extranjera de los bienes que aluden los incisos anteriores se aplicará el valor de cotización, tipo comprador, del Banco de la Nación Argentina de la moneda extranjera de que se trate al último día hábil anterior al 31 de diciembre de cada año.

Mínimo exento

Art. 24. — No estarán alcanzados por el impuesto los sujetos indicados en el inciso a) del artículo 17 cuyos bienes, valuados de conformidad a lo dispuesto en los artículos 22 y 23 resulten iguales o inferiores a un mil millones de australes (₡ 1.000.000.000).

Alícuotas

Art. 25. — El gravamen a ingresar por los contribuyentes a que se alude en el artículo anterior, surgirá de la aplicación de la alícuota del uno por ciento (1%) sobre el valor total de los bienes sujetos al impuesto cuyo monto exceda del establecido en el artículo 24.

Los sujetos de este impuesto podrán computar como pago a cuenta las sumas efectivamente pagadas en el exterior por gravámenes similares al presente que consi-

deren como base imponible al patrimonio o los bienes en forma global. Este crédito sólo podrá computarse hasta el incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de los bienes situados con carácter permanente en el exterior.

Art. 26. — Los contribuyentes del impuesto sobre los activos, las sucesiones indivisas radicadas en el país y toda otra persona de existencia visible o ideal domiciliada en el país que tenga el condominio, posesión, uso, goce, disposición, depósito, tenencia, custodia, administración o guarda de bienes sujetos al impuesto que pertenezca a los sujetos mencionados en el inciso b) del artículo 17, deberán ingresar con carácter de pago único y definitivo por los respectivos bienes al 31 de diciembre de cada año, el uno por ciento (1%) del valor de dichos bienes, determinado con arreglo a las normas de la presente ley.

No corresponderá efectuar el ingreso establecido en este artículo cuando su importe resulte igual o inferior a dos millones quinientos mil australes (₡ 2.500.000).

Los responsables obligados al ingreso del gravamen tendrán derecho a reintegrarse el importe abonado, incluso reteniendo y/o ejecutando directamente los bienes que dieron origen al pago.

CAPÍTULO III

Otras disposiciones

Art. 27. — A los efectos de esta ley los índices de actualización deberán ser elaborados anualmente por la Dirección General Impositiva sobre la base de los datos relativos a la variación de índices de precios al por mayor, nivel general, que deberá suministrar el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

La tabla a que se refieren los incisos a), b), e) y f) del artículo 22 contendrá valores mensuales para los veinticuatro (24) meses inmediatos anteriores, valores trimestrales promedio —por trimestre calendario— desde el 1º de enero de 1975 y valores anuales promedios para los demás períodos y tomará como base el índice de precios correspondiente al mes para el cual se elabore la tabla.

Asimismo, la Dirección General Impositiva a partir del período fiscal 1992 actualizará anualmente, sobre la base de la variación experimentada en el índice mencionado en el primer párrafo del presente artículo durante el período fiscal a que se refiere la liquidación del gravamen, el importe previsto en los artículos 24 y 26.

Art. 28. — Facúltase a la Dirección General Impositiva a dictar las normas complementarias de información y percepción o retención del gravamen, que resulten necesarias para su aplicación e ingreso.

Art. 29. — La aplicación, percepción y fiscalización del presente gravamen estará a cargo de la Dirección General Impositiva y se regirá por las disposiciones de la ley 11.683 (texto ordenado en 1978 y sus modificaciones).

Art. 30. — El producido del impuesto establecido en la presente ley se distribuirá, conforme al siguiente régimen especial:

- a) El noventa por ciento (90%) para el financiamiento del régimen nacional de previsión social

que se depositará en la cuenta del Instituto Nacional de Previsión Social;

- b) El diez por ciento (10%) para ser distribuido entre las jurisdicciones provinciales y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a un prorrateador formado en función de la cantidad de beneficiarios de las cajas de previsión o de seguridad social de cada una de esas jurisdicciones al 31 de mayo de 1991. Los importes que surjan de dicho prorrateo serán girados directamente y en forma diaria a las respectivas cajas con afectación específica a los regímenes previsionales existentes. El prorrateo será efectuado por la Subsecretaría de Seguridad Social sobre la base de la información que le suministre la Comisión Federal de Impuestos.

Cuando existan cajas de previsión o de seguridad social en jurisdicciones municipales de las provincias, el importe a distribuir a las mismas se determinará en función a su número total de beneficiarios existentes al 31 de mayo de 1991, en relación con el total de beneficiarios de los regímenes previsionales nacionales, provinciales y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

El noventa por ciento (90%) del importe mencionado en el párrafo anterior se deducirá del monto a distribuir de conformidad al punto a) y el diez por ciento (10%) del determinado de acuerdo con el punto b). Los importes que surjan de esta distribución serán girados a las jurisdicciones provinciales, las que deberán distribuirlos en forma automática y quincenal a las respectivas cajas municipales.

TITULO VII

Destino de los recursos de privatizaciones

Art. 31. — Destínase al Régimen Nacional de Previsión Social el treinta por ciento (30%) de los recursos brutos que se obtengan de las privatizaciones realizadas conforme a los mecanismos de la ley 23.696 o normas especiales, ya sea por venta de activos, concesión, transferencia de bienes muebles, acciones o servicios, venta de inmuebles, tanto del Estado nacional como de las empresas del Estado y organismos descentralizados.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, se transferirán en propiedad al Instituto Nacional de Previsión Social, la totalidad de las acciones pertenecientes al Estado nacional de las sociedades licenciatarias Norte S.A. y Sur S.A. de los servicios de telecomunicaciones.

El adquirente, concesionario, licenciatario o socio, depositará directamente el referido porcentaje del precio, canon, derecho de asociación o contraprestación en una cuenta que a tal efecto abrirá la Subsecretaría de Seguridad Social en el Banco de la Nación Argentina.

Art. 32. — Deróganse a partir del 1º de enero de 1992 los convenios de corresponsabilidad gremial acordados por aplicación de la ley 20.155.

Asimismo se derogan los artículos referidos al régimen sustitutivo de aportes y contribuciones a la seguridad social de la ley 23.107.

Art. 33. — Derógase la ley 23.883.

TITULO VIII

Modificación de la ley de tasas judiciales

Art. 34. — Incorpórase al inciso f) del artículo 13 de la ley 23.898 lo siguiente:

...como, asimismo el Instituto Nacional de Previsión Social respecto de las actuaciones tendientes al cobro de aportes, contribuciones y demás obligaciones de la seguridad social.

Art. 35. — La presente exención tiene efecto desde la vigencia de la ley 23.898.

TITULO IX

Procedimiento tributario - Ley 11.683

Art. 36. — Modifícase la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, de la siguiente manera:

1. Modifícase el artículo 25 de la siguiente forma:

a) Incorpórase el siguiente inciso:

d'). En el caso que se comprueben operaciones marginales durante un período fiscalizado que puede ser inferior a un mes, el porcentaje que resulte de compararlas con las registradas, informadas, declaradas o facturadas conforme a las normas dictadas por la Dirección General Impositiva de ese mismo período, aplicado sobre las ventas de los últimos doce (12) meses que pueden no coincidir con el ejercicio comercial determinará sin admitir prueba en contrario diferencias de ventas que se considerarán en la misma forma que prescribe en sus dos últimos párrafos el inciso d) precedente para los meses involucrados.

De comprobarse operaciones marginales durante un ejercicio comercial la presunción se aplicará de igual modo sobre los períodos no prescritos;

b) Incorpórase a continuación del último párrafo, los siguientes:

También la Dirección General Impositiva podrá efectuar la determinación calculando las ventas o servicios realizados por el contribuyente o las utilidades en función de cualquier índice que pueda obtener, tales como el consumo de gas o energía eléctrica, adquisición de materias primas o envases, el pago de salarios, el monto de los servicios de transporte utilizados, el valor del total del activo propio o ajeno o de alguna parte del mismo. Este detalle es meramente enunciativo y su empleo podrá realizarse individualmente o utilizando diversos índices en forma combinada o aplicarse ya sea proyectando datos del mismo contribuyente de ejercicios anteriores o de terceros que desarrollen una actividad similar de forma de obtener los montos de ventas, servicios o utilidades proporcionales a los índices en cuestión.

La carencia de contabilidad o de comprobantes fehacientes de las operaciones hará nacer la presunción de que la determinación de los gravámenes efectuados por la Dirección General Impositiva en base a los índices señalados u otros que contengan esta ley o que sean técnicamente aceptables, es legal y correcta sin perjuicio del derecho del contri-

buyente o responsable a probar lo contrario. Esta probanza deberá fundarse en comprobantes fehacientes y concretos, careciendo de virtualidad toda apreciación o fundamentación de carácter general o basada en hechos generales. La probanza que aporte el contribuyente no hará decaer la determinación de la Dirección General Impositiva sino solamente en la justa medida de la prueba cuya carga corre por cuenta del mismo.

2. Incorpórase a continuación del último párrafo del artículo 40, el siguiente:

Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos precedentes, todas las personas o entidades que desarrollen algún tipo de actividad retribuida, que no sea en relación de dependencia, deberán llevar registraciones con los comprobantes que las respalden y emitir comprobantes por las prestaciones o enajenaciones que realicen, que permitan establecer clara y fehacientemente los gravámenes que deban tributar. La Dirección General Impositiva podrá limitar esta obligación en atención al pequeño tamaño económico y efectuar mayores o menores requerimientos en razón de la índole de la actividad o el servicio y la necesidad o conveniencia de individualizar a terceros.

3. Sustitúyese el artículo agregado a continuación del artículo 41 por el artículo 9º de la ley 23.314 por el siguiente:

Artículo : Los contribuyentes, responsables y terceros que efectúan registraciones mediante sistemas de computación de datos, deberán mantener en condiciones de operatividad, los soportes magnéticos utilizados en sus aplicaciones que incluyan datos vinculados con la materia imponible, por el término de dos (2) años contados a partir de la fecha del cierre del ejercicio en el cual se hubieran utilizado.

La Dirección General Impositiva podrá requerir a los contribuyentes, responsables y terceros:

- a) Copia de totalidad o parte de los soportes magnéticos aludidos, debiendo suministrar la Dirección General Impositiva los elementos materiales al efecto;
- b) Información o documentación relacionada con el equipamiento de computación utilizado y de las aplicaciones implantadas sobre características técnicas del hardware y software, ya sea que el procesamiento se desarrolle en equipos propios o arrendados o que el servicio sea prestado por un tercero.

Asimismo podrá requerir especificaciones acerca del sistema operativo y los lenguajes y/o utilitarios utilizados, así como también listados de programas, carpetas de sistemas, diseños de archivos y toda otra documentación o archivo inherentes al proceso de los datos que configuran los sistemas de información;

- c) La utilización, por parte de personal fiscalizador del organismo recaudador, de programas y utilitarios de aplicación en auditoría fiscal que posibiliten la obtención de datos instalados en el equipamiento informático del contribuyente y

que sean necesarios en los procedimientos de control a realizar.

Lo especificado en el presente artículo también será de aplicación a los servicios de computación que realicen tareas para terceros.

La Dirección General Impositiva dispondrá los datos que obligatoriamente deberán registrarse, la información inicial a presentar por parte de los responsables o terceros, y la forma y plazos en que deberán cumplimentarse las obligaciones dispuestas en el presente artículo.

4. Incorpórase a continuación del segundo artículo agregado a continuación del artículo 44 por la ley 23.314, el siguiente:

Artículo . . . En los casos en que no se emita factura o documento equivalente de las ventas, locaciones o prestaciones de servicios, o de emitirse no fueran los habitualmente utilizados por el responsable para el cumplimiento de sus obligaciones respecto del impuesto al valor agregado, y siempre que el acta de comprobación respectiva esté asimismo suscrita en forma voluntaria por el adquirente, locatario o prestatario, debidamente identificado, el funcionario interviniente procederá, en ese mismo acto, a la clausura del o los establecimientos comerciales, industriales, agropecuarios o de servicios en los que se hubiera producido la omisión.

Dicha clausura será de tres (3) a diez (10) días corridos, y deberá ordenarse en el acta que se labre donde constarán los hechos que configuren la comisión de las conductas mencionadas en el primer párrafo y podrán agregarse los datos, constancias, o comprobantes que correspondan.

En el supuesto previsto en el presente artículo, la apelación prevista en el artículo incorporado a continuación del artículo 78 se otorgará, en todos los casos, al solo efecto devolutivo, no siendo de aplicación lo establecido en el último párrafo del citado artículo en lo que hace al otorgamiento de efecto suspensivo al recurso.

5. Incorpórase al artículo 69 el siguiente inciso:

- d) Por la notificación de la vista en el caso de determinación prevista en el artículo 24, cuando se haya dispuesto la aplicación de las normas del capítulo incorporado a continuación del capítulo XIII por la ley 23.905. La interrupción alcanzará a los períodos no prescritos a la fecha de la vista referida.

Art. 37. — Las disposiciones de este Título regirán a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 38. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración en particular. Título I, artículos 1º a 4º.

Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Todo el título I, que comprende los artículos 1º, 2º, 3º y 4º, es exactamente igual.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Gass. — Señor presidente: que quede constancia de que la bancada radical votó en contra.

— Se enuncia el título II, artículos 5° y 6°.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Todo el título II; para hacer más rápida y fácil la votación, que comprende los artículos 5° y 6°, solamente se modifica en donde dice "Instituto Nacional de Previsión Social" por "Subsecretaría de Seguridad Social".

Sr. Trilla. — ¿Cuál es la razón?

Sr. Ludueña. — ¿La razón de qué?

Sr. Brañesco. — La razón de mi vida...

Sr. Gass. — No existe más la Subsecretaría.

Sr. Trilla. — No, no existe más el Instituto.

Sr. Rodríguez Saá. — Es verdad, no se modifica nada. Me equivoqué yo. Queda como está.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Posleman. — En el apartado 1, en el último párrafo, donde dice "Facúltase al Poder Ejecutivo para reducir con carácter general las alícuotas establecidas en los párrafos anteriores en hasta seis (6) puntos porcentuales conforme a las previsiones de la ley 23.548", solicito que se agregue luego de un punto y seguido: "En caso de hacer uso de esta facultad de disminuir la alícuota no regirá lo establecido en el apartado segundo".

En el apartado segundo propondré un nuevo texto. Después de donde dice: "El producido del impuesto establecido en la presente ley, se destinará"; continuar de la siguiente manera: "a) El once por ciento (11%) al Régimen de Previsión Social, en las siguientes condiciones: Su distribución entre Nación y el conjunto de provincias será, haciendo uso de la excepción del inciso b) del artículo 2° de la ley 23.548, conforme a la cantidad de beneficiarios de las cajas de previsión o seguridad social al 30 de junio de 1991 que tuvieran la Nación y sus distritos federales, por una parte y el conjunto de provincias y sus municipios, por la otra. El índice distribuidor será renovado el 1° de enero de cada año impar, sobre la base de los datos al 30 de junio de cada año par inmediato anterior. La determinación de los in-

lices estará a cargo de la Comisión Federal de Impuestos".

El párrafo b) sería el siguiente: "El 89 por ciento se distribuirá de conformidad al régimen establecido por la ley 23.548". Esto es consecuente, para no abundar en detalles, con lo que expresé en el momento de la consideración en general, de que se debe repartir conforme a la cantidad de afiliados que tengan los sistemas, ya sean nacionales o provinciales.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — En coincidencia con el bloque radical, no vamos a dar lugar al pedido formulado y consideramos que la facultad amplia que tiene el proyecto es más conveniente.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Este es el título II, de acuerdo con el proyecto expuesto en su oportunidad, que íbamos a aprobar porque significaba el mayor aporte para el aumento de 300 mil australes que se quiere efectuar a los jubilados. Este fue estudiado en forma consistente en su integridad.

Si hubiéramos tenido a tiempo la propuesta que ha formulado el señor senador por San Juan, seguramente hubiéramos buscado la posibilidad de discutirla, pero a esta altura de la noche y de los grandes debates que hemos tenido a este respecto, estamos de acuerdo con el texto tal como está redactado porque entendemos que tiene consistencia y da solución legislativa.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el título II, artículos 5° y 6° en la forma propuesta.

— La votación resulta afirmativa.

— Se enuncia el título III, artículo 7°.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Este título sí tiene varias modificaciones. Si quieren las puedo enumerar en forma aproximada para que tengan una referencia.

Sr. Genoud. — Nosotros proponemos una modificación al artículo 19.

Sr. Trilla. — ¿Me permite, señor presidente?

Sr. Presidente (Menem). — Para ubicarnos exactamente en el proyecto y en la modificación, lo que la Presidencia pone a consideración es el título III, artículo 7°, que comprende desde el capítulo I hasta el capítulo V y que termina en el artículo 25.

Sr. Trilla. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Hemos dicho que globalmente, vamos a votar por la negativa en todos estos artículos hasta el 26, con relación al proyecto que viene de la Cámara de Diputados.

Frente a la propuesta que va a hacer la bancada justicialista, mayoritaria, que en consecuencia será aprobada, nos parece bien que se vayan leyendo las modificaciones artículo por artículo porque es posible que algunos de los senadores de nuestra bancada pretendan realizar alguna otra propuesta de modificación.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis, para que formule las aclaraciones respecto de las modificaciones que se incorporan.

Sr. Rodríguez Saá. — Los cambios propuestos son varios y podrían ser clasificados de la siguiente manera.

En los artículos 1º y 2º se mejora la definición del hecho imponible.

Sr. Trilla. — Disculpeme, señor presidente, pero el título III tiene un solo artículo que es el 7º y luego hay una serie de incisos que modifican parte de la ley anterior de combustibles. Entonces, se modifican los parciales...

Sr. Rodríguez Saá. — Lo que usted denomina incisos yo los llamo artículos.

Sr. Trilla. — Pero no son artículos de este proyecto sino que en el originario...

Sr. Rodríguez Saá. — En el texto que ahora proponemos, modificamos los artículos 1º y 2º del capítulo I, título III, para mejorar la definición del hecho imponible. Lo hemos logrado.

Se modifican los artículos 3º, 14 y 16, con el fin de restringir el número de sujetos pasivos, de manera de facilitar el control.

Se cambian los artículos 4º, 6º y 9º, para otorgar mayor flexibilidad al Departamento Ejecutivo con miras al desarrollo de las políticas energéticas.

Sr. Storani. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Las aclaraciones se harán en el momento oportuno. Mientras tanto, continúa en el uso de la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Se propone modificar el artículo 7º de la sanción de la Cámara de Diputados, restringiendo las exenciones para evitar maniobras fraudulentas.

Se mejora la redacción de los artículos 22 y 23 y se agrega el artículo 25, que es el artículo 26 que figura en el proyecto enviado por la Cámara

de Diputados. Eso hay que agregarlo porque no figura en el texto que ustedes tienen. Repito: se agrega como artículo 25 el texto que figura como artículo 26 en el proyecto originario. Cuando se menciona "decreto 2.733/91", debe decir "2.733/90".

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Storani. — Quiero sugerir al miembro informante de la mayoría que se fije en el inciso b) del artículo 3º del capítulo I correspondiente al título III del proyecto que estamos tratando, que dice: "Son sujetos pasivos del impuesto: ... b) las empresas que refinan, elaboren o importen los productos que se detallan en el artículo 4º".

Quiero señalar que en esta modificación a la sanción de Diputados se plantea una diferencia sustancial porque, en el último término, estaban figurando las empresas que comercializaban combustibles en el país, que eran pasibles del impuesto. Es una diferencia sustancial porque en este artículo modificado se excluye a dos empresas privadas de capital nacional que son Astra y Compañía General de Combustibles, que no tienen refinería pero que comercializan productos, que no importan y que para poder integrarlas al sujeto pasivo deberían ser importadoras.

Esto es un absurdo porque la primitiva sanción de la Cámara de Diputados las integraba a las posibilidades del desarrollo futuro de las industrias petroleras del país. Mientras tanto, de esta forma los únicos destinatarios son los monopolios, que se transforman en oligopolios de capitales extranjeros que importan productos.

Propongo la modificación de esta redacción que ha propuesto el señor senador por San Luis en nombre del bloque justicialista, por la sanción primitiva de la Cámara de Diputados; que no se modifique el inciso b), teniendo en cuenta que preservamos el desarrollo de la industria nacional en empresas de capitales privados. He dado nombres específicos, porque las dos excluidas son, reitero, Astra S.A. y Compañía General de Combustibles.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Posleman. — Señor presidente: dado que ha sido expresado con precisión el planteo formulado por el señor senador por Córdoba, voy a manifestar mi respaldo diciendo muy brevemente que este cambio que se pretende introducir está modificando reglas de juego muy importantes para estas empresas que hoy actúan como sujetos pasivos del impuesto y que tienen

plantas distribuidoras mayoristas — diríamos así; no simplemente expendedoras de combustibles, sino mayoristas — con una cadena de servicios propios y que de esta manera quedarían disminuidas en su posibilidad de ofrecer en el mercado una mayor competencia y transparencia en cuanto a la vigencia de precios en la comercialización de combustibles, que es uno de los objetivos que ha fijado el gobierno con la desregulación del sector.

Sr. Storani. — Se trata del inciso b) del artículo 3º de la sanción de la Cámara de Diputados.

Entonces, propongo que se vote específicamente este inciso del artículo 3º, volviendo así a la redacción de la sanción de la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: entiendo que la cuestión no es tan así como la plantean los señores senadores, porque precisamente se ha tratado de eliminar a los sujetos pasivos para facilitar el control.

Sr. Storani. — Entonces elimine a las empresas nacionales, señor!

Aquí se tiende a la eliminación de las empresas nacionales de capital privado con las que, por supuesto, no tengo nada que ver — toda mi vida he defendido a YPF — para darle el monopolio a dos empresas extranjeras muy conocidas que no quiero mencionar.

La sanción de la Cámara de Diputados es correcta en este aspecto porque las empresas que además de refinar comercializaban se encuentran con que el término "comercialización" se ha eliminado, agregándose el de "importación", lo que obliga a que aquellas empresas nacionales que no importan petróleo queden fuera del mercado.

A mi juicio, reitero, es correcta la sanción que dio la Cámara de Diputados de la Nación por lo que propongo, señor presidente, — y hago moción en tal sentido — que se vuelva a la redacción del inciso b) de la sanción de la Cámara de Diputados.

Sr. Rodríguez Saá. — ¿El señor senador por Córdoba podría leer el respectivo texto de la Cámara de Diputados?

Sr. Storani. — Se trata del inciso b) del artículo 3º.

Sr. Posleman. — Se refiere a que en el caso de los incisos b) y c) del artículo 2º los titulares de las plantas de refinación o plantas de almacena-

miento habilitadas como depósito fiscal son sujetos pasivos del impuesto. Aquí lo que se ha eliminado son las plantas de almacenamiento habilitadas como depósito fiscal de estas empresas que tienen su propia cadena de distribución de combustibles.

Sr. Storani. — Son las dos que yo mencionaba.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Nosotros insistimos en la modificación porque lo que estamos buscando es la restricción de los sujetos pasivos de manera de facilitar el control, como hemos dicho. Eliminada la etapa de comercialización, lo mismo se pagan impuestos porque en este caso son los productos los que aparecen pagándolos, por lo cual, entendemos que igualmente se produce el hecho imponible. Por ello insistimos en la modificación.

Sr. Storani. — Dejo expresa constancia, señor presidente, de que esto implica lisa y llanamente volver cincuenta años atrás; es entregar la comercialización de los productos derivados del petróleo a las empresas extranjeras que en este caso conforman no un monopolio sino un oligopolio.

Sr. Rodríguez Saá. — Nosotros insistimos en nuestra postura.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar el artículo...

Sr. Storani. — Quiero dejar debidamente aclarado que no estoy improvisando. He estado al frente de la Secretaría de Energía en dos oportunidades, de modo tal que conozco este tema. Perdonen la inmodestia de decirlo. Pero señalo el hecho concreto de que aquí se elimina del mercado a dos empresas privadas.

Sr. Rodríguez Saá. — No se eliminan del mercado.

Sr. Storani. — Sí, porque a la postre quedarán excluidas. Ese será el final. El artículo no las elimina, pero en la práctica sucederá eso.

Sr. Rodríguez Saá. — Yo entiendo que se elimina a la empresa del hecho imponible: es decir, que no paga impuesto. No sé qué entiende usted por eliminar.

Sr. Storani. — La sanción de Diputados en el inciso b) del artículo 3º, dice: "En el caso de los incisos b) y c) del artículo 2º, los titulares de las plantas de refinación o plantas de almacenamiento habilitadas como depósito fiscal". Este es el caso de las dos empresas privadas de capitales argentinos que he mencionado, puesto que tienen plantas de almacenamiento de grandes dimensiones, como depósito fiscal. Quedan eli-

minadas de hecho frente a las dos grandes empresas extranjeras que tienen refinerías y que manejan el gran mercado, aunque han estado cediendo en el último tiempo frente al avance de las empresas privadas argentinas, no de YPF, que también ha estado cediendo mercados en otros casos.

Sr. Presidente (Menem). — La Presidencia entiende que ya se han fijado las posiciones y que debe procederse a la votación.

Sr. Rodríguez Saá. — Que se vote en forma completa el Título III, artículo 7°. Hay una modificación que se quiere introducir sobre...

Sra. Gurdulich de Correa. — Hay varias modificaciones.

Sr. Trilla. — ¿Me permite, señor presidente?

Sr. Presidente (Menem). — Está en el uso de la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Brasesco. — ¿Está en uso de la palabra para la Cámara?

Sr. Trilla. — Está efectuando consultas. Es un asunto muy difícil.

Sr. Presidente (Menem). — Corresponde votar artículo por artículo, pero dentro de cada uno se pueden proponer las modificaciones que se estimen pertinentes.

Sr. Trilla. — ¿Me permite, señor presidente? Quiero hacer una aclaración.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Si bien estoy convencido de que los señores senadores conocen el tema, quiero aclarar que el artículo que corresponde al proyecto que estamos votando es el 7°. Tenemos que definir si lo votamos global o parcialmente, porque cada acápite se refiere a una ley de origen del sistema impositivo. ¿Está claro? ¿Me estoy explicando bien?

Sr. Presidente (Menem). — Está claro. Ahora bien, que se considere globalmente no obsta para que a ese artículo, así considerado, se le propongan las modificaciones que anticipó el señor senador por San Luis. Es decir, se lo vota globalmente pero con las modificaciones que se puedan proponer.

Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: para facilitar la votación propongo que se vote el artículo 7° y cada uno de sus incisos —que en el texto son llamados artículos— en forma separada, de modo que a cada uno se le pueda proponer las modificaciones correspondientes.

Sr. Presidente (Menem). — No corresponde votar de esa manera. Se va a votar artículo por

artículo y si se quieren proponer modificaciones, corresponderá indicirlas con referencia a cada una de sus partes.

Sr. Trilla. — Entiendo que hay un error, señor presidente.

Sr. Presidente (Menem). — Es correcta la forma que ha sido propuesta.

Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

Sr. Mac Karthy. — En el Título III, artículo 7°, en la parte correspondiente al artículo 9°, referido a gas natural, propongo que el primer párrafo quede redactado así: "Establécese en todo el territorio de la Nación un impuesto sobre el gas natural distribuido por redes, para uso residencial y del comercio y los servicios, excepto el destinado a industrias, a gas natural comprimido y usinas eléctricas de servicio público". Se continúa luego con el texto tal cual está. Es decir, se agregan las palabras "a industrias" para que no haya dudas de que están exceptuadas.

Sr. Rodríguez Saá. — Aceptamos esa modificación.

Sr. Mac Karthy. — Además, en el mismo Título III, artículo 7°, en la parte correspondiente al artículo 14, propongo que se agregue un nuevo párrafo a continuación del primero, con el siguiente texto: "Las empresas refinadoras de petróleo cuya actividad principal es la obtención de solventes y aguarrás podrán deducir del conjunto de sus obligaciones por este impuesto —en su propia liquidación o en la de otros sujetos comprendidos en el artículo 3°, inciso b)— un importe equivalente al sesenta por ciento (60%) del impuesto que corresponda sobre dichos productos por cada unidad de volumen exportada, durante los seis (6) primeros años, cesando la deducción al cumplirse este plazo. Las empresas comprendidas en este párrafo deberán destinar a la complementación y/o remodelación de sus instalaciones de elaboración los importes resultantes, debiendo la Subsecretaría de Combustibles verificar la correcta utilización de los fondos". Luego debe continuar el resto de este artículo tal cual figura en el despacho de nuestro bloque.

Sr. Presidente (Menem). — ¿Se aceptan ambas modificaciones, señor miembro informante?

Sr. Rodríguez Saá. — Sí, señor presidente; aceptamos ambas modificaciones, las que fueron concertadas entre el bloque justicialista y el señor ministro de Economía.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra la señora senadora por Tucumán.

Sra. Rivas. — En este Título III, artículo 7º, en la parte correspondiente al artículo 4º, en su último párrafo, nuestro despacho dice: "Asimismo, para el caso de lasalconaftas, se faculta al Poder Ejecutivo para considerar total o parcialmente satisfecho el impuesto con el pago del gravamen sobre el componente nafta". Propongo que en lugar de lo que acabo de leer se mantenga la redacción aprobada por la Cámara de Diputados en la parte a que me estoy refiriendo, que dice: "En lasalconaftas el impuesto estará totalmente satisfecho con el pago del gravamen sobre el componente nafta".

Sr. Rodríguez Saá. — Esta modificación ya ha sido introducida, según fue acordado con el señor ministro de Economía.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Storani. — La nómina de los productos y de los impuestos por litro que se enumeran en el artículo 4º contenido en el artículo 7º de este Título III, incluye desde nafta sin plomo en el inciso a) hasta aguarrás, en el inciso k), figurando el gas-oil con tan sólo 614 australes de gravamen por litro.

Esto constituye un subsidio directo en detrimento del resto de los combustibles y del desarrollo del uso racional de la energía y los factores ecológicos con que quisimos preservar la optimización del gas natural comprimido en sustitución de determinados combustibles líquidos que además de producir una fuerte polución, son dañinos desde todo punto de vista.

El gas-oil se utiliza fundamentalmente en el agro y también en el transporte automotor urbano y de larga distancia. En el caso del agro es un subsidio excesivo, por cuanto al agro ya le han eliminado las retenciones a las exportaciones.

¿Quiénes subsidian este precio del gas-oil? Los usuarios de motonaftas y de los otros combustibles, que tienen gravámenes muy superiores.

Y hay un caso especial que quiero destacar. Me refiero a los vehículos automotores de uso particular, a los automóviles comunes con motores que utilizan gas-oil, que se benefician también con este subsidio que hacen los usuarios de los otros combustibles. En este caso, estos usuarios deberán ser gravados a través de una patente muy superior, como ocurre en otros países del mundo, por ejemplo Italia. En esta nación los usuarios de automóviles particulares cuyos motores utilizan gas-oil deben pagar una patente

proporcionalmente superior, que los equipara con los usuarios de motonaftas.

Por estas razones propongo que se revise el monto del impuesto que grava el litro de gas-oil a fin de hacerlo más equitativo, vinculándolo directamente con el precio que tienen las motonaftas. De esta manera se va a incentivar el mayor consumo del gas natural comprimido que, en caso contrario, está condenado a desaparecer cuando es la ecuación energética más favorable que la Argentina ha desarrollado y bastante rápidamente, aunque no todo lo rápido que habría sido posible.

En síntesis, propongo la modificación del gravamen al gas-oil que figura en el artículo 4º del título correspondiente al impuesto sobre combustibles líquidos y gas natural.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: no vamos a aceptar la modificación propuesta.

En cuanto al gas-oil, ha sido subsidiado en forma estructural en la economía argentina desde siempre. Tal vez la diferencia ahora sea mayor o menor que en otra época.

Sr. Storani. — Muchísimo mayor.

Sr. Rodríguez Saá. — Está bien, señor senador: tal vez sea mayor. Pero no aceptamos la modificación porque también han formulado la misma crítica otros señores senadores, y de la exposición del señor ministro surge que el gravamen es justo y suficiente.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Posleman. — Señor presidente: la forma de tratamiento global del título me obliga a hacer todas las observaciones juntas.

En los artículos 5º, 6º y 13 del proyecto se cambia la metodología y se otorga al Ministerio de Economía la facultad de aumentar o disminuir los montos del impuesto a liquidar de acuerdo con las pautas que en esos mismos artículos se establecen.

Entiendo, señor presidente, que la delegación de facultades debe ser restrictiva en el caso de que la Cámara haga uso de la atribución de delegar.

En este caso voy a sostener lo que estaba planteado en el proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados, que establecía que era el Poder Ejecutivo nacional el que tenía las facultades mencionadas en los artículos 5º y 6º, y también en el artículo 13, que es el que establece la remisión a los otros.

Con respecto al anterior artículo 24, que ahora es el 23 —me refiero al dictamen que estamos considerando— propongo que en la última parte del primer párrafo, en lugar de "...se destinará al Tesoro nacional", se diga: "...se distribuirá conforme a la ley 23.548", que es la de coparticipación federal. Esto es consecuente con lo que fundé en el momento de la consideración en general. Se trata de un impuesto a la energía eléctrica; por definición corresponde que sea coparticipable, y en este caso debe ser distribuido conforme a la ley de coparticipación.

Esta disposición ratifica, sin nombrarlas, las disposiciones del decreto 2.733/90 que, como ya expresamos, es anticonstitucional.

Con respecto al ex artículo 26, que ahora queda como 25, establece en el último párrafo que "los fondos recaudados por aplicación del decreto 2.733/91 —que el señor miembro informante aclaró que debía leerse 2.733/90—, hasta la entrada en vigencia de la presente ley, serán distribuidos conforme a lo establecido en el mismo". Este decreto es abiertamente violatorio de la ley de coparticipación vial y de la ley de coparticipación de impuestos nacionales.

En definitiva, señor presidente, propongo que los fondos recaudados entre el 1º de enero de 1991 hasta la vigencia de la presente ley sean distribuidos conforme a la ley 23.548, es decir, que se les dé a las provincias lo que les corresponde.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Marín. — No aceptamos la modificación propuesta por el colega, particularmente en la mención que hace hincapié en que tendría que resolverse por decreto del Poder Ejecutivo y no por resolución del Ministerio de Economía.

Consideramos que en principio el Ministerio de Economía no resuelve *per se* dado que depende del Poder Ejecutivo, pero en sí daría mayor celeridad a las resoluciones que se adopten, motivo por el cual creemos que no deben modificarse los artículos en la forma solicitada. En cuanto al planteo de inconstitucionalidad, creemos que es un problema de interpretación. Entendemos que la norma es constitucional.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: adhiero a las modificaciones propuestas por el señor senador por San Juan a los artículos 23 y 25.

Además, solicito la inclusión de un párrafo al final del artículo 19, que contiene un principio que expuse durante la discusión en general. Este principio establece un reconocimiento por parte del Tesoro nacional de un 10 por ciento de lo que ha percibido por los derechos de asociación y explotación en la venta de las áreas secundarias y principales. El texto obra en Secretaría.

Sr. Mazzucco. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Primero tiene que expedirse el miembro informante en cuanto a si acepta o rechaza las modificaciones propuestas.

Sr. Rodríguez Saá. — No vamos a aceptar las propuestas del señor senador por San Juan ni las del señor senador por Mendoza por las razones dadas por el señor senador por La Pampa.

Sr. Genoud. — Quiero completar mi propuesta sobre el artículo 19, que se refiere a la distribución del producido del impuesto a los combustibles en un 47 por ciento para el Tesoro nacional, un 13 por ciento para las provincias y un 40 por ciento para el FONAVI. La inclusión que propongo establece que el 6 por ciento de lo que le corresponde al Tesoro nacional deberá destinarse al pago a las provincias que tienen en sus territorios yacimientos que hayan sido vendidos, tanto en áreas secundarias como principales, fijándose el monto de lo que se debe pagar en un 10 por ciento de lo que la Nación percibió por derecho de explotación o de asociación.

Como ya expresé, el texto obra en Secretaría. Cualquier senador puede solicitar su lectura.

Sr. Mac Karthy. — Se trata del artículo 18.

Sr. Genoud. — Efectivamente. Yo me estaba refiriendo al artículo 19 de la sanción de Diputados, que corresponde al artículo 18 del texto que ha sido tomado como base para esta votación.

Por otra parte, señor presidente, solicitamos que se adopte como texto del artículo 21 del dictamen que se está tomando como base, el artículo 22 de la sanción de Diputados, que se refiere a la limitación de gravar hasta el 1 por ciento la producción petrolera. Con la modificación propuesta por el ministro se quita a las provincias productoras la posibilidad de gravar hasta el 1 por ciento la producción, limitándose esta facultad exclusivamente a la comercialización e industrialización.

Sr. Presidente (Menem). — ¿Acepta el señor miembro informante la modificación propuesta?

Sr. Rodríguez Saá. — No, señor presidente.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Samudio Godoy. — Señor presidente: deseo referirme al inciso c) del artículo 19, que establece que: "El diez por ciento (10%) restante será destinado al Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI), que será administrado por el Consejo Federal de Energía Eléctrica y se aplicará para lo establecido en el artículo 33 de la ley 15.336". Propongo que se agregue luego del punto la siguiente oración: "El Consejo Federal distribuirá los fondos en función a los índices repartidores vigentes o a los que ese Consejo Federal determine en el futuro". El propósito de este agregado es mantener el sistema actual, en el cual el Estado federal distribuye los fondos. Si no se agregara este párrafo después de punto seguido quedaría que el Consejo Federal no va a poder determinar la distribución de los fondos como venía haciéndolo hasta el presente.

Sr. Rodríguez Saá. — Exacto.

Sr. Presidente (Menem). — La Presidencia ruega al señor senador por Formosa que haga llegar a Secretaría el agregado propuesto.

Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Mazzucco. — Este texto fue presentado ayer en la reunión de presidentes de bloque y acordado con el ministro de Economía. Apoyamos la propuesta.

Sr. Presidente (Menem). — ¿A qué texto se refiere?

Sr. Mazzucco. — Repito que fue acordado ayer en la reunión de presidentes de bloque con el señor ministro de Economía.

Sr. Presidente (Menem). — La Presidencia ruega al señor senador por Río Negro que lea el texto.

Sr. Mazzucco. — Es exactamente el que acaba de leer el señor senador por Formosa.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Aceptamos la modificación.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba.

Sr. Storani. — Señor presidente: el artículo 18 de la sanción de la Cámara de Diputados deroga varias leyes, como la 17.597 y sus modificatorias, y la ley 23.549, que gravaba el pulso telefónico en un 17 por ciento, cuyo destino era el sistema de seguridad. Esta derogación me parece ociosa porque el porcentaje ha sido bajado al 0,1 por ciento. Propongo que se restituya el 17 por ciento porque ésta ha sido una donación graciosa

que hizo la intervención de ENTel, tal cual lo ha señalado esta tarde el señor senador por San Luis, Oraldo Britos.

La ley 23.549 gravaba el pulso telefónico en un 17 por ciento y esta cifra ha sido disminuida al 0,1 por ciento. Esto significa lisa y llanamente la disminución del aporte de aproximadamente 240 millones de dólares al año para el sistema previsional.

Propongo entonces que se mantenga la vigencia de otras leyes que gravan el petróleo, por ejemplo, valor FOB, con el 5 por ciento para el fondo de grandes obras eléctricas, y se restituya la ley 23.549 en lo que hace a los pulsos telefónicos.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: el señor senador Britos ha mostrado, como miembro de nuestro bloque, una pública preocupación por el problema. Pero entendemos que este tema debe tratarse en otra ley y sobre todo con la participación de la Comisión Bicameral que controla las privatizaciones.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7º con las modificaciones que fueron anticipadas y aprobadas expresamente por el señor miembro informante.

Sr. Storani. — Antes de votar le pido al señor senador por San Luis que lea lo que enunció como artículo 25, ex 26 de la sanción de la Cámara de Diputados, porque no tengo el texto.

Sra. Gurdulich de Correa. — No se encuentra en el texto.

Sr. Rodríguez Saá. — Hay que recurrir a la sanción de la Cámara de Diputados.

Sr. Storani. — En ese caso, formulo moción concreta de suprimir el párrafo final del artículo 26 de la sanción de la Cámara de Diputados —que pasaba a ser 25, según el senador Rodríguez Saá—: "Con relación a los fiscos contratantes y los contribuyentes, la Comisión Federal de Impuestos tendrá las funciones establecidas en el capítulo III de la ley 23.548.

"Los fondos recaudados por aplicación del decreto 2.733/91, hasta la entrada en vigencia de la presente ley serán distribuidos conforme a lo establecido en el mismo". Propongo la supresión del párrafo que comienza con: "Los fondos recaudados por aplicación del decreto 2.733/91", porque esto viene a ser la convalidación del decreto 2.733, que es absolutamente inconstitucional y que viola varias leyes que esta ley pretende ahora convalidar con la sanción de esta

parte del párrafo del artículo 26. Por lo tanto hago moción concreta por la supresión de ese párrafo.

Sr. Rodríguez Saá. — No aceptamos la modificación.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar el artículo 7º con las modificaciones propuestas por el miembro informante.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Storani. — No me ha contestado, señor senador.

Sr. Presidente (Menem). — El señor senador ha contestado que no acepta.

Sr. Storani. — Como fue tan cordial el comienzo de este debate supuse que quizás alguna modificación iba a ser aceptada. De cinco modificaciones propuestas no logré convencerlos para que aceptaran alguna.

Sr. Rodríguez Saá. — Va a seguir siendo cordial.

Sr. Storani. — Muy cordial, pero con el mazo dando. (*Risas.*)

Sr. Rodríguez Saá. — Amablemente.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Pido a la Presidencia que se deje constancia de la votación negativa del bloque radical, en razón de los argumentos dados al explicar el dictamen en minoría al principio de esta sesión.

Sr. Presidente (Menem). — De todas las posiciones se toma nota taquigráfica; así queda expresada la posición, señor senador.

Sr. Gass. — Pero de la votación no.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración el artículo 8º del título IV.

Sr. Vaca. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Vaca. — Voy a proponer una modificación al texto del artículo 8º. Como señalaran anteriormente algunos señores senadores nosotros tuvimos oportunidad de analizar este artículo con los integrantes del Consejo Federal de la Vivienda. Deseamos plantear un par de proposiciones que se formularon. Una de ellas es la aspiración de los miembros del Consejo Federal de la Vivienda de participar en la administración del Fondo. La otra se vincula con la posibilidad de aumentar el piso que establece la ley, de modo de garantizar la continuidad de las obras que tienen ya iniciadas y las que se iniciarán.

El primer párrafo del artículo 8º, punto 1, del título IV, se refiere a la sustitución del artículo 2º de la ley 21.581. Dice así: "El organismo de aplicación de la presente ley será la Subsecretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental asistida por el Consejo Federal creado para dicha finalidad". La modificación que propongo es eliminar la expresión "asistida por", que convertiría al Consejo Federal en un órgano meramente asesor y reemplazarla por la conjunción "y". Quedaría redactado de la siguiente manera: "El organismo de aplicación de la presente ley será la Subsecretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental y el Consejo Federal creado para dicha finalidad". Esta es la primera modificación que propongo.

En el mismo artículo, punto 6, propongo una modificación que ha sido conversada en nuestro bloque. Donde dice: "el equivalente a 70 millones de dólares estadounidenses" debe decir: "el equivalente a 75 millones de dólares estadounidenses".

Además, deseo hacer otra propuesta para evitar confusiones, dado que la Comisión de la Vivienda de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires también coparticipa del Consejo Federal y de este fondo. El mismo punto 6 dice: "El régimen de financiamiento previsto en la presente para el Fondo Nacional de la Vivienda tendrá, para la parte que corresponda, una distribución automática entre los organismos ejecutores provinciales..." A partir de aquí propongo agregar lo siguiente: "...y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", para que no haya confusiones con la expresión referida al ámbito provincial.

Estas son las tres modificaciones que propongo.

Sr. Rodríguez Saá. — Aceptamos las modificaciones y solicitamos que antes del punto 6 se agregue el siguiente párrafo: "Incorpórase a continuación del artículo 32, el siguiente artículo: Artículo... —" y luego sigue el texto del punto 6.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Con respecto a la primera modificación a que hizo mención el señor senador por la Capital y de acuerdo con lo que anticipé en mi exposición, brindaré mi apoyo en cuanto a la sustitución de la expresión "asistido por" por la conjunción "y".

Esto es lo que ayer, ante el señor senador Vaca, otros señores senadores y asesores propusieron los miembros de la Comisión del Consejo Federal de la Vivienda.

En cuanto a la segunda de las peticiones que formuló el señor senador Vaca, estoy de acuerdo en que se incluya a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Pero conforme con lo que varios señores senadores hemos propuesto —tal el caso de los señores senadores Romero Feris, Posleman y yo— en lugar de 75 millones de dólares pedimos que se estipule 90 millones, en orden a las consideraciones que efectuamos oportunamente.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — No aceptamos la modificación referida a los noventa millones.

En cuanto a la propuesta de incorporación a continuación del citado artículo, hay una minuta de Diputados que incluye la corrección del error material y que acercaré a Presidencia en el momento oportuno.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Marín. — En cuanto al punto 6, dice así: "El régimen de financiamiento previsto en la presente para el Fondo Nacional de la Vivienda tendrá, por la parte que corresponda..." Propongo eliminar la expresión "para la parte que corresponda", a fin de que en la reglamentación no se tergiverse el sentido de la norma.

Concretamente, propongo dejar sin efecto la expresión "para la parte que corresponda".

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — La supresión de la frase no afecta el texto ni a la cláusula automática, que es un avance en favor del federalismo. De tal manera que aceptamos la propuesta.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar el artículo 8º con la modificación expresamente...

Sr. Posleman. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Posleman. — No me quedó en claro si la propuesta de 90 millones fue rechazada. ¿La de 75 millones fue aceptada?

Sr. Rodríguez Saá. — Sí.

Sr. Presidente (Menem). — Expresamente lo había manifestado.

Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Señor presidente: quiero aclarar —y siempre haciendo referencia a lo explicitado en la posición de la minoría— qué entendemos

que estos artículos 8º, 9º y 10, correspondientes al título IV, involucran modificaciones. Al respecto nosotros creemos que la metodología indicada es que se traten separadamente. Además, ha sido coherente con el cambio impositivo en la estructura del precio de los combustibles y pasa a ser ahora de los fondos del FONAVI. Por ello consideramos que debemos votarlo negativamente.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar el artículo 8º con las modificaciones expresamente aceptadas o propuestas por el señor miembro informante.

— La votación resulta afirmativa.

— Se leen y aprueban los artículos 9º y 10 del título IV.

— Se lee el artículo 11 del título V.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: he pedido la palabra para manifestar que la modificación introducida en cuanto a la derogación del régimen de jubilaciones especiales lo ha sido sólo a efectos de lograr una redacción más ajustada a la técnica jurídica.

Sr. Bravo Herrera. — Pido la palabra.

Sr. Trilla. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Bravo Herrera. — Señor presidente: como primera medida voy a solicitar que esta Cámara pase a sesión secreta porque me referiré, en primer término, a dos leyes secretas que se derogan, que son la 19.083 y la 19.173, que lógicamente hacen a cuestiones que no pueden ser dirimidas de manera pública.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — El reglamento prevé lo solicitado por el señor senador por Salta. Entonces, por respeto a él vamos a aceptar que el cuerpo pase a sesionar en forma secreta.

Sr. Gass. — ¿Las leyes son secretas o lo que va a manifestar el señor senador es secreto? Porque las leyes no son secretas; figuran en el Boletín Oficial. Entonces ¿son secretas las manifestaciones que desea realizar el señor senador?

Sr. Brasesco. — Secretos en reunión es de mala educación. (Risas.)

Sr. Rodríguez Saá. — Si el señor senador por Salta desea realizar consideraciones en secreto, ustedes pueden aceptarlo o no. ¿Qué quieren que haga?

Sr. Bravo Herrera. — Señor presidente: estoy esperando que el cuerpo pase a sesión secreta para hacer uso de la palabra. Pero parece que el público no quiere retirarse.

Sr. Presidente (Menem). — Esta Presidencia estaba escuchando las consideraciones de un senador de la bancada radical. No ha puesto a votación la moción formulada por el señor senador por Salta.

Sr. Bravo Herrera. — Eso es lo que estoy esperando.

Sr. Trilla. — Nosotros aceptamos, señor presidente.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración la moción formulada por el señor senador por Salta para que el cuerpo pase a sesión secreta.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Invito al público y al personal de la casa a retirarse del recinto de sesiones.

— Así se hace.

— Son las 6 y 53 del jueves 25 de julio de 1991.

— A las 7:

Sr. Presidente (Menem). — Continúa la sesión.

Prosigue en consideración el artículo 11 del título V.

Sr. Bravo Herrera. — ¿Continúa, señor presidente?

Sr. Presidente (Menem). — Sigue en uso de la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Bravo Herrera. — Señor presidente: el segundo párrafo del artículo que observo comienza a producir sus efectos desde el momento en que se promulga la ley, puesto que no rige para él el aspecto establecido para los otros dos grupos —el del párrafo primero y el del tercero— con respecto a la fecha establecida el 31 de diciembre de 1991.

Se trata de normas relacionadas con el personal de defensa nacional y de seguridad, que aunque se opere el retiro, siguen aportando el 11 por ciento. Esto quiere decir que van a dejar de hacer los aportes desde el momento en que se promulgue esta ley. Debido a ello aumentará el desequilibrio financiero de las cajas.

Con respecto al párrafo tercero, se deroga todo lo relacionado con lo que afecta al régimen previsional general vigente de la Municipalidad

de la Ciudad de Buenos Aires, la que se rige, como sabemos, por ordenanzas y decretos: ordenanzas del Concejo Deliberante y decretos del Departamento Ejecutivo. No se puede por medio de una ley nacional derogar las ordenanzas que rigen el sistema previsional en cualquiera de los aspectos del régimen municipal de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, esto está mal legislado.

En consecuencia, considero que este artículo, así como está redactado, no puede ser aprobado y debe ser suprimido.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Aceptaría parcialmente lo indicado por el señor senador. En cuanto al párrafo segundo, entiendo que la crítica que hace se funda en que él considera que al no tener la norma el plazo determinado del 31 de diciembre...

Varios señores senadores. — ¡No se oye!

Sr. Bravo Herrera. — Lo que digo es que los artículos se derogan desde el momento en que se promulga la ley. En cambio, los otros dos párrafos derogan determinadas leyes pero lo hacen a partir del 31 de diciembre. En consecuencia, respecto a estas leyes relacionadas con el personal de defensa nacional y de seguridad, se dejan de operar los descuentos para el personal retirado, porque el régimen de retiro o jubilación relacionado con este personal es distinto, es un régimen especial más que de privilegio. Por ejemplo, establece que se continúa efectuando el descuento jubilatorio. En consecuencia, según la manera como se sancione la ley, se dejaría de efectuar el descuento del 11 por ciento, y en ese caso se operaría un desequilibrio mayor en las cajas.

Sr. Rodríguez Saá. — En cuanto al segundo párrafo, aceptamos la crítica. Entonces, hay que agregar que también se derogan a partir de la misma fecha los artículos relativos a ese tema, con lo cual se aplica la misma regla derogatoria.

En cuanto a la observación de que una ley no puede derogar un decreto, no estamos de acuerdo puesto que el artículo 31 de la Constitución establece la pirámide jurídica y está claro que una norma superior como es la ley está por encima de una norma inferior, que es un decreto.

Sr. Bravo Herrera. — Pido la palabra.

Sr. Gass. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Ruego que primero terminen con todas las observaciones.

Sr. Bravo Herrera. — Señor presidente: con referencia a lo que acaba de manifestar el señor senador por San Luis, debó señalar que se trata de distintas jurisdicciones. Uno es el régimen nacional y otro es el de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que se nos está proponiendo sería parecido a que nosotros modificáramos leyes provinciales. El texto al que me estoy refiriendo hace mención a ordenanzas municipales y no a decretos.

Este planteo avala mi impresión de que el artículo ha sido redactado con apresuramiento. Es evidente que este texto contempla numerosas situaciones, y por lo tanto no puede ser aprobado tal como está. Creo que lo correcto es dejar en funcionamiento a la comisión bicameral para que recién después se realicen las modificaciones necesarias al régimen jubilatorio general y a los regímenes específicos.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Vaca. — Quiero respaldar la propuesta del senador Bravo Herrera en función de los argumentos que daré.

Comparto con todos los señores senadores la necesidad de proceder a efectuar una reestructuración profunda de todo el sistema previsional, partiendo de la situación de crisis en la que hoy se encuentra.

Uno de los elementos de esa crisis está constituido por todos esos regímenes especiales. Sin embargo, ellos no son los únicos componentes de esta situación.

Creo que la prudencia nos indica que primero debemos realizar las reformas necesarias y luego plantear las correspondientes derogaciones de los regímenes especiales. Es poco usual derogar primero y modificar después, sobre todo, como voy a intentar demostrar ahora, cuando se crean situaciones totalmente anómalas.

Si bien es cierto que en casi todos los casos tenemos un plazo, salvo en lo vinculado con el párrafo segundo del artículo que estamos tratando, que ahora se vería modificado, plazo que va hasta el 31 de diciembre de 1991 para que se expida la comisión bicameral, no es menos cierto que en ese lapso se pueden producir todas las situaciones que muy bien describiera el senador Brasesco durante su exposición.

Por razones políticas que todo el mundo conoce, es posible que lleguemos al fin de las sesiones ordinarias sin haberse producido el correspondiente dictamen y sin haber podido reunir a ambas Cámaras para aprobar las modificaciones que habrán de proponerse.

Por otra parte, ante el anuncio de que el Poder Ejecutivo vetaría este artículo, sería difícil que él habilitara este tema para ser considerado en sesiones extraordinarias, en razón de lo cual no podríamos tener las leyes definitivas antes del 31 de diciembre de este año.

Veamos ahora lo que puede ocurrir si se aprobara el texto que se está proponiendo.

En el primer párrafo del artículo que estamos considerando se cae en grandes incongruencias. Se deroga la ley 22.955. ¿Cuál sería la principal incongruencia que señalo? Hace poco tiempo esta misma Cámara sancionó la ley 23.895, y esta ley, que establece el régimen jubilatorio para quienes se hallen comprendidos en el Estatuto del Docente, incorpora a los docentes al régimen de la ley 22.955. Esto significa que al derogar la ley 22.955, muy probablemente estemos derogando también la ley 23.895.

Sr. Cass. — Es cierto. ¿Me permite...

— Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Menem). — Ruego a los señores senadores que dejen terminar su exposición al señor senador por la Capital. Si desean interrumpirlo, sírvanse utilizar esa vía.

Continúa en el uso de la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Vaca. — Señalo una de las incongruencias planteadas en este capítulo.

En el párrafo siguiente se derogan los artículos relativos al régimen de retiros y pasividades de la ley 13.018, que establece el régimen de retiro para el personal del Servicio Penitenciario Federal; de la ley 18.398, que es la Ley Orgánica de la Prefectura Naval Argentina; de la 19.101, Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas; de la ley 19.349, Ley Orgánica de la Gendarmería Nacional; y de la 21.965, Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina.

Este segundo núcleo de leyes no tiene, a diferencia del anterior, una base común como la ley 18.037, a la cual podrían ajustarse en el período transitorio, con lo cual los afiliados a estos regímenes se quedarían directamente sin régimen jubilatorio a partir del 31 de diciembre de 1991.

Finalmente, el párrafo tercero de este artículo 11 dice: "Queda asimismo derogada a partir del 31 de diciembre de 1991 toda otra norma legal que modifique los requisitos y/o condiciones establecidos por la ley 18.037 o el régimen previsional general vigente en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires". Aquí nos encontramos con que si no llegamos a tiempo con la norma, estaremos derogando, por ejemplo, las leyes

11.471, 13.483, 15.399, 21.641 y el decreto ley 25.331 de 1944, que establecen precisamente los regímenes para las pensiones de las obreras a domicilio, las lavanderas y costureras del Estado.

Estaríamos derogando también la ley 16.516 y la ley 20.733 y sus modificatorias, que establecen pensiones a quienes hayan obtenido u obtuvieren el primer premio nacional en ciencias, en letras, en artes plásticas o en arquitectura.

Estaríamos también derogando la ley 18.559, que establece pensiones a los precursores y beneméritos de la Aeronáutica.

Estaríamos derogando también la ley 19.036, que establece pensión a sobrevivientes de las primeras conscripciones del Ejército Argentino —1896— y de la Marina de Guerra Argentina, de 1898.

Estaríamos derogando también la ley 19.211, que establece pensión a ciudadanos argentinos que hayan obtenido u obtengan el Premio Nobel.

Estaríamos derogando también la ley 19.562, que establece pensión a personas afectadas por el mal de Hansen.

Estaríamos derogando también las leyes 21.236 y 23.702, que establecen pensiones a integrantes de las dotaciones anuales en las islas Orcadas del Sur en 1904 y 1949.

Finalmente, estaríamos derogando también la ley 23.891, que establece pensión a quienes hubieran obtenido u obtengan el primero, segundo o tercer premio en las olimpiadas internacionales.

Por estas razones, señor presidente y señores senadores, deberíamos reflexionar nuevamente sobre el tema.

Propongo que abordemos primero las modificaciones de todos estos regímenes en los términos planteados por el señor senador Bravo Herrera, que constituyamos la comisión bicameral —habría que hacer una modificación en el artículo correspondiente— y una vez que tengamos definidos los regímenes, procedamos a la derogación de las normas anteriores.

Sé que esto resulta una medida muy antipática frente a la enorme presión bajo la cual esta Cámara se encuentra considerando este tema. Estamos sometidos a diversos tipos de presiones. Hoy se han desarrollado manifestaciones de jubilados en la calle, quienes suponen que su situación precaria deviene casi exclusivamente de las jubilaciones de los miembros de esta Cámara.

También sé de la campaña existente en los medios de difusión que tiende a orientar a la opinión pública en este mismo sentido. Pero creo que nuestra responsabilidad de legisladores, por dolorosa e incomprensible que pueda resultar, está por encima de esta presión.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Me veo obligado a debatir con un compañero de bancada con quien ya discutí el tema en la reunión de bloque. También es cierto que en la misma los señores senadores quedaron facultados, en caso de no coincidir con nuestra opinión, para abstenerse en la votación o emitir su voto libremente.

Como el debate se produce en el recinto, debemos contestar. Esta ley tiene un sentido político que consiste en decirles a los jubilados que están viviendo una situación dramática que el Congreso argentino quiere derogar el régimen de jubilaciones de privilegio o especiales. Pero también tiene un sentido jurídico parlamentario y también político que radica en el hecho de que nosotros queremos hacer esto a través de un estudio sistemático, correcto y meduloso. Para eso formamos la comisión bicameral y nos pusimos como plazo el 31 de diciembre del presente año. Si hasta esa fecha dicha comisión no produjera dictamen alguno, comenzaría a regir esta regla derogatoria.

Al establecer la formación de la comisión bicameral y fijarnos un plazo, estamos pidiendo al Poder Ejecutivo que habilite este tema para el período de sesiones extraordinarias porque en caso contrario se produciría una serie de conflictos como los que plantea el señor senador.

No puede acoger los fundamentos del señor senador porque si creemos que al 31 de diciembre no estaremos en condiciones de emitir un dictamen y sancionar un proyecto de ley correcto que derogue las jubilaciones de privilegio y respete los derechos adquiridos con las garantías y requisitos necesarios, no podremos considerarnos buenos legisladores que nos guiamos por el bien común o el sentido correcto de nuestro accionar parlamentario.

Estamos en condiciones de reunir la comisión bicameral y sancionar una ley en la que todos los legisladores estemos de acuerdo y contenga los requisitos necesarios. Pero esta noche debemos derogar el régimen de jubilaciones de privilegio, porque éste es el sentimiento del Parlamento de terminar con este drama de los argentinos.

Con respecto a las reglas derogatorias, en el caso de que existiera un error al citarse la ley

19.083 en lugar de la 19.803, solicito a este Senado que facultemos a la Presidencia para que corrija el error material. Se trataría solamente de un error de este tipo que no invalidaría políticamente lo que estamos haciendo y que no nos quita legitimidad para establecer esta regla derogatoria.

Con respecto al segundo párrafo, proponemos el agregado "a partir del 31 de diciembre" y con relación a los documentos sobre la ciudad de Buenos Aires, ya los hemos dado anteriormente.

Por lo tanto, señor presidente, la comisión no acepta las modificaciones; sólo propone este agregado y que se faculte a la Presidencia a corregir el error material. Por otra parte, solicito que atento la hora, habiendo hablado ya las partes interesadas y no habiendo sido aceptadas las propuestas de modificaciones, procedamos a votar.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Posleman. — Voy a ser muy breve dado que ya se han expresado muchas reflexiones respecto de este tema.

Disiento con el señor presidente del bloque justicialista en el sentido de que este tema tiene un contenido político y estamos actuando de acuerdo a ello. En este momento siento que estamos tirando abajo todo un sistema en vez de refaccionarlo. Lo que la sociedad nos está pidiendo es la derogación de ciertas y determinadas jubilaciones, como lo expresara el señor senador Brasesco; piden la derogación de las jubilaciones más irritantes, que son las de los miembros de este Parlamento y las del Poder Ejecutivo.

En todo caso, procedamos con esa derogación y estudiemos el resto, introduciendo prudentemente las modificaciones que la sociedad espera.

Estamos derogando las jubilaciones especiales de la enfermera, el fogonero, el radiólogo y, en general, de quién trabaja en tareas insalubres de distinto tipo. La sociedad argentina ha aceptado estas jubilaciones; nadie las ha atacado. El problema pasa por otro lado. Yo creo que estamos cometiendo un error, y voy a acompañar al señor senador por la Capital en este tema.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Cass. — Señor presidente: no pensaba entrar en el debate. Desde ya adelanto que apoyo las manifestaciones del señor presidente del bloque justicialista. Ya discutimos este tema en la Cámara de Diputados de la Nación entre diputados de todos los bloques y senadores de

las bancadas justicialistas y radical. No sé por qué no se invitó a los senadores miembros de los bloques provinciales.

Queremos que todos sean iguales y que todas las leyes que establecen privilegios sean derogadas. No es cierto que si después del 31 de diciembre no hay una ley al respecto no habrá jubilaciones especiales; las habrá. Lo único que se les va a sacar es la movilidad a la que se refiere el artículo 14 bis de la Constitución: "la ley establecerá . . . jubilaciones y pensiones móviles . . .".

Yo tengo la misma sensibilidad que todos los señores senadores frente a las jubilaciones especiales que tienen los que trabajan en los pozos de petróleo o en minas de carbón, jubilaciones que no tienen las enfermeras ni los radiólogos de la provincia de Buenos Aires, quienes también deberían gozar de un régimen especial porque el rayo fulmina, quema.

La decisión que hemos tomado no tuvo el ánimo de perjudicar a ninguna institución. A algunos les parece que todos o la gran mayoría de los legisladores nos hemos puesto de acuerdo para derogar la ley de jubilaciones y retiros de las fuerzas armadas. Quien propuso la derogación de todas estas leyes en la reunión en Diputados a la que hice referencia fue un miembro de la Comisión de Previsión y Seguridad Social perteneciente al Partido Justicialista. En esa reunión se hizo hincapié en que no había detrás de esto otras cuestiones, y se dijo que tal vez tengamos que agradecerle al señor presidente de la República el haber dictado un decreto que no nos gustó pero que nos va a obligar a analizar rápidamente las jubilaciones especiales y las privilegiadas. Adviértase que estas palabras no son sinónimos: una cosa es una jubilación especial y otra, una privilegiada.

Yo no me siento un privilegiado con la jubilación que tengo porque me jubilé a los setenta años, con cuarenta de servicio, aportando el máximo como director de un hospital, embajador de la Nación y diputado de la Nación. Es decir que aunque tengo una jubilación especial no soy un privilegiado. Pero algunos comunicadores sociales han disparado sus cañones sobre nosotros con sus manifestaciones en radios AM y FM, porque en estos momentos somos los más vulnerables ya que parecería que lo que hacemos es defender a los legisladores. Y esto es absolutamente falso. No se estableció el 31 de diciembre para defender a los diputados nacionales que terminan su mandato el 10 de diciembre.

Hago un "mea culpa", señor presidente: en 1974, cuando era diputado nacional, votamos la

ley especial para los legisladores nacionales, y nos equivocamos en un detalle, ya que fijamos veinticinco años de actividad y de aportes, pero no pusimos límite de edad porque nadie pensaba que en 1976 iba a instalarse una dictadura mediante un golpe de Estado. Pensábamos que los diputados tendrían tiempo para perfeccionar la ley; sabíamos que era perfectible. Pero después se produjo el golpe de Estado y quedó esta ley de jubilación especial para los señores legisladores que ahora se va a modificar, de lo que no tengo ninguna duda. Nunca más se jubilará un diputado de la Nación que haya ejercido el cargo durante dos años con cuarenta años de edad. En este caso, no sé cómo podría juntar veinticinco años de aportes y servicios.

Todas estas leyes deben ser derogadas. Esto no va en contra de nadie en particular.

Establecemos el plazo del 31 de diciembre porque queremos ser sensatos y responsables. Si fijáramos un plazo de noventa días, por más que los señores senadores y diputados sean genios no podrían llegar a estudiar las cincuenta y dos leyes especiales. Entonces, aquí, pedirían una prórroga y seríamos dos veces cuestionados por la opinión pública: ahora y dentro de noventa días. No me gusta ser castigado y menos dos veces. Prefiero que hablen mal de mí, en tal caso, una sola vez. Daré todas las explicaciones necesarias.

Para no seguir insistiendo en este tema, nuestra bancada votará la propuesta del presidente del bloque justicialista.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Brasco. — Señor presidente: quiero hacer una aclaración.

Al abordar el tema de las jubilaciones especiales no se incluyen las correspondientes a los trabajadores del vidrio, al personal de la carne que trabaja en cámaras frías ni, en general, a las de quienes se ven afectados por razones de higiene o salubridad. Es necesario aclarar esto porque son regímenes que siempre serán especiales. Incluso, derivan de disposiciones de convenciones internacionales vinculadas con higiene y salubridad.

También es necesario dejar en claro que existen textos legales que autorizan al Poder Ejecutivo a disminuir por decreto los porcentajes de distintas jubilaciones.

Por ello, lamento que no se haya escuchado bien algunas manifestaciones efectuadas por el señor senador Britos. Estoy totalmente de acuerdo con lo expresado en cuanto a que ten-

dremos que trabajar duro. Tenemos que hacerlo y para eso estamos aquí.

Hecha esta pequeña aclaración en cuanto a los sistemas especiales de jubilación vinculados con actividades peligrosas o riesgosas y con temas de higiene y seguridad del trabajo, repito que acá no se encuentran incluidas y es necesario indicarlo.

Solicito que se vote como moción de orden la propuesta formulada por el presidente del bloque justicialista acerca de no aceptar las modificaciones planteadas.

Sr. Presidente (Menem). — Corresponde votar la moción de orden para que se pase directamente a votación.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — En consecuencia, si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 11 con la supresión del segundo párrafo propuesta por el señor senador por San Luis.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Rodríguez Saá. — Corresponde votar si se faculta a la Presidencia para que verifique el número correcto de la ley, si es 19.083 o 19.803 y lo corrija según corresponda.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

—Se enuncian y aprueban los artículos 12 al 15, título V.

—Se enunciará el artículo 16, título VI.

Sr. Trilla. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Señor presidente: el proyecto incluye la creación de un nuevo impuesto. En la exposición que hice al principio de esta sesión indiqué la sustitución completa de este título proponiendo la reimplantación del impuesto a los patrimonios, por considerarlo más efectivo. Los argumentos fueron dados en su momento, tal como figura en el Diario de Sesiones.

Voy a hacer llegar a la Secretaría, a efectos de su incorporación, el proyecto de reimplantación del impuesto a los patrimonios en sustitución de éste. Lo que queremos es que se aumente el tesoro del sistema.

Sr. Rodríguez Saá. — Aclaro que dentro de la reforma propuesta por nosotros está la nueva definición del título, que es la de "impuesto sobre los bienes personales no incorporados al proceso económico".

Sr. Presidente (Menem). — ¿Cuál es la respuesta respecto de la propuesta del señor senador por la capital, señor senador?

Sr. Rodríguez Saá. — Vamos a insistir en el dictamen que está puesto a consideración por nuestro bloque.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar el artículo 16.

— La votación resulta afirmativa.

Sr. Trilla. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Solicito que a esta altura se inserte el proyecto de impuesto sobre el patrimonio neto.

— Asentimiento.

— El texto de la inserción es el siguiente:

Proyecto de sustitución del Título VI

TÍTULO VI

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO NETO

Artículo... — Establécese un impuesto sobre el patrimonio neto de conformidad al siguiente texto:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales. Hecho imponible. Vigencia

Artículo 1º — Establécese con carácter de emergencia por el término de diez (10) períodos fiscales, a partir del 31 de diciembre de 1991, inclusive, un gravamen que se aplicará en todo el territorio de la Nación y que recaerá sobre el patrimonio neto al 31 de diciembre de cada año, integrado total o parcialmente por bienes situados en el país.

Sujeto

Art. 2º — Son sujetos pasivos del impuesto de este título las personas físicas y las sucesiones indivisas, cualquiera fuere el lugar de su domicilio o radicación, sea en el país o en el extranjero.

En el caso de patrimonios pertenecientes a los componentes de la sociedad conyugal, corresponderá atribuir al marido, además de los bienes propios, la totalidad de los que revisten el carácter de gananciales, excepto:

- Que se trate de bienes adquiridos por la mujer con el producto del ejercicio de su profesión, oficio, empleo, comercio o industria;
- Que exista separación judicial de bienes;
- Que la administración de todos los bienes gananciales la tenga la mujer en virtud de una resolución judicial.

Las sucesiones indivisas son contribuyentes de este gravamen por los patrimonios netos que posean al 31 de diciembre de cada año, en tanto dicha fecha quede comprendida en el lapso transcurrido entre el fallecimiento del causante y la declaratoria de herederos o aquella en que se haya declarado válido el testamento que cumpla la misma finalidad.

Bienes situados en el país

Art. 3º — Se consideran situados en el país:

- Los inmuebles ubicados en su territorio;
- Los derechos reales constituidos sobre bienes situados en él;
- Las naves y aeronaves de matrícula nacional;
- Los automotores patentados o registrados en su territorio;
- Los bienes muebles registrados en él;
- Los bienes muebles del hogar o de residencias transitorias, cuando el hogar o residencias estuvieran situados en su territorio;
- Los bienes personales del contribuyente, cuando éste tuviere su domicilio en él, o se encontrara en él;
- Los demás bienes muebles y semovientes que se encontraren en su territorio al 31 de diciembre de cada año, aunque su situación no revistiera carácter permanente, siempre que por este artículo no correspondiera otro tratamiento;
- El dinero y los depósitos en dinero que se hallaren en su territorio al 31 de diciembre de cada año;
- Los títulos, las acciones, cuotas o participaciones sociales y otros títulos valores representativos de capital social o equivalente, emitidos por entes públicos o privados, cuando éstos estuvieran domiciliados en él;
- Los patrimonios en empresas o explotaciones unipersonales ubicadas en él;
- Los créditos, incluidos debentures — con excepción de los que cuenten con garantía real, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el inciso b) — cuando el domicilio real del deudor esté ubicado en su territorio;
- Los derechos de propiedades científica, literaria o artística, los de marcas de fábrica o de comercio y similares, las patentes, dibujos, modelos y diseños reservados y restantes de la propiedad industrial o inmaterial, así como los derivados de éstos y las licencias respectivas, cuando el titular del derecho o licencia, en su caso, estuviere domiciliado en su jurisdicción al 31 de diciembre.

Los agentes diplomáticos y consulares, el personal técnico y administrativo de las respectivas misiones y demás funcionarios públicos de la Nación y los que integren comisiones de las provincias y municipalidades que, en ejercicio de sus funciones, se encontraren en el exterior, así como sus familiares que lo acompañaren, se considerará que se encuentran y están domiciliados en el país a los fines de este artículo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, también se considerarán situados en el país los demás bienes de las personas mencionadas en el párrafo anterior que se encontraren en el exterior en el lugar de desempeño de las funciones de éstos; esta disposición no se aplicará a los inmuebles y derechos reales sobre inmuebles situados en el exterior.

Se aplicará lo dispuesto en los dos párrafos precedentes, sólo en la medida en que las personas a que se refieren se beneficiaren de una exención en el exterior respecto de imposición análoga a la de esta ley, otorgada en razón de su condición personal.

Exenciones

Art. 4º — Estarán exentos del presente gravamen:

a) Los bienes pertenecientes a los miembros de las misiones diplomáticas y consulares extranjeras, así como su personal administrativo y técnico y familiares, en la medida y con las limitaciones que establezcan los convenios internacionales aplicables. En su defecto, la exención será procedente en la misma medida y limitaciones sólo a condición de reciprocidad.

Igual tratamiento será aplicable para miembros de las representaciones, agentes y, en su caso, de sus familiares, que actúen en organismos internacionales de los que la Nación sea parte, en la medida y con las limitaciones que se establezcan en los convenios internacionales respectivos;

b) Los títulos, bonos y demás títulos valores emitidos por la Nación, las provincias o municipalidades, cuando exista una ley general o especial que los declare exentos del presente o de todo gravamen;

c) Los bienes amparados por las franquicias de la ley 19.640;

d) Las acciones de cooperativas;

e) Las acciones, las cuotas partes de fondos comunes de inversión, las participaciones en cualquier tipo de sociedad y la titularidad del capital de empresas o explotaciones unipersonales;

f) La proporción del valor de los inmuebles rurales a que se refiere el artículo 2º de la ley 23.760, que se encuentre gravada por el impuesto establecido por dicha ley.

Autorízase al Poder Ejecutivo nacional para eximir del presente gravamen a los títulos, letras, bonos y demás títulos valores emitidos hasta la fecha y que se emitan en el futuro por la Nación, las provincias y las municipalidades.

CAPÍTULO II

Liquidación del gravamen Base imponible

Art. 5º — Se entenderá por patrimonio neto a la diferencia entre el valor de los bienes computables y el importe de las deudas en el país.

Valuación de los bienes

Art. 6º — Los bienes se valorarán de la siguiente manera:

a) Inmuebles:

1. Inmuebles adquiridos: al costo de adquisición o valor a la fecha de ingreso al patrimonio, se le aplicará el índice de actualización mencionado en el artículo 15, referido a la fecha de adquisición o de ingreso al patrimonio, que indique la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva para el mes de diciembre de cada año.

2. Inmuebles construidos: al valor del terreno, determinado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se le adicionará el costo de construcción, al que se le aplicará el índice de actualización mencionado en el artículo 15, referido a la fecha de finalización de la construcción, que indique la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva para el mes de diciembre de cada año.

El costo de construcción se determinará actualizando mediante el citado índice, cada una de las sumas invertidas desde la fecha de cada inversión hasta la fecha de finalización de la construcción.

3. Obras en construcción: al valor del terreno determinado de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1, se le adicionará el importe que resulte de actualizar cada una de las sumas invertidas, mediante el índice citado en los puntos anteriores, desde la fecha de cada inversión hasta el 31 de diciembre de cada año.

4. Mejoras: su valor se determinará de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 para las obras construidas o en construcción, según corresponda.

Cuando se trate de inmuebles con edificios, construcciones o mejoras, al valor atribuible a los mismos, determinado de acuerdo con los apartados 1, 2 y 4 precedentes, se le detraerá el importe que resulte de aplicar a dicho valor el dos por ciento (2%) anual en concepto de amortización.

Si los inmuebles no explotados directamente por sus titulares, estuvieran destinados a actividades forestales, frutícolas o similares, o que impliquen un consumo o agotamiento del bien, la reglamentación determinará el ajuste a practicar al valor obtenido de acuerdo con los párrafos precedentes mediante las normas de avalúo y, en su caso, las amortizaciones que correspondiere practicar.

El valor a computar para los inmuebles, de acuerdo con las disposiciones de este inciso, no podrá ser inferior al de la base imponible fijada al 31 de diciembre de cada año, a los efectos del pago de los impuestos inmobiliarios o tributos similares. Este

valor se tomará asimismo en los casos en que no resulte posible determinar el costo de adquisición o el valor a la fecha de ingreso al patrimonio.

No obstante, cuando el contribuyente del gravamen demuestre fehacientemente de acuerdo con las normas que al respecto dicte la Dirección, que el valor de sus inmuebles es inferior en más de un diez por ciento (10%) al valor determinado de acuerdo con las normas precedentes, dicho organismo deberá autorizar que este último valor se reduzca en la proporción correspondiente.

En los supuestos de cesión gratuita de la nuda propiedad con reserva del usufructo, el cedente deberá computar, cuando corresponda a los fines de este impuesto, el valor total del inmueble, determinado de acuerdo con las normas de este inciso.

- b) Automotores, aeronaves, naves, yates y similares: al costo de adquisición o construcción o valor de ingreso al patrimonio, se le aplicará el índice de actualización mencionado en el artículo 15, referido a la fecha de adquisición, construcción o de ingreso al patrimonio, que indique la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva. Al valor así obtenido se le restará el importe que resulte de aplicar el coeficiente anual de amortización que para cada tipo de bienes fije el reglamento o la Dirección General Impositiva correspondiente a los años de vida útil transcurridos desde la fecha de adquisición, finalización de la construcción o de ingreso al patrimonio, hasta el año, inclusive, por el cual se liquida el gravamen.

En el caso de automotores, el valor a consignar no podrá ser inferior al que establezca la Dirección, al 31 de diciembre de cada año, con el asesoramiento de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro.

- c) Los títulos públicos, acciones de sociedades anónimas y en comandita y demás títulos valores —incluidos los emitidos en moneda extranjera— que se coticen en bolsa o mercados: al último valor de cotización al 31 de diciembre de cada año o último valor de mercado a dicha fecha en el supuesto de cuotas partes de fondos comunes de inversión.

Los que no se coticen en bolsa se valorarán por su costo, incrementado, de corresponder, en el importe de los intereses, actualizaciones y diferencias de cambio que se hubieran devengado a la fecha indicada, excepto en el caso de acciones que no coticen en bolsa, para las que se estará a lo dispuesto en el párrafo siguiente.

Cuando se trate de acciones que no coticen en bolsa, se valorarán por su costo actualizado en función de la variación operada en el índice de precios al por mayor, nivel general, suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, entre el mes suscripción o adquisición de las acciones y el mes de diciembre del año al que corresponda la liquidación.

- d) Participaciones en el capital de cualquier tipo de sociedad —excluidas las acciones a que se refiere al inciso anterior— y titularidad del capital de empresas o explotaciones unipersonales: por el importe que se establezca para la participación o titularidad de acuerdo con el capital de la sociedad, empresa o explotación, a la fecha del último balance cerrado al 31 de diciembre del año al que corresponda la liquidación del gravamen. Si la fecha de cierre del ejercicio comercial no fuera coincidente con el 31 de diciembre el monto de la participación o de la titularidad del capital se actualizará aplicando la variación en el índice mencionado en el inciso anterior operada entre el mes de cierre del ejercicio comercial y el mes de diciembre del año al cual corresponda la liquidación del impuesto.

- e) Los depósitos y créditos en moneda extranjera y las existencias de la misma, de acuerdo con el último valor de cotización tipo comprador del Banco de la Nación Argentina al 31 de diciembre de cada año, incluyendo el importe de los intereses que se hubieran devengado a dicha fecha.

- f) Los depósitos y créditos en moneda argentina y las existencias de la misma por su valor al 31 de diciembre de cada año, el que incluirá el importe de los intereses y de las actualizaciones legales, pactadas o fijadas judicialmente que se hubieran devengado a la fecha indicada;

- g) Los bienes inmateriales (llaves, marcas, patentes, derechos de concesión y otros activos similares); por los costos de adquisición u obtención, o valor a la fecha de ingreso al patrimonio, a los que se aplicará el índice de actualización mencionado en el artículo 15 referido a la fecha de adquisición, inversión o de ingreso al patrimonio, que indique la tabla elaborada por la Dirección para el mes de diciembre de cada año.

De los valores determinados de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo precedente, se detraerá el importe que resulte de aplicar los coeficientes de amortización ordinaria que corresponden de conformidad con las disposiciones de la Ley de Impuesto a las Ganancias, correspondientes a los años de vida útil transcurridos hasta el 31 de diciembre de cada año;

- h) Objetos personales y del hogar, con exclusión de los anunciados en el inciso siguiente: por su valor de costo, el que no podrá ser inferior al dos por ciento (2%) de los restantes bienes computables y no computables.

- i) Objetos de arte, objetos para colección y antigüedades que se clasifican en el capítulo 99 de la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, objetos de adorno, uso personal y servicios de mesa en cuya confección se hubieran utilizado preponderantemente metales preciosos, perlas y/o piedras preciosas: por su valor de adquisición, construcción o ingreso al patrimonio, al que se le aplicará el índice de actualización mencionado en el artículo 15, referido a la fecha de adquisición, construcción o de ingreso al patrimonio; que indique la tabla elaborada por

la Dirección para el mes de diciembre de cada año.

- f) Otros bienes: por su costo de adquisición, construcción o valor a la fecha de ingreso al patrimonio actualizado por aplicación del índice mencionado en el artículo 15, referido a la fecha de adquisición, construcción o de ingreso al patrimonio que indique la tabla elaborada por la Dirección para el mes de diciembre de cada año.

Bienes computables y no computables

Art. 7º — Los bienes valuados de acuerdo con las normas del artículo anterior, se dividirán en bienes computables y no computables a los efectos de la liquidación del impuesto.

No serán computables:

- Los bienes exentos del gravamen;
- Los bienes situados con carácter permanente en el exterior.

Bienes situados en el exterior con carácter permanente

Art. 8º — Se entenderán como bienes situados con carácter permanente en el exterior:

- Los bienes inmuebles situados fuera del territorio del país;
- Los derechos reales constituidos sobre bienes situados en el exterior;
- Las naves y aeronaves de matrícula extranjera;
- Los automotores patentados o registrados en el exterior;
- Los bienes muebles y los semovientes situados fuera del territorio del país.

Respecto de los retirados o transferidos del país, se presumirá que se encuentran con carácter permanente en el exterior cuando hayan permanecido allí por un lapso de seis (6) meses en forma continuada con anterioridad al 31 de diciembre de cada año.

- Los títulos y acciones emitidos por entidades del exterior y las cuotas o participantes y otros títulos valores representativos del capital social de entidades constituidas o ubicadas en el exterior.
- Los depósitos en instituciones bancarias del exterior. Cuando tales depósitos hayan tenido origen en remesas efectuadas desde el país, se entenderá como radicado con carácter permanente en el exterior el saldo mínimo que arrojen las cuentas respectivas durante los seis (6) meses inmediatos anteriores al 31 de diciembre de cada año. A tales efectos, se entenderá por saldo mínimo a la suma de los saldos acreedores de todas las cuentas antes señaladas, en el día en que dicha suma haya arrojado el menor importe.
- Los debentures emitidos por entidades o sociedades domiciliadas en el exterior.
- Los créditos cuyos deudores se domicilien en el extranjero, excepto que deban ser considerados como radicados en el país por aplicación del inciso b) de este artículo. Cuando los créditos respondan a saldos de precios por la transferencia a título oneroso de bienes situados en el país al momento de la enajenación o sean consecuencia

de actividades desarrolladas en el país, se entenderá que se encuentran con carácter permanente en el exterior cuando hayan permanecido allí más de seis (6) meses, computados desde la fecha en que se hubieren hecho exigibles hasta el 31 de diciembre de cada año.

Deudas en el país

Art. 9º — Se considerarán deudas en el país:

- Las deudas garantizadas por derechos reales sobre bienes situados en el país.
- Las demás deudas, cuando el deudor esté domiciliado o radicado en el país.

Las deudas mencionadas precedentemente deberán incluir el importe de los intereses y de las actualizaciones legales, pactadas o fijadas judicialmente, que se hubieran devengado hasta el 31 de diciembre de cada año. El importe de las deudas en moneda extranjera, deberá convertirse de acuerdo con el último valor de cotización, tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina al 31 de diciembre de cada año.

En los casos de deudas contraídas por los componentes de la sociedad conyugal, el importe de las mismas deberá prorratearse en función de los bienes atribuidos a cada uno de los cónyuges, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º.

Prorrateo de las deudas

Art. 10. — Las deudas se deducirán de los bienes de acuerdo con las siguientes normas:

- Si los bienes fueran íntegramente computables para este gravamen, las deudas se restarán del importe de aquellos, considerándose patrimonio neto a la diferencia resultante;
- Si existieran bienes no computables para este gravamen, las deudas deberán prorratearse en función de los importes de los bienes computables y no computables, sin considerar dentro de éstos últimos a los situados con carácter permanente en el exterior. Se considerará patrimonio neto a la diferencia entre el valor de los bienes computables y la proporción de las deudas atribuíbles a los mismos.

Patrimonio neto sujeto a impuesto

Art. 11. — Para obtener el patrimonio neto sujeto a impuesto deberá deducirse del patrimonio neto determinado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo precedente, el impuesto a las ganancias devengado por el período fiscal al cual corresponde la liquidación del presente gravamen.

Mínimo exento

Art. 12. — No estarán alcanzadas por este gravamen las personas físicas domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo, cuyo patrimonio neto sujeto al impuesto sea igual o inferior a un mil millones de australes (₡1.000.000.000).

Escala de alícuotas

Art. 13. — El gravamen a ingresar surgirá de la aplicación sobre el patrimonio neto sujeto a impuesto de la siguiente escala de alícuotas para el año fiscal 1991:

Más de *	a *	Montos fin	Más de *	Menos de *
1.000.000.000	2.000.000.000	—	0.50	1.000.000.000
2.000.000.000	3.000.000.000	5.000.000	0.75	2.000.000.000
3.000.000.000	4.000.000.000	12.500.000	1.00	3.000.000.000
4.000.000.000	5.000.000.000	22.500.000	1.25	4.000.000.000
5.000.000.000	6.000.000.000	35.000.000	1.50	5.000.000.000
6.000.000.000	7.000.000.000	50.000.000	1.75	6.000.000.000
7.000.000.000	En adelante	67.500.000	2.00	7.000.000.000

Titulares en el exterior de bienes situados en el país

Art. 14. — Las personas de existencia visible domiciliadas en el exterior y las sucesiones indivisas radicadas en el extranjero, que resulten titulares directos de bienes en el país o que los posean de manera indirecta a través de participaciones en el capital social o equivalente de sociedades, empresas, establecimientos estables, patrimonio de afectación o explotaciones domiciliadas o, en su caso, radicados o ubicados en el exterior, quedan sujetos a las disposiciones del presente artículo. Sin perjuicio de ello, en el caso de créditos, sólo quedarán sujetos a sus disposiciones los contribuyentes mencionados que resulten titulares directos o indirectos de créditos, incluso los garantizados con derechos reales sobre bienes situados en el país, contra personas físicas domiciliadas en el país o sucesiones indivisas radicadas en el mismo.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, se presume de derecho, sin admitir prueba en contrario, que los bienes en él mencionados —incluidas las participaciones en el capital de empresas, sociedades, establecimientos estables y explotaciones constituidos, domiciliados, ubicados o radicados en el país— cuyos titulares sean sociedades, empresas, establecimientos estables, patrimonios de afectación o explotaciones domiciliados o, en su caso, radicados o ubicados en el exterior, pertenecen de manera indirecta a personas físicas domiciliadas en el exterior o a sucesiones indivisas allí radicadas.

A los fines indicados precedentemente, los contribuyentes del impuesto sobre los activos (ley 23.760 - título I), las sucesiones indivisas radicadas en el país y toda otra persona de existencia visible o ideal domiciliada en el país que tenga el condominio, posesión, uso, goce, disposición, depósito, tenencia, custodia, administración o guarda de bienes sujetos al impuesto que pertenezcan a personas de existencia visible o ideal, establecimientos estables, patrimonios de afectación, empresas o explotaciones unipersonales o a sucesiones indivisas domiciliadas o, en su caso, radicados o ubicados en el extranjero, deberán ingresar, como responsables sustitutos, y con carácter de pago único y definitivo, por los respectivos patrimonios al 31 de diciembre de cada año, el dos por ciento (2%) del valor respectivo de los bienes, determinado de acuerdo con las normas de la presente ley.

La obligación de actuar como responsable sustituto también corresponderá a los entes sociales, por las participaciones en su capital que pertenezcan, de manera directa o indirecta, a los sujetos pasivos del gravamen mencionado en el párrafo primero de este artículo. La actuación del ente como responsable sustituto excluye la prevista respecto de los responsables sustitutos mencionados en el párrafo precedente, sin perjuicio de la que corresponda a estos últimos como agentes de informa-

ción, de acuerdo con las normas que al respecto dicta la dirección.

También serán responsables del ingreso del impuesto, conforme al régimen de este artículo, las personas de existencia visible domiciliadas en el país y las sucesiones indivisas radicadas en el mismo, con respecto a los créditos, incluso los garantizados con derechos reales sobre bienes situados en el país, que contra los mismos poseen directa o indirectamente al 31 de diciembre de cada año, las personas de existencia visible domiciliadas en el exterior y las sucesiones indivisas allí radicadas. Los responsables obligados al ingreso del gravamen tendrán derecho a reintegrarse el importe abonado, incluso reteniendo y/o ejecutando directamente los bienes que dieron origen a aquél.

No corresponderá efectuar el ingreso establecido en este artículo si:

1. El titular inmediato de los bienes o de los créditos fuera una persona de existencia ideal de derecho público extranjero o internacional;
2. El titular inmediato de los bienes o de los créditos fuera una persona de existencia ideal exenta por las leyes nacionales o por convenios internacionales aplicables en la medida y por las limitaciones establecidas al efecto; o
3. El ingreso a realizar fuera inferior a trescientos mil australes (\$ 300.000).

CAPÍTULO III

Otras disposiciones

Art. 15. — A los efectos de esta ley, los índices de actualización deberán ser elaborados anualmente por la Dirección sobre la base de los datos relativos a la variación del índice de precios al por mayor, nivel general, que deberá suministrar el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

La tabla a que se refieren los incisos a), b), c), d), g), h) y j) del artículo 6° contendrá valores mensuales para los veinticuatro (24) meses inmediatos anteriores, valores trimestrales promedio —por trimestre calendario— desde el 1° de enero de 1975 y valores anuales promedio para los demás períodos, y tomará como base el índice de precios correspondiente al mes para el cual se elabora la tabla.

Asimismo, la Dirección actualizará anualmente, sobre la base de la variación experimentada en el índice mencionado en el presente artículo durante el período fiscal a que se refiere la liquidación del gravamen, los importes previstos en los artículos 12 y 14 y en los tramos de las escalas de los artículos 6° y 13.

Al sólo efecto de la actualización a que se refiere el párrafo anterior los importes y tramos de escala se considerarán como vigentes al 31 de diciembre de 1990.

Art. 16. — Facúltase a la Dirección a dictar las normas complementarias de información y percepción o retención del gravamen, que resulten necesarias para su aplicación e ingreso.

Art. 17. — El producido del presente gravamen tendrá igual destino que el previsto en el tercer artículo incorporado a continuación del artículo 70 de la Ley de Impuestos Internos, texto ordenado en 1979 y sus modificaciones.

Art. 18. — La aplicación, percepción y fiscalización del presente gravamen estará a cargo de la Dirección General Impositiva y se regirá por las disposiciones de la ley 11.683 (texto ordenado en 1978 y sus modificaciones).

Art. 19. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

— Se enuncian y aprueban los artículos 17 a 30, Título VI, y 31, Título VII.

— Se enuncia el artículo 32:

Sr. Trilla. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Hay una propuesta, tal como viene de Diputados, sobre el destino de los recursos de privatizaciones; se pretende que el 30 por ciento vaya al sistema de previsión. Tal como está redactado da la impresión de que es inconsistente porque no se dice cómo se aplica. Se indica que se destinan al régimen nacional de previsión social, pero tal como está redactado parecería que va al sistema directo de distribución. En definitiva, esa suma serviría para devolver al Tesoro nacional los importes que mensualmente tiene en calidad de déficit o de subsidios que suministra el régimen de previsión social.

Sr. Presidente (Menem). — Señor senador: se está refiriendo al artículo 31 que ha sido votado.

Sr. Trilla. — No, al artículo 32, salvo que se haya votado. El 31 responde todavía al título anterior.

Sr. Presidente (Menem). — El artículo 31 es del título VII, que dice "Destino de los recursos de privatizaciones".

Sr. Trilla. — Me refiero entonces al artículo 31, porque hay una modificación.

Sr. Rodríguez Saá. — Se está refiriendo al artículo 32.

Sr. Presidente (Menem). — Lo que se ha aprobado es el artículo 31 de la nueva numeración, que corresponde al 32 de la sanción de la Cámara de Diputados. Es decir que está haciendo consideraciones sobre el artículo 31 de la nueva numeración, que ya ha sido aprobado.

Sr. Trilla. — Me he equivocado en razón de la modificación de la numeración de los artículos. Entonces, solicito una reconsideración a efectos

de analizar lo que hemos redactado, y que también se incorpore en el Diario de Sesiones nuestra propuesta, porque la alteración de los artículos no me ha permitido continuar y así llegamos al 32 en este mamotreto, con las dificultades que hemos tenido durante toda la noche.

— Asentimiento.

— El texto de la inserción solicitada es el siguiente:

Destino de los recursos de privatizaciones

Art. 32. — Créase el Fondo de Capitalización del Régimen Nacional de Previsión Social, a cuya formación se proveerá con el treinta por ciento (30%) de los recursos brutos que se obtengan de las privatizaciones realizadas conforme a los mecanismos de la ley 23.696 o normas especiales, ya sea por ventas de activos, concesión, transferencia de bienes muebles, acciones o servicios, venta de inmuebles, tanto del Estado nacional como de empresas del Estado y organismos descentralizados.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, también se destinará al Fondo de Capitalización del Régimen Nacional de Previsión la totalidad de los recursos brutos que se obtengan por la venta de las acciones de propiedad del Estado nacional de las sociedades licenciatarias Norte S.A. y Sur S.A. de los servicios de telecomunicaciones a partir de la vigencia de esta ley, el banco fideicomisario — encargado de la venta — procederá a girar al Fondo de Capitalización del Régimen Nacional de Previsión Social el producido bruto de la venta encomendada, el que será depositado directamente en la cuenta del fondo que se crea. El término de duración del fideicomiso será el menor posible para el cumplimiento del objetivo.

El Fondo de Capitalización del Régimen Nacional de Previsión Social será reglamentado por el Poder Ejecutivo nacional, conforme a las siguientes pautas básicas:

- a) Que se determinen las políticas de inversión que permitan mantener el capital y asegurar niveles de rentabilidad razonables;
- b) Que el fondo se cree en jurisdicción ministerial con arreglo a la Ley de Ministerios, evitando la creación de nuevas unidades de estructura o entes especiales;
- c) Que el costo de administración no supere el 1% de las utilidades y dividendos generados por las inversiones que realice el fondo.

Sr. Rodríguez Saá. — Es cierto, el señor senador Trilla nos ha hecho llegar una reformulación sobre el destino de los recursos de las privatizaciones.

Nosotros insistimos en el texto presentado como dictamen de nuestro bloque. En el artículo nuevo correspondería el número 31 del título VII.

Más adelante, en lugar de la modificación de la ley 20.883, vamos a solicitar su derogación. Esa sería la diferencia.

Sr. Presidente (Menem). — Es el artículo 33...

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Rodríguez Saá. — Usted se refirió a que todo el título está reformulado. Yo le contesto que no acepto y que nuestro título se refiere al mismo tema, lo reformulamos...

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar el artículo 32...

Sr. Trilla. — A esta altura, ¿por qué no lo leemos? Ocurre que no sé cuál es el 32.

Sr. Presidente (Menem). — El 32 es un artículo nuevo por el cual se derogan los convenios de corresponsabilidad gremial.

Se va a votar el artículo 32.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Flombaum). — El artículo 33, con la modificación...

—Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Trilla. — ¿Han visto cómo el justicialismo se equivoca?

Sr. Rodríguez Saá. — La Secretaría se equivoca, no el justicialismo.

Sr. Cass. — ¿El secretario no es justicialista?

Sr. Rodríguez Saá. — La Secretaría es de todos.

Sr. Presidente (Menem). — A continuación se pasa a considerar el artículo 33. Ruego al señor miembro informante que lo lea en la forma en que es propuesto, para evitar confusiones.

Sr. Rodríguez Saá. — "Derógase la ley 23.883".

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. Bittel. — Quiero hacer una aclaración sobre algo que se me pasó, porque todo esto no está bien ordenado.

Pero necesariamente tengo que hacer algunas consideraciones sobre la ley 23.107. Aquí hay un artículo nuevo y no sé de qué se trata.

Sr. Cass. — ¿No se trata de la ley 20.155?

Sr. Bittel. — Habló de la ley 23.107.

El artículo 32 dice: "Asimismo se derogan los artículos referidos al régimen sustitutivo de aportes y contribuciones a la seguridad social de la ley 23.107".

Quiero aclarar un punto. Creo que esto no tiene sentido por cuanto esa ley se dicta como consecuencia de largos reclamos de los productores algodoneros del Chaco y del Norte argentino.

Piensen que, como dije, esto es consecuencia de largos reclamos y, finalmente, cuando se sanciona en 1974 un convenio sobre corresponsabilidad gremial, es la primera vez en la historia del Chaco que se jubilan los cosecheros y entre ellos algunos aborígenes.

En 1979, durante el gobierno de facto, se deja sin efecto ese convenio de corresponsabilidad gremial. Cuando se restablece el gobierno republicano en 1983, presento un proyecto de ley a instancia de los chaqueños, incluso apoyado por el señor senador León.

Al respecto deseo aclarar lo siguiente. Creo que habría que tomarse un tiempo, porque si la derogación va a ser al 31 de diciembre no tiene sentido hacerlo ahora. Y yo les aseguro una cosa: esto es como consecuencia de una necesidad de los productores algodoneros del Chaco. Quiere aclarar aquí que cuando entregan el algodón en las desmotadoras o en las cooperativas se les descuenta una cifra que ha sido fijada por las autoridades previsionales de la Nación. Entonces no son los colonos los que deben, porque cuando entregan su algodón hacen el aporte correspondiente: los que deben son las cooperativas o los acopiadores. No podemos echarle la culpa al colono sino que debemos hacerlo con los responsables que obran como agentes de retención. Si ayer se hubiera tratado esto en el bloque, con toda claridad lo hubiera defendido, porque no es otra cosa que resguardar los intereses legítimos de los algodoneros y de todos los trabajadores del algodón del Chaco.

Quiero que se contemple esta posibilidad y le pido al señor presidente de mi bloque que lo haga, con el compromiso de estudiar a fondo este asunto y proponer la modificación que las circunstancias aconsejen.

Sr. Rodríguez Saá. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Me permito aclarar que el artículo 32 ya fue votado.

Sr. Bittel. — En el apunte que obra en mi poder no figura el artículo 32. Sólo dice "artículo nuevo". Por eso estaba esperando la respectiva lectura, luego de la cual iba a plantear esta cuestión.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: quiero aclarar que la regla derogatoria de la ley 23.107 que tienen citados se refiere a lo siguiente:

Subsiste para los productores algodoneros el régimen provisional del pago de las asignaciones familiares y la posibilidad de aportar a las cajas previsionales. Lo que sucede es que antes se aportaba con algodón, mediante una tarifa fijada, y ahora se aporta como lo hace cualquier empleado o trabajador.

Sr. Bittel. — Si me permite el señor presidente de mi bloque, le diré que si hasta ahora no se recaudaba nada, a partir de ahora no se recaudará ni un centavo. Precisamente el señor senador León puede testimoniar lo que digo. Es una reglamentación que tiene origen en los inicios de la historia del Chaco.

Sr. Rodríguez Saá. — (Que se llame al testigo!) (Risas.)

Sr. Bittel. — Como el señor senador León y yo somos del Chaco conocemos esta situación más que el señor presidente de mi bloque. Le aseguro a usted que no va a lograr ningún depósito. Cuando el productor quiera retener al cosechero su aporte jubilatorio al día siguiente se va como obrero a otra chacra.

Por eso pido que este tema lo dejemos de lado, especialmente porque involucra a las provincias del Chaco, Formosa, Corrientes y todo el norte de Santa Fe.

Sr. Presidente (Menem). — Le aclaro al señor senador por el Chaco que si aspira a lograr esta modificación en primer lugar deberá formular la moción de reconsideración del artículo, porque ya ha sido aprobado.

Sr. Bittel. — Entonces, solicito la reconsideración de este artículo. Pero aclaro que en la copia del proyecto de ley que tengo sobre mi pupitre no figura el número de artículo.

Sr. Rodríguez Saá. — Las reglas derogadas también lo son a partir del 1º de enero de 1992. O sea que la comisión puede contemplar la posibilidad de una modificación.

Sr. Bittel. — ¡Pero el Chaco a mí no me lo va a perdonar!

— Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Rodríguez Saá. — Aquí dice "Deróganse a partir del 1º de enero de 1992".

Sr. Bittel. — En la copia del señor senador por San Luis figura como artículo 33 y no como artículo 32.

Sra. Gurdulich de Correa. — Están mal los números.

Sr. Presidente (Menem). — El señor senador por el Chaco retira su moción de reconsideración?

Sr. Bittel. — Sí.

Sr. Presidente (Menem). — Está en consideración el artículo 33.

Solicito al miembro informante que reitere el texto con el que quedaría redactado.

Sr. Rodríguez Saá. — "Derógase la ley 23.883."

Sr. Trilla. — Estamos de acuerdo.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 33, según el texto leído por el señor senador por San Luis.

— La votación resulta afirmativa.

— Sin observaciones, se enuncian y aprueban los artículos 34 y 35, título VI.

— Se enuncia el artículo 36, título IX.

Sr. Trilla. — Por Secretaría no se ha dicho de qué se trata.

Sr. Cass. — ¡Nosotros ya terminamos con el proyecto!

Sr. Brasesco. — Si se trata de la ley de procedimientos...

Sr. Presidente (Menem). — Recién ahora entramos al capítulo 1º del título sobre el procedimiento tributario.

Sr. Secretario (Flombaum). — Título IX. Procedimiento tributario - Ley 11.683. Artículo 36.

Sr. Presidente (Menem). — Hemos aprobado el artículo 35, que dice: "La presente exención tiene efecto desde la vigencia de la ley 23.898".

Está en consideración el título IX. Procedimiento tributario - Ley 11.683. Artículo 36.

Sr. Romero Feris. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — En primer término, tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — Señor presidente: para ser sencillo y simple solicito que se inserten a esta altura las modificaciones que proponemos a este título. En concreto, consideramos que tiene que ser tratado cuando se considere la reformulación de las leyes impositivas que se encuentran en la Cámara de Diputados.

Por eso vamos a votar negativamente este título.

Asesoramiento.

—El texto de la inserción solicitada es el siguiente:

La autoridad económica pretende introducir modificaciones a la ley de procedimiento, las que en principio, cabe sostener que deben ser propuestas y analizadas dentro de la reforma del sistema tributario que se halla en consideración actualmente en la Cámara de Diputados de la Nación y no dentro de un proyecto coyuntural, cuya intención manifiesta es aportar fondos al sistema previsional, harto desequilibrado al presente.

No sólo hay razones de oportunidad sino de legítima cautela; un somero repaso de las distintas reformas tributarias ratifica este criterio.

Sería más que necesaria una evaluación del impacto de las sucesivas reformas efectuadas en los últimos diez años y creo que veríamos crecer la ineficiencia del organismo recaudador a medida que crecen sus atribuciones. No será el momento preguntarnos si la ineficiencia de dicho organismo no reconoce otras causas que la supuesta carencia de atribuciones.

En otros términos, no deberíamos preguntarnos si las sucesivas ampliaciones y modificaciones en la estructura de los impuestos no implican un sistema tributario poco administrable.

También deberíamos inquirir si la atribución de mayores facultades, que de suyo implican formas discrecionales difícilmente sostenibles en un estado de derecho, apuntan a la eficiencia del organismo recaudador.

Seguramente, una reflexión reposada, profunda, desvinculada de la necesidad de ofrecer lo que ahora se ha dado en llamar "señales" para ofrecer en cambio la realidad de una sensible menor evasión, nos llevaría a transitar el camino de la simplificación tributaria, la administración sistemática, el uso de la informática y el respeto al contribuyente concebido como cliente del sistema y no como su sirviente.

Concebirlo como cliente significa venderle el mejor servicio, prestarle la mejor atención y no presionar en cada contribuyente un delincuente tributario potencial.

Sin embargo, aun señalando la falta de oportunidad de estas reformas procedimentales, el examen de las mismas permite destacar también elementos positivos.

En ese sentido, aceptamos la mayor amplitud en el tratamiento que se otorga al procedimiento indiciario respecto de que se carezcan de comprobantes o manifiesten no tener o no llevar libros de contabilidad, cerrando el paso a argucias procesales. Nos parece aceptable siempre que sea indicativo y admita prueba en contrario, resguardándose el debido proceso.

No nos parecen aceptables, en cambio, las presunciones que sin admitir prueba en contrario establecen que cuando se verifican operaciones marginales durante un periodo se extiendan sus consecuencias a otro periodo mayor por ser demasiado amplia, y no reflejarse criterios de racionalidad, estacionalidad de ventas, magnitud del negocio, habitualidad, características del tipo.

En cuanto a la obligación de llevar comprobantes y contabilidad de acuerdo con la naturaleza del negocio o actividad, facultando a la Dirección General Impositiva, a delimitar tales obligaciones atendiendo al pequeño tamaño económico.

Aquí pensamos que es el legislador quien debe contemplar los supuestos básicos y no dejar este espacio legislativo al poder administrador, es el Poder Legislativo quien debe valorar en las actividades unipersonales, microempresas, profesionales, y efectuar excepciones o adecuaciones si correspondiere.

También se establece la entrega integral del *software*, en un agregado a la ley, que nos parece que hace realmente operativa la norma. Poco vale tener a disposición el *hardware* y el *software* si simultáneamente no se dispone del sistema operativo, los lenguajes, los utilitarios, los listados de programas, las carpetas de diseño de archivos, en otras palabras, de nada sirve habilitar la entrada al laberinto si no nos dan el plano del laberinto.

Una última reflexión cabe al novedoso sistema de clausura que se pretende. Hay pena y luego procedimiento y la ausencia del procedimiento previo a la aplicación de la pena es inconstitucional; para nosotros esto es esencial.

Los actuales procedimientos determinan que el 50% de los casos caiga ante el análisis del cuerpo jurídico de la Dirección General Impositiva y sobre esta mitad del universo, otro cincuenta por ciento cae luego de la contestación de vista en sede administrativa y sólo un escaso número de casos es penado en instancia judicial.

Cabe aquí preguntarse si falla la norma o falla la organización, cabe aquí preguntarse si actualmente el 90% de los casos no es objeto de pena, si no asistiremos al 90% de penas que caen luego del debido proceso, aun cuando admitimos un supuesto fáctico distinto y acotado en la norma que se propone.

Cabe también reflexionar si puede comprometerse un *quantum* de sanciones a priori por parte de la administración y si no constituye prejuiciamiento tal actitud.

En todo caso, somos partidarios de actuar dentro del estado de derecho, si la policía no puede aprehender al delincuente, no es derogando garantías que vamos a mejorar su accionar, lo vamos a hacer dotándola de infraestructura eficaz, de agentes bien entrenados y bien pagos. Esto también vale para la administración tributaria.

Reiteramos una opinión firme: la administración tributaria debe ser eficaz y eficiente, ello se logra con un sistema tributario simple y estable que sea administrado por una organización profesional bien paga, en la que cada agente sepa e internalice de qué lado del mostrador está, y que asiente su accionar en modernos programas sistemáticos de auditoría tributaria que aseguren el cumplimiento voluntario de la obligación con el fisco, con una presencia real que origine riesgo cierto al evasor.

El sistema que hoy se pretende instaurar trae fundada duda sobre sus consecuencias, en la opción entre libertad y seguridad no dudamos en elegir la libertad, optar por el segundo de los términos ha sido un error que en el pasado cercano nos quitó la libertad y la seguridad. Creemos que hay alternativa y que la discusión profunda del sistema tributario en el marco de un pacto

fiscal será una instancia superadora de una iniciativa, que admitimos bien intencionada pero inoportuna y peligrosa.

Sr. Presidente (Menem). — La Presidencia pide a los señores senadores que ya hayan hecho consideraciones sobre este tema que traten de limitarse a proponer la modificación concreta, por razones prácticas.

Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Romero Feris. — Dejo formulada mi oposición al artículo 36 del título IX, donde se otorgan facultades a los inspectores para efectuar clausuras en los comercios por diez días.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Por las razones que he anticipado en mi exposición, también formulo oposición al artículo 36.

Sr. Presidente (Menem). — Se va a votar el artículo 36 en la forma propuesta por el miembro informante.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración el artículo 37.

Sr. Trilla. — ¿De qué trata, señor presidente?

Sr. Presidente (Menem). — Dice: "Las disposiciones de este título regirán a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

—El artículo 38 es de forma.

Sr. Presidente (Menem). — Queda sancionado el proyecto de ley.¹ Vuelve a la Honorable Cámara de Diputados.

9

MANIFESTACIONES

Sr. Brasesco. — Tenemos que continuar con la consideración de los órdenes del día, señor presidente. (Risas.)

Sr. Presidente (Menem). — Siguiendo con el plan de labor, corresponde considerar las preferencias que se habían acordado.

Sr. Benítez. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Benítez. — Voy a referirme al proyecto de comunicación mediante el cual propongo la sus-

cripción de un convenio entre Ferrocarriles Argentinos y la Dirección General de Fabricaciones Militares, que se tramita bajo el número 457/91.

(Lee) "Como ya dijéramos en oportunidad de sancionarse la ley que lleva el número 23.809, que contempla la privatización de Altos Hornos Zapla, aquella luz que brilla entre cerros a 1.700 kilómetros de esta Capital y que en algún momento constituyera una esperanza para la Nación y para la provincia de Jujuy, y que fuera realidad por algún período, corre el serio peligro de apagarse para siempre, con la anulación de aquella esperanza y realidad, y con la presencia del fantasma que presagia la desaparición de la progresista ciudad de Palpalá, que acoge a 40 mil habitantes."

Sr. Presidente (Menem). — Si me permite, señor senador por Jujuy, la Presidencia se permite advertirle, por razones de economía de trámite, que nos hemos quedado sin quórum y que considera que no va a poder votarse en la sesión de hoy su iniciativa porque no vamos a conseguir el número suficiente de legisladores debido a las horas de trabajo que ya llevamos.

Si el señor senador lo desea, podríamos intentar el llamado mediante el timbre, aunque de todas formas considera que va a ser imposible reunir el quórum necesario.

Esto es a los efectos de evitar que su exposición termine con una votación que no merece.

Sr. Benítez. — Entonces, lo dejo librado al criterio de la Presidencia.

Sr. Cass. — Por respeto al señor senador Benítez, nosotros nos quedamos.

Sr. Rodríguez Saá. — Solicito que se tenga presente el pedido del señor senador y se intente el llamado por medio del timbre. Si no hubiera quórum, que la iniciativa del señor senador por Jujuy se tenga como primer tema a ser tratado en la próxima sesión cuando se consideren las preferencias o los asuntos sobre tablas.

Sr. Posleman. — Juntamente con los otros temas.

Sr. Presidente (Menem). — Vamos a llamar por cinco minutos.

Puede continuar con su exposición, señor senador por Jujuy.

—Se llama para formar quórum.

¹ Ver el Apéndice.